

Derecho Procesal Civil I

Aníbal Ruíz Armijo



UCA

•calidad•prestigio•tradición



**Facultad de
Ciencias Jurídicas**

Coordinación de
Educación a Distancia

Teléfonos: 2278 6509 ó 2278 3923-27, ext. 1296 E-mail: robleto@ns.uca.edu.ni

**20
10**

347.05
R-934

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
COORDINACION DE EDUCACION A DISTANCIA

ASIGNATURA:
DERECHO PROCESAL CIVIL I

PROFESOR:
Aníbal Ruíz Armijo

D-35

Ingreso.	31-03-11
Comprado a	—
Donado por	F.C.S. (E.D.)
Precio	Reg. 201196945

Managua, Nicaragua
JULIO, 2010



52066

UNIDAD I

LA ACTIVIDAD PROCESAL

1.- Conceptos de hecho procesal y de acto procesal

En el proceso se pueden dar hechos y actos que producen efectos jurídicos sobre la relación procesal. El proceso está compuesto por una cadena de hechos y actos procesales, no es un fenómeno que nace y se extingue inmediatamente.

Se denominan *actos procesales* a aquellos en que interviene la voluntad expresa o tácita de las partes (demanda, contestación, desistimiento, etc.).

Al respecto dice Devis Echandía: *“Los actos procesales son simples actos jurídicos que inician el proceso u ocurren en el, o son consecuencia del mismo para el cumplimiento de la sentencia con intervención del juez”*.

Por su parte Chiovenda expresa: *“Llámanse actos jurídicos procesales los que tienen importancia jurídica respecto de la relación procesal, o sea los actos que tienen por consecuencia inmediata la constitución, conservación, desarrollo, modificación o definición de la relación procesal”*.

Son *hechos procesales* los que no tienen su origen en la voluntad de las personas, como la muerte de una de las partes o de sus apoderados, la pérdida del expediente, etc.

Para Chiovenda, los actos procesales se distinguen:

a) De los actos jurídicos de los sujetos procesales que no tienen influencia alguna inmediata en la relación procesal, aunque pueden estar dirigidos a su fin o influir en el resultado del proceso y, por ello mismo, pueden estar regulados por la ley procesal. Por ejemplo, el otorgamiento de un poder judicial, la retirada de un documento, los actos de Derecho privado relativos al objeto del pleito, como el pago.

b) De los actos no jurídicos realizados por los sujetos procesales, como las deducciones doctrinarias de las partes; pero los hechos deducidos por las partes deben ser tenidos en cuenta por el juez para admitirlos como existentes o inexistentes.

c) De los actos jurídicos realizados con motivo del proceso por personas que no son sujetos de la relación procesal, como los realizados por los testigos, peritos y Ministerio Público.

2.- Clasificación de los actos procesales

Conforme al sujeto del cual proceden, los actos procesales se dividen en:

a) Actos de las partes. Son los realizados por las partes interesadas (actor y demandado) y los terceros que intervienen en la relación procesal. Por ejemplo, demanda, contestación, tercería de dominio, etc.

b) Actos del órgano. Son los que realiza el juez o tribunal en el proceso, v. gr. las resoluciones, inspecciones, etc.

c) Actos de terceros que no forman parte de la relación procesal, como testigos, peritos, etc.

Desde el punto de vista de la marcha del proceso, los actos procesales se clasifican en:

a) Actos de iniciación del proceso. En virtud de estos actos se da inicio al proceso. Ejemplos, la demanda, el emplazamiento, traslado y la contestación del demandado.

b) Actos de impulsión del proceso. Son los que hacen avanzar el proceso por sus distintas etapas hasta su final.

c) Actos probatorios. Se refieren a la presentación, aceptación y recepción de las pruebas.

d) Actos decisorios. Son las resoluciones que deciden cuestiones de fondo. (Sentencia definitiva).

e) Actos de terminación del proceso. Estos actos pueden provenir de las partes, como el desistimiento de la demanda o del recurso, o del juez, como la sentencia definitiva.

Couture hace la clasificación siguiente:

a) Actos del tribunal:

i) Actos de decisión, por los cuales se resuelve el proceso, sus incidencias, o bien se impulsa el proceso.

ii) Actos de comunicación, en virtud de los cuales se notifica a las partes los actos de decisión.

iii) Actos de documentación, en virtud de los cuales se documentan en forma escrita los actos de las partes, del tribunal o de los terceros.

b) Actos de las partes:

i) Actos de obtención, los destinados a lograr del tribunal la satisfacción de la pretensión hecha valer en el proceso. Pertenecen a esta categoría los actos de petición, los de

afirmación y los de prueba. Los primeros se refieren a lo principal del asunto (pretensión de la demanda, pretensión de la defensa) o a una cuestión de procedimiento (pedir que se admita un escrito o se rechace una prueba). Los segundos se refieren a los alegatos de las partes que suministran al tribunal los hechos y datos de Derecho. Los terceros se refieren a la incorporación al proceso de objetos (documentos) o relatos (declaraciones reconstruidas en el proceso escrito mediante actos) idóneos para crear en el tribunal la persuasión de la exactitud de las afirmaciones.

ii) Actos dispositivos, entre los que señala el allanamiento, el desistimiento y la transacción. En virtud del primero el demandado se somete lisa y llanamente a la pretensión del actor y comprende el reconocimiento de la verdad de los hechos y del derecho invocado por el actor. El segundo consiste en la renuncia del actor al proceso o del demandado a la reconvencción. La tercera implica una doble renuncia o desistimiento.

3.- El negocio procesal

Según Chiovenda son aquellos cuyos efectos se encuentran ligados por la ley a la voluntad de las partes. Tales son, en general, las declaraciones de voluntad unilaterales o bilaterales que la ley admite en el proceso, como dirigidas a constituir, modificar y extinguir derechos procesales. Son negocios procesales, por ejemplo, el nombramiento de árbitros, el nombramiento de secuestre, el término extraordinario de prueba en el juicio ejecutivo (art. 1742 párr. 3º Pr.), etc.

Los negocios procesales bilaterales se dividen en *acuerdos procesales* y *contratos procesales*. Los primeros se dan cuando es necesario que las partes actúen de acuerdo, por ejemplo, el nombramiento de secuestre. Se señalan como contratos procesales la venta forzada, la adjudicación en pago y la prenda pretoria.

4.- Requisitos de los actos procesales

Para que los actos procesales produzcan sus efectos, es necesario que concurren los requisitos siguientes:

a) Capacidad y competencia. las partes deben tener capacidad para ser parte y capacidad para obrar procesalmente. El juez debe estar dotado de jurisdicción y competencia para conocer del asunto. Por otra parte, no debe estar implicado o ser objeto de recusación.



b) Voluntad. La reserva mental, la falta de seriedad de la declaración y la simulación no caben en el proceso. La voluntad declarada prevalece sobre la voluntad real. La Corte Suprema de Justicia expresa que no pueden existir procesos simulados.

Los autores no admiten, con carácter general, que el error, la violencia y el dolo invaliden los actos procesales, salvo cuando así lo permita la ley o cuando se trate de la confesión y de la transacción¹.

El art. 32 Pr. anula los actos practicados por el juez bajo intimidación o fuerza: *"Son nulos todos los actos judiciales practicados bajo la intimidación o la fuerza. Los jueces y tribunales que hubiesen cedido a la intimidación o a la fuerza, tan luego como se vean libres de ella, declararán nulo todo lo practicado, previa información justificativa de los hechos; y promoverán al mismo tiempo la formación de causa contra los culpables. Cualquiera que sea el tiempo que dure la intimidación o la fuerza, no se puede por ello alegar prescripción. Las partes pueden también pedir o alegar la nulidad de lo actuado dentro de un mes de haber cesado la intimidación o la fuerza"*.

Alsina expone: *"Para que el acto civil sea válido, es necesario que sea ejecutado con discernimiento, intención y libertad. Por consiguiente, son nulos los actos realizados por incapaces o cuando fueren hechos por ignorancia, error, dolo, fuerza o intimidación (ver arts. 1833 y 2447 C.). Tratándose de actos procesales, basta recordar que ellos deben emanar de las partes o del juez, cuya capacidad es un presupuesto de la relación procesal, para que se advierta la imposibilidad de que la falta de discernimiento constituya un vicio de la voluntad. El error de hecho en que hubiera incurrido el actor en la demanda o cualquiera de las partes en la interposición de un recurso, no podría ser invocado válidamente para evitar los defectos del acto. Lo mismo puede decirse en cuanto al dolo y a la violencia, porque son incompatibles con la naturaleza del proceso. El dolo no es, en definitiva, sino el error provocado en cuanto determina*

¹ Prieto Castro estima que los vicios del consentimiento como el error, el dolo, etc., no pueden invalidar los actos de las partes y solo tienen tratamiento especial la transacción y la confesión.

Pallares señala, como requisito del acto procesal, una voluntad no viciada por error, violencia, fraude o mala fe.

Guasp expone que *"la regla conocida opera ahora en el sentido de limitar la eficacia del error o ignorancia como vicio del acto, tal como se admite en el Derecho Privado, a los casos en que expresamente lo reconozca la ley y dentro del ámbito de éste reconocimiento, p. ej., la posibilidad de que la ignorancia de la falsedad de un documento permita la apertura de un recurso de revisión"*.

la ejecución o inejecución de un acto en un supuesto inexistente; y la violencia es la presión física o moral que impide la libre manifestación de la voluntad; pero en el proceso las partes no pueden ser negligentes en la apreciación de las circunstancias que fundan su decisión, y la presencia del juez impide que una de ellas actúe bajo la presión de la otra. Por eso se establece que, en principio, en materia procesal no son aplicables las disposiciones del Código Civil sobre los vicios del consentimiento. Pero se admite, sin embargo, su aplicación cuando el elemento intencional influye en la eficacia del acto mismo. La confesión, por ejemplo, aunque fuera prestada cuando se hizo por error o bajo violencia. El error del juez en la apreciación de la prueba no invalida la sentencia como acto jurídico, pero, si se refiriese a las formas, sería una causa de nulidad. En el proceso simulado, el dolo de las partes autoriza al juez a rechazar la acción o tomar las providencias necesarias para evitar sus efectos. No puede por ello sentarse un principio general, sino que debe resolverse la cuestión de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso”.

c) Licitud del acto. El acto debe estar dentro del ámbito de la licitud.

d) Forma del acto. Los actos procesales tienen señalada una forma con que deben aparecer externamente. Por ejemplo, la demanda debe llenar los requisitos del art. 1021 Pr. y ss., las sentencias definitivas debe redactarse de conformidad con el art. 436 Pr., etc.

5.- Nulidades procesales

Los actos procesales también tienen que llenar requisitos de fondo y forma para su eficacia y validez. Son muchas las clasificaciones que se han hecho, pero por la naturaleza de este trabajo no haremos un estudio de todas ellas.

Una primera clasificación, prestando conceptos del Derecho Civil, distingue entre inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa. El Código de Procedimiento Civil no formula esta clasificación, ni ninguna otra. Para desarrollarla hay que seguir en lo que fuere aplicable el Código Civil, que distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa, incluyendo en la primera a la inexistencia.

La inexistencia es la ausencia total de un elemento esencial para que surja el acto. No se refiere a la eficacia del acto, sino a su vida misma. No solo carece en absoluto de efectos, sino que sobre él nada puede construirse: Por ejemplo, la sentencia dictada por una persona que no es juez; la falta de



capacidad para ser parte; las actuaciones realizadas en hora y días inhábiles; la demanda o recurso presentados sin firma; o el recurso interpuesto fuera de los plazos legales. La inexistencia no es convalidable, ni produce efecto alguno y se puede declarar aun de oficio. Es la más grave de las irregularidades procesales.

Para Couture, *“el acto inexistente (hecho) no puede ser convalidado, ni necesita ser invalidado”*.

En los actos absolutamente nulos falta un elemento esencial o la forma indispensable del acto, o la omisión de un trámite esencial. Es una irregularidad grave, pero a pesar de ello surge el acto y vive mientras no se declare su nulidad, lo cual puede hacerse aun de oficio. Por ejemplo: la demanda presentada por un absolutamente incapaz; la omisión del emplazamiento; la omisión de la sentencia definitiva de primera instancia; etc. La nulidad absoluta es insubsanable si la norma violada es de orden público y subsanable si no lo es. Para Prieto Castro, es convalidable cuando la norma es dispositiva y no lo es cuando es imperativa. En el Derecho Civil, la nulidad absoluta no es convalidable; pero en el contrario, en el Derecho Procesal puede o no ser convalidable, según lo expresado. En esto consiste la diferencia entre la nulidad absoluta del Derecho Civil (no convalidable) y la nulidad absoluta del Derecho Procesal (convalidable o no convalidable, según la distinción señalada).

Couture define esta situación diciendo que *“la nulidad absoluta no puede ser convalidada, pero necesita ser invalidada”*.

En los actos relativamente nulos, existe un vicio en los elementos esenciales de los actos, o la omisión de un trámite no esencial, pero el acto puede adquirir eficacia. Por ejemplo: irregularidades del Poder de Representación; falta de alegatos orales, etc. Sólo puede ser declarada a petición de parte y es convalidable expresa o tácitamente. Si del acto relativamente nulo se deriva un efectivo perjuicio, podría ser conveniente invalidarlo, pero si no trae perjuicio, o si aún trayendolo la parte perjudicada cree más conveniente no impugnarlo, el acto relativamente nulo puede subsanarse. El consentimiento tácito o expreso de la parte perjudicada purga el error y convalida el acto. Sus efectos subsisten hasta el día de la invalidación, y si esta no se produjera, la ratificación da firmaza definitiva a esos efectos.

Couture señala que *“el acto relativamente nulo admite ser invalidado y puede ser convalidado”*.

Se distingue también entre requisitos de fondo y requisitos de forma. Son de fondo: la capacidad para ser parte, la capacidad procesal, la competencia, etc. Son de forma: la firma de la sentencia, el uso del idioma español, etc.

De esta distinción surge la separación entre errores *in procedendo* y errores *in iudicando*, aunque estos propiamente dan lugar a la sentencia injusta por aplicación inadecuada de la ley sustantiva. Estos dos tipos de error dan fundamento a la distinción entre la casación de forma y la casación de fondo.

El proceso está estructurado por un conjunto de actos debidamente ordenados, sometidos a requisitos formales y de fondo. La forma (sobre todo en el proceso escrito), el fondo, el tiempo y el espacio desempeñan un papel fundamental en su validez y eficacia.

El acto tiene que estar revestido de la forma legal (petición escrita en papel sellado e idioma español), debe realizarse en días y horas hábiles, en el lugar donde tiene su competencia el juez o tribunal, ante juez competente por razón de la materia, cuantía y jerarquía, por persona con capacidad para ser parte y procesal, en tiempo oportuno (la apelación fuera del término no tiene eficacia), etc.

La nulidad del acto procesal se puede producir por varias causas: falta de requisitos de fondo y de forma, omisión de un trámite, alteración del orden de los trámites.

Debido a la propia naturaleza y fines del proceso, se han sentando varios principios, reglas y orientaciones, con relación a las nulidades:

a.- Principio de especificidad

De acuerdo con este principio, no puede existir nulidad sin una ley que la establezca expresamente. La nulidad es una sanción establecida por haberse violado la ley y como tal es de Derecho estricto, por lo cual no cabe aplicarse por analogía. Dentro de este orden de ideas, en caso de duda el juez debe declarar la validez del acto. Los arts. 56 francés y 156 italiano lo consagran expresamente.

Este principio se opone al sistema en virtud del cual toda violación a la ley procesal trae aparejada la nulidad, el que se asemeja al sistema de la nulidad por la nulidad misma. En el Código Canónico (denominado Reglamento Gregoriano) se dispone: "*Toda contravención a la ley de procedimiento produce la nulidad del acto*".



La Corte Suprema de Justicia ha dicho, con base en el principio de especificidad, que no toda violación de la ley procesal produce nulidad. El principio de especificidad resulta un poco difícil de consagrar, pues es incómodo señalar la nulidad en la ley caso por caso. Por eso la doctrina ha formulado otro sistema, en virtud del cual se deja al arbitrio del juez declarar o no declarar la validez de un acto con vicios formales o de la totalidad del procedimiento.

b.- Principio de perjuicio

Sin perjuicio no hay nulidad. Si los derechos o defensas no resultan afectados, carece de objeto declarar la nulidad. Con ella no se obtendría nada provechoso para la buena marcha de la justicia, como no fuese el atraso en la conclusión del proceso. Por ejemplo, no se causaría ningún perjuicio si el acreedor, en vez de seguir la vía ejecutiva corriente, demanda en juicio ordinario; si en lugar de concederse seis días de traslado para alegatos de conclusión, se conceden ocho; etc.

La Corte Suprema de Justicia ha seguido este principio. que nace como una reacción al sistema de la nulidad por la nulidad misma, de origen romano, explicable en una época donde se imponía el simbolismo y el formalismo.

c.- Principio dispositivo

El principio dispositivo tiene amplia aplicación. Generalmente las nulidades sólo pueden ser pedidas por las partes, aunque se dan nulidades que pueden declararse de oficio y no admiten convalidación, como sucede con los presupuestos procesales.

La convalidación puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando explícitamente se pide la convalidación, y es tácita cuando antes de pedirla se hace otra gestión o no se impugna oportunamente (preclusión). También desaparece la nulidad cuando las partes vuelven a realizar el acto nulo.

d.- Cuándo no debe decretarse la nulidad

No debe decretarse la nulidad por ausencia de requisitos formales, cuando el acto ha logrado su fin: Si el demandado confiesa que recibió oportunamente la cédula de notificación, carece de utilidad declarar la nulidad porque no se hizo constar la hora, fecha y lugar, ya que la notificación cumplió su cometido de darle a conocer al demandado oportunamente la existencia de la resolución.

En el Proyecto de Couture se establece que *“La anulación no procede, aun en los casos establecidos en los incisos*

precedentes, si el acto, aun siendo irregular, ha logrado el fin a que estaba destinado”.

e.- La nulidad de un acto puede acarrear la de otros

Como el proceso está constituido por un conjunto de actos encadenados, la nulidad de un acto puede acarrear la nulidad de los subsiguientes a él supeditados, pero no a los que carecen de vinculación con el anulado. Por ejemplo, declarado nulo el emplazamiento, caen todos los actos posteriores a él.

f.- Unidad de la relación

La relación que surge del proceso es unitaria, pues los actos de que está compuesto se encuentran unidos entre sí por un vínculo común. Estos actos se desprenden del acto inicial del proceso: la demanda. Como consecuencia: si se anula la demanda, se anula toda la relación procesal; la demanda es uno de los actos que fija las facultades de decisión del juez, por lo cual, si se extralimita, es nula la sentencia; generalmente, en el momento de la demanda se determina la existencia de los presupuestos procesales.

g.- No todo vicio que producen nulidades

Existen vicios que no producen nulidades, sino simplemente irregularidades procesales.

h.- Quién puede pedir la nulidad

La nulidad sólo puede ser pedida por la persona a favor de la cual se establece, salvo que se trate de una irregularidad grave, como la falta de presupuestos procesales, en cuyo caso se puede declarar de oficio o a petición de parte.

i.- Quién no puede pedir la nulidad

La persona que ha dado lugar a la nulidad por culpa o dolo no puede pedir la nulidad, por aplicación del precepto *nemo auditur propriam turpitudinem allegans* (nadie puede alegar su propia torpeza).

El proceso no puede ser un instrumento de sorpresas. El que causó la nulidad no tiene derecho a optar entre pedir la nulidad si le conviene o quedarse callado si sus intereses así lo requieren. La buena fe y la lealtad en el proceso se oponen a esa forma de proceder.

6.- Medios de impugnación las nulidades procesales

En nuestro Derecho Procesal no existe un recurso específico para impugnar las nulidades, como sucede en otras

legislaciones, si no que son varios los medios que concede la ley, a saber:

a.- Incidentes. Se sujetan a las reglas establecidas en el art. 237 Pr. y siguientes, dados para los incidentes en general.

b.- Remedios de reposición y recurso de apelación. Se puede usar cualquiera de los dos (arts. 448, 449, 450 Pr.; arts. 458-502 y 2002-2045 Pr.).

c.- Excepciones dilatorias. Están reguladas en el art. 811 Pr. y siguientes. Por ejemplo, excepción de ineptitud de libelo, excepción de ilegitimidad de personería; etc.

d) Casación en la forma. Este es un recurso extraordinario que tiene por objeto anular todo o parte del proceso, por causales taxativamente establecidas en la ley (art. 2058 Pr.).

e) Juicio ordinario con acción de nulidad. La cosa juzgada purga o convalida todas las nulidades, tal como lo confirma la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia².

Pero es posible que frente a nulidades de extrema gravedad se permita anular un juicio ya concluido (por ejemplo, un juicio en que no se emplazó al demandado)³. En este supuesto se ha condenado a una persona sin ser oída ni vencida en juicio.

Por supuesto, si el juicio no ha terminado, el demandado puede pedir en cualquier estado de la causa su nulidad, por medio del denominado “*incidente perpetuo*”.

² “No puede alegarse en un nuevo juicio irregularidades cometidas en la tramitación de otro” (S. 11:00 a.m. de 15 de junio de 1961, B.J. pág. 20527).

³ “La nulidad de actuaciones judiciales no puede reverse en un nuevo juicio. Esto no quiere decir que en el caso de que la parte no hubiere sido notificada en absoluto ni intervenido en el juicio que se considera fenecido, carezca del derecho de entablar por separado las acciones tendientes a que se declare que la sentencia no puede pararle perjuicio” (S. 08:00 a.m. de 30 de marzo de 1957, B.J. pág. 18481, Cons. II); “Puede demandarse la nulidad de un juicio cuando no ha existido proceso por falta de cumplimiento de los presupuestos procesales, como en el caso de falta de emplazamiento del demandado” (S. 09:45 a.m. de 6 de abril de 1965, pág. 105, Cons. II; B.J. págs. 11529 y 18481).

UNIDAD II

EL PROCESO DE DECLARACIÓN. EL OBJETO DEL PROCESO

Sección I

El Derecho de Acción

1.- Concepto de derecho de acción

De acuerdo a Couture, el vocablo “acción” es utilizado en la doctrina y en la ley con por lo menos tres significados distintos:

a.- Como sinónimo de derecho material: es el sentido que se le da a esta palabra cuando se dice que “*el actor carece de acción*”, o se trata de hacer valer por el demandado la *exceptio sine actione agit*, que significa que el actor carece de un derecho material efectivo que el órgano jurisdiccional deba tutelar. Es la acción en el sentido romano clásico.

b.- Como sinónimo de pretensión: es el sentido más usual, y se utiliza cuando se habla de “*acción fundada*” o “*acción infundada*”, “*acción real*” o “*acción personal*”. Al usar el término “acción” en este sentido, lo que se trata de expresar es que el actor pretende tener un derecho material válido, en nombre del cual promueve la demanda ante el órgano jurisdiccional.

c.- Como sinónimo de facultad legal de provocar la actividad de los órganos jurisdiccionales del Estado: es el sentido que se le da al referirse al poder jurídico que posee todo individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales en demanda de amparo a una pretensión, sin que el hecho de que dicha pretensión sea fundada o infundada afecte ese poder jurídico de accionar.

Partiendo de tales consideraciones, Couture conceptualiza el derecho de acción como “*el poder jurídico que tiene todo sujeto de Derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión*”.

Desde este punto de vista, el derecho de acción lo tiene el particular actor frente al Estado para que éste le otorgue la tutela jurídica, y frente al particular reo para que soporte y se someta a esta tutela, sin que importe si la pretensión del actor a esa tutela jurídica es fundada o no.

Para Couture, pues, el derecho de acción así definido es una forma específica del derecho general de petición del que

están investidos constitucionalmente los ciudadanos⁴. Para este autor, la acción judicial no difiere en su esencia, del derecho de petición ante la autoridad estatal: Este es el género, aquella es la especie.

2.- Naturaleza jurídica de la acción

2.1.- Teoría clásica (privatista) de la acción

Esta teoría tiene su origen en el Derecho romano, y es defendida por los civilistas. Sitúa a la acción dentro del campo del Derecho privado: la acción sería el mismo derecho material invocado en juicio, en vista de haber sido violado.

Celso definió a la acción como el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido (*ius persequendi in iudicio, quod sibi debeatur*). Las *Institutas* de Justiniano tomaron la definición de Celso, agregándole la frase “o lo que nos pertenece”, para comprender también a los derechos reales. Así completa dice la definición romana clásica nos dice que “la acción es el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido o lo que nos pertenece”.

El concepto clásico de acción tiene una estrecha conexión con el concepto de lesión de los derechos materiales, pues la acción es uno de los derechos que nacen del hecho de haberse producido la lesión de un derecho: no cumplida la realización de la voluntad concreta de la ley mediante la ejecución voluntaria de la prestación por el obligado, el acreedor puede obtener la realización de esa voluntad por otro camino: el proceso.

Esta conexión entre la lesión del derecho material y el derecho de acción llevó a que la doctrina clásica considerara a la acción como el poder, inherente al derecho material mismo, de reaccionar contra la lesión, es decir, a considerar a la acción como el mismo derecho material en su estado dinámico, y no estático.

Dentro de esta teoría, algunos autores consideran que la acción se distingue del derecho sustantivo, aunque ha nacido de él. Savigny, por ejemplo, consideraba al derecho de acción como un derecho nuevo nacido del hecho del incumplimiento por el deudor de la prestación.

⁴ Art. 52 Cn.: “Los **ciudadanos** tienen derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas, en forma individual o colectiva, a los Poderes del Estado o a cualquier autoridad; de obtener una pronta resolución o respuesta y de que se les comunique lo resuelto en los plazos que la ley establezca”.

En ambos casos se confundían injustificadamente dos derechos absolutamente distintos entre sí: el derecho a reclamar al particular obligado el cumplimiento de la prestación debida, y el derecho de pedir al Estado que tutele este reclamo.

El Código de Procedimiento Civil nicaragüense sigue esta teoría:

a.- El art. 813 Pr. define la acción como el medio legal de pedir en juicio lo que se nos debe.

b.- El art. 814 Pr. clasifica las acciones con base en la naturaleza de los derechos materiales invocados: preceptúa que las acciones son reales o personales: real es la que nace de los derechos reales, y personal es la que nace de los derechos personales.

2.2.- Doctrina germánica del derecho de acción (teoría de la autonomía de la acción)

Las teorías modernas sobre el Derecho Procesal tuvieron su origen en Alemania a mediados del siglo XIX, en el marco de la renovación que los estudios de Derecho Público sufrieron por causas históricas, culturales y políticas que facilitaron la consideración del proceso como campo de una función y una actividad estatal, en las cuales prevalece y domina la personalidad de los órganos jurisdiccionales y la finalidad de su actuación, que no es tanto satisfacer intereses particulares de los litigantes como verificar la realización de la voluntad objetiva de la ley.

En el tema concreto del derecho de acción, esta renovación arrancó con la polémica sostenida entre Windscheid y Muther (1856) acerca de la naturaleza jurídica de la *actio* (acción) del Derecho romano y la *anspruch* (razón de pedir o pretensión) del antiguo Derecho germánico.

Muther sostenía la identidad de ambas figuras, mientras Windscheid afirmaba que existían entre ambas diferencias fundamentales. Termina la polémica con el reconocimiento por parte de Muther de que ambas figuras (acción y pretensión) eran diferentes.

Esta disputa teórica tuvo como resultado que se logró diferenciar claramente entre el derecho a reclamar una prestación determinada (*anspruch* o pretensión) que es un derecho eminentemente privado, y el derecho a pedir la tutela de los órganos jurisdiccionales del Estado (*actio* o acción), que

es un derecho público y autónomo que tiende a la realización de la ley mediante el proceso.

Ya en su libro *La Teoría de la Acción Romana y el Moderno Derecho de Obrar* (1857), Muther sostuvo que la acción es un derecho público subjetivo, dirigido primeramente contra el Estado para obtener una sentencia favorable y después contra el demandado para que cumpla una prestación no satisfecha.

Posteriormente Wach apoya a Muther y aporta nuevas ideas en su *Manual de Derecho Procesal* (1885). En dicha obra, Wach demostró que la acción, al sustituir a la falta de realización que de la ley debía hacerse mediante el cumplimiento voluntario de la prestación por el obligado, y más generalmente, en los numerosos casos que tiende a la realización de una voluntad concreta de la ley tal que no debe ni puede ser realizada de otra manera que en el proceso, es un derecho por sí mismo, distinto del derecho material invocado por el actor.

Nace así la *teoría de la autonomía de la acción*, concebida ésta como un derecho independiente del derecho sustantivo, de carácter público y dirigido contra el Estado y no contra el particular obligado.

Esta teoría es apoyada por Bülow en *Las Excepciones y los Presupuestos Procesales* (1868), quien junto con Wach es estimado el fundador del procesalismo moderno. Sin embargo, Bülow señala, equivocadamente, que a diferencia del derecho sustantivo (que es anterior al juicio) el derecho de acción nace con la demanda judicial concreta.

Posteriormente, la doctrina procesal advirtió que el derecho de acción es un derecho subjetivo abstracto, poseído aun por aquellos que carecen de derechos sustantivos concretos que tutelar, y que se concede se tenga o no tenga un derecho material que reclamar, pues se considera que el derecho de acción es un derecho a tener un proceso y a obtener una sentencia, que puede ser favorable o desfavorable.

Esta es hoy la teoría más aceptada, siendo los principales puntos de acuerdo de la doctrina los siguientes:

i.- Que el derecho de acción es un derecho autónomo, independiente del derecho sustantivo;

ii.- Que el derecho de acción es un derecho abstracto y no un derecho concreto;

iii.- Que el derecho de acción es un derecho de carácter público dirigido directamente contra el Estado y no contra el demandado;

3.- Elementos de la acción

Tres son los elementos de la acción, la especificación de los cuales es la parte más importante de la demanda: las partes, el objeto y la causa de pedir.

a.- Las partes. Dos son las partes en la acción: el actor (sujeto activo) y el demandado (sujeto pasivo), pero debe advertirse que los sostenedores de la autonomía de la acción consideran al Estado (en cuanto verdadero destinatario de la acción) como el sujeto pasivo. Las partes procesales deben estar perfectamente determinadas⁵.

b.- El objeto. El objeto de la acción es el derecho material cuyo reconocimiento, declaración o ejecución se pretende (petitum de la demanda)⁶.

El objeto *inmediato* de la acción es la actuación de la ley, la cual en las acciones singulares se presenta individualizada en un determinado acto que se pide realizar al órgano jurisdiccional (por ejemplo, condena a restituir el inmueble; condena a pagar una cantidad dada en mutuo, etc.).

El objeto *mediato* de la acción es la cosa o hecho a cuya adquisición o cumplimiento está coordinada la actuación de la ley (cosa o hecho pedido). En los casos citados el dominio es el objeto de la acción y el inmueble reclamado es la cosa pedida, el mutuo es el objeto de la acción, y el pago del dinero es la cosa pedida.

c.- La causa de pedir. La causa de la acción es el hecho, acto o contrato que da nacimiento al derecho material cuyo reconocimiento, declaración o ejecución se pide. Por regla general se subdivide en dos elementos: una relación jurídica entre las partes y un estado de hecho contrario al Derecho (*causa petendi*)⁷.

Estos tres elementos tienen gran importancia para determinar los requisitos de la cosa juzgada y la litispendencia, y oponerlas como excepción.

⁵ Art. 1021 incs. 1 y 2 Pr.

⁶ Art. 1021 inc. 3 Pr.

⁷ Art. 1021 inc. 4 Pr.

4.- Potestades que comprende el derecho de acción

El derecho de acción concede varias facultades o potestades a las partes:

- a.- El poder introductivo.
- b.- El poder impulsivo.
- c.- El poder consultivo.
- d.- El poder defensivo.
- e.- El poder cautelar (instrumental para preparar la eventual condena, y final para ejecutar la sentencia de condena).
- f.- El poder impugnativo.
- g.- El poder ejecutivo.
- h.- El poder recusativo.

5.- Clasificación de las acciones

Como se explicó al comienzo de esta Unidad, el vocablo “acción” está entendido en las leyes y en la práctica forense tanto para expresar que el actor pretende tener un derecho material válido, en nombre del cual promueve la demanda ante el órgano jurisdiccional, como en su sentido propio de poder jurídico que posee todo individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales en demanda de amparo a una pretensión.

El primero es un criterio material, que sigue las consideraciones de la teoría clásica de la acción y se apoya en distinciones propias del Derecho Civil.

El segundo es un criterio procesal que se apoya en las consecuencias que el ejercicio del derecho de acción produce dentro del proceso, y se apoya en distinciones propias del Derecho Procesal.

Ello da pie a que puedan clasificarse las acciones desde un punto de vista civilista y desde un punto de vista procesalista.

5.1.- Clasificación de las acciones desde el punto de vista civilista o clásico

Según el derecho material que protegen, se dividen en: a) acciones reales, personales y mixtas; b) acciones principales y accesorias; c) acciones petitorias y posesorias y; d) acciones directas e indirectas.

a.- Acciones personales, reales y mixtas

Son acciones personales las que protegen derechos personales (obligaciones). Estas se ejercen directamente sobre la persona que debe cumplir una prestación (dar, hacer o no hacer). Por ejemplo, la acción de pago del dinero dado en mutuo, la acción de pago del precio de la venta a plazo, la acción de condena al pago de daños y perjuicios por actos ilícitos, la acción de alimentos, y la acción de repetición por pago indebido.

Son acciones reales⁸ las que protegen los derechos reales (derechos que se ejercen directamente sobre las cosas muebles o inmuebles). Estas acciones no se tienen contra personas determinadas, sino contra cualquiera que perturbe o impida el goce del derecho real de que se trate. Ejemplos: acción reivindicatoria, la acción confesoria, la acción negatoria, la acción de inmisión en la posesión, etc.

Son acciones mixtas aquellas en las que simultáneamente se ejerce un derecho real y un derecho personal vinculados entre sí. En el Derecho romano se consideraban mixtas la acción de deslinde (*finium regundorum*), la acción de partición de herencia (*familiae erciscundae*) y la acción de división del dominio (*comuni dividundo*).

La Corte Suprema de Justicia sustenta el criterio de que cuando en una demanda se sustenten acciones que sean personales por sí solas y otras meramente reales, no pueden amalgamarse para constituir una acción mixta, pero que cuando se ejercen a la vez una acción real y otra personal que sean conjuntas, se está en el mismo caso que si se ejerciera una acción mixta⁹, y que son mixtas las acciones que tienen por objeto la resolución, rescisión o reducción de una enajenación de inmueble o la constitución de derechos reales sobre los mismos¹⁰.

b.- Acciones principales y accesorias

Son acciones principales las que protegen un derecho material independiente. Por ejemplo: la acción reivindicatoria, la acción de cobro del precio de una venta, la acción para cobrar el precio del mutuo, etc.

Son acciones accesorias las que protegen un derecho accesorio. Por ejemplo: la acción prendaria y la acción

⁸ Del latín *res* (cosa).

⁹ S. 09:00 a.m. del 4 de junio de 1925. B.J., pág. 5047.

¹⁰ S. 11:00 a.m. del 24 de noviembre de 1936, B.J., pág. 9479.

hipotecaria, las que necesitan para su existencia de un derecho principal, el cumplimiento del cual garantizan.

c.- Acciones petitorias y posesorias

Son acciones petitorias las acciones que garantizan el derecho de dominio sobre una cosa (acción reivindicatoria). En ellas se prueba y discute el dominio.

Son acciones posesorias las protegen el derecho de posesión sobre una cosa (interdictos posesorios). En ellas solamente se prueba y discute la posesión.

A esta clasificación responde el art. 932 Pr., que dice: "*El juicio civil es posesorio o petitorio, ya tenga por objeto la conservación o restitución de la cosa, ya verse sobre la propiedad de una cosa*".

d.- Acciones directas e indirectas

Son acciones directas las que ejerce el titular activo del derecho material reclamado, sea que actúe personalmente en el proceso, sea que lo haga a través de un representante convencional, legal o judicial.

Son acciones indirectas las que ejerce un tercero en su propio interés, en vez de ejercerla el titular del derecho material reclamado. Por ejemplo, la acción subrogatoria u oblicua del art. 1870 C.

5.2.- Clasificación de las acciones desde el punto de vista procesalista o moderno

Atendiendo a la pretensión deducida por el actor, las acciones se clasifican en: acciones de condena, acciones declarativas, acciones constitutivas, acciones ejecutivas, acciones precautelares y acciones perjudiciales.

a.- Acciones de condena

Por medio de las acciones de condena se pretende que el demandado sea obligado a realizar una prestación que puede consistir en un dar, un hacer o un no hacer. Ejemplo: Pedir que se condene al reo a pagar una indemnización (dar), pedir que el reo otorgue una escritura de compraventa (hacer), pedir que el reo se abstenga de construir un muro (no hacer).

b.- Acciones declarativas

Con estas acciones, llamada también meramente declarativa, se pretende la obtención de la certeza acerca de la existencia o inexistencia de un derecho o relación jurídica.

Ejemplo: pedir que una persona sea declarada heredera de otra, pedir que una escritura pública sea declarada nula.

Las sentencias que resultan de las acciones declarativas tienen efecto retroactivo.

c.- Acciones constitutivas

Con estas acciones se pretende el surgimiento de un estado jurídico nuevo, o la modificación o extinción de un estado jurídico anterior. Pueden ser acciones constitutivas de estado o de derechos.

Como ejemplo de las primeras se citan las acciones de interdicción civil, de divorcio, de nulidad del matrimonio, etc. Como ejemplo de las segundas se cita la acción sobre daños y perjuicios proveniente de actos o hechos ilícitos, que tiende a obtener un crédito que antes no se tenía.

Las sentencias que resultan de las acciones constitutivas producen efectos *erga omnes* para el futuro y no para el pasado.

d.- Acciones ejecutivas

En virtud de las acciones ejecutivas se intenta el cumplimiento forzado de una obligación, que consta en un documento fehaciente que presta mérito ejecutivo. Ejemplos: ejecución de una sentencia de condena, el cobro de un crédito en la vía ejecutiva con base en un documento que presta mérito ejecutivo.

e.- Acciones precautelares

Estas acciones tienen la finalidad de garantizar el ejercicio de las acciones principales. A ellas se refiere el art. 817 Pr., aunque no todas ellas están comprendidas en la definición de ese artículo.

Estas medidas pueden recaer sobre personas, cosas y pruebas útiles al juicio, y algunas sólo las puede pedir el demandante (embargo, anotación de demanda, etc.) mientras otras las puede pedir tanto el demandante como el demandado (absolución de posiciones, reconocimiento de firma, etc.).

En la doctrina se han hecho varias clasificaciones de las acciones precautelares, pero el Código de Procedimiento Civil no hace ninguna, y se limita a regular algunas de ellas, ya que también se encuentran en otros cuerpos de leyes o leyes especiales.

La enumeración de estas medidas es la siguiente: i.- La exhibición de libros o cosas; ii.- El embargo; iii.- El secuestro;

iv.- La intervención judicial; v.- El aseguramiento de bienes litigiosos; vi.- La anotación de la demanda en el Registro; vii.- El derecho legal de retención; viii.- La denuncia de obra nueva; ix.- La denuncia de obra ruinoso; x.- La guarda o aposición de sellos; xi.- El inventario; xii.- El beneficio de inventario; xiii.- El beneficio de separación; xiv.- Las expensas para la litis; xv.- La guarda provisoria de los hijos y el abandono por el marido del domicilio conyugal en el juicio de divorcio; xvi.- El depósito de personas; xvii.- La absolución de posiciones; xviii.- El reconocimiento de firma; xix.- Las informaciones para perpetua memoria.

Las providencias que resultan de las acciones precautelares tienen como características distintivas la provisoriedad (por cuanto surten efecto sólo hasta que se dicta la sentencia definitiva) y la subsidiariedad (porque no tienen un fin propio, ya que están al servicio del derecho que se acoja en la sentencia definitiva, a fin de poderlo hacer efectivo y que no resulte inútil o ineficaz).

f.- Acciones perjudiciales

Están contempladas en el art. 816 Pr., que dice: *“Llámanse acción perjudicial la que es trascendental aun a ciertas personas que no litigan, y en ella cada uno de los litigantes puede ser actor o demandado”*.

La norma general es que la cosa juzgada no afecta a los que no fueron parte en un juicio (principio de relatividad de la cosa juzgada), pero por excepción las acciones perjudiciales afecta aun a los que no fueron parte en el proceso. Estas acciones generalmente se refieren al estado civil de las personas.

6.- Acumulación de acciones

6.1.- Concepto de acumulación de acciones

La acumulación de acciones consiste en la facultad legal que, en virtud del principio de economía procesal, se concede a la parte actora de intentar en un mismo juicio las acciones que tenga contra la parte demandada.

La acumulación de acciones produce el efecto de discutirse y resolverse en el mismo juicio las acciones acumuladas¹¹. Cabe la acumulación antes que se conteste la demanda¹².

¹¹ Art. 836 Pr.

¹² Art. 835 Pr.

La acumulación de acciones puede ser: a) objetiva, cuando un actor ejercita varias pretensiones materiales contra un demandado; b) subjetiva, cuando la parte actora, la parte demandada o ambas están compuestas de una pluralidad de sujetos; c) mixta, cuando existiendo varios sujetos se ejercitan a la vez varias pretensiones.

6.2.- Acumulación objetiva de acciones

En virtud del principio de economía procesal, la ley concede al actor, la facultad de acumular varias acciones (pretensiones) en contra del deudor, aunque procedan de diferentes títulos, siempre que no fueren incompatibles entre sí¹³. Por ejemplo, el actor puede acumular contra el deudor una acción de pago del precio de una venta, una acción de pago de dinero dado en mutuo y una acción de pago de daños y perjuicios.

De acuerdo con el art. 832 Pr., es incompatible el ejercicio simultáneo de dos o más acciones y no podrán, por tanto acumularse, en los casos siguientes:

a.- Cuando se excluyan mutuamente o sean contrarias entre sí, de suerte que la elección de una impida o haga ineficaz el ejercicio de la otra. Por ejemplo, no se puede pedir como acciones principales, en una misma demanda, el cumplimiento de un contrato y la resolución del mismo contrato por incumplimiento. O se pide lo primero o lo segundo.

Sin embargo, las acciones excluyentes o contrarias pueden acumularse subsidiariamente. En este caso, se pide una de las acciones como principal, y la otra de forma subsidiaria, de modo que si el juez no concede la principal, se pronuncie sobre la subsidiaria. Por ejemplo, se pide el cumplimiento de un contrato, y, en subsidio, la resolución del mismo contrato por incumplimiento.

b.- Cuando el juez que debe conocer de la acción principal sea incompetente por razón de la materia o de la cuantía. El juez que conocerá de las acciones acumuladas debe ser competente por razón de la materia y cuantía para conocer sobre ellas.

No se pueden acumular, por ejemplo, acciones laborales y civiles. No obstante, de acuerdo con el art. 833 Pr., una acción de menor cuantía puede acumularse a una acción de mayor

¹³ Art. 831 Pr.

cuantía. Pero no puede acumularse una acción de mayor cuantía a una demanda de menor cuantía.

c.- Cuando, con arreglo a la ley, deban ventilarse y decidirse las acciones en juicios de diferente naturaleza. Por ejemplo, no puede acumularse una acción ordinaria a una acción ejecutiva. Pero si puede acumularse una acción ordinaria a otra ordinaria, o una acción ejecutiva a otra ejecutiva.

Se estima que una acción sumaria o ejecutiva puede acumularse a una ordinaria, pues el acreedor puede renunciar al beneficio que esos procedimientos le otorgan.

La acumulación de objetiva de acciones puede presentarse en cuatro modalidades o formas:

a.- Acumulación cumulativa o acumulativa: En esta modalidad, varias pretensiones independientes se piden como principales (por ejemplo, el actor pide que se ordene al demandado pagar una suma de dinero y entregar una casa).

b.- Acumulación alternativa o electiva: En esta modalidad se plantean dos o más pretensiones, pero la reclamación queda satisfecha al cumplirse una de ellas (Por ejemplo, el actor pide que se le pague el precio de la venta o que se le devuelva el bien vendido).

c.- Acumulación eventual o subsidiaria: En este caso se pide una o varias pretensiones principales, y adicionalmente otras pretensiones para hacerlas valer en el evento o circunstancia de que las principales sean rechazadas (por ejemplo, el actor demanda una casa como comprador, y para el caso de no lograr demostrar esa calidad la demanda como heredero, y por si tampoco demuestra ese carácter la demanda como legatario). En este caso, si la sentencia da lugar a la pretensión principal ya no tramita las otras pretensiones.

d.- Acumulación sucesiva: En esta modalidad, se formulan varias pretensiones vinculadas entre sí, de modo que el juez debe admitir la primera para dar lugar a la posterior, pues aquella es el fundamento de las posteriores (por ejemplo, el actor pide declarar la nulidad de la escritura de compraventa y la restitución del inmueble objeto del contrato de compraventa).

La acumulación subjetiva de acciones se produce cuando en el proceso existe un litisconsorcio activo, pasivo o mixto. En

este caso, uno o varios actores pueden acumular las acciones que tienen contra uno o varios demandados cuando estas procedan de un mismo título o se originen en una misma causa de pedir (art. 834 Pr.).

Correlativamente a la facultad del actor de acumular sus pretensiones, el demandado tiene la potestad de exigir que la acción que ejerce una persona y que pueda corresponder también a otras, se ponga en conocimiento de estas últimas para que en el término del emplazamiento manifiesten si se adhieren al actor principal.

Si esas otras personas guardan silencio les afectará el resultado del proceso como si hubiesen estado presentes; si declaran no adherirse a la demanda, caducará su derecho; y si manifiestan adherirse, formarán un solo cuerpo y gestionarán bajo un procurador común que unifique su personería (art. 838 Pr.).

6.4.- Acumulación subjetiva de acciones

Esta figura es denominada también litisconsorcio, y se estudiará con amplitud en la Sección III de esta misma Unidad.

Sección II

La Pretensión

1.- Concepto de pretensión

La pretensión es una autoatribución de un derecho material subjetivo (fundado o infundado) por parte de un sujeto (actor), el cual, mediante una declaración formal de voluntad de carácter petitorio (demanda) requiere la actuación de un órgano jurisdiccional frente a otro sujeto distinto del pretensor (reo), con el fin último de obtener una tutela jurídica y producir un efecto jurídico.

La pretensión es por tanto distinta del derecho material subjetivo que se reclama, aunque exista relación entre una y otro: La pretensión puede formularse por quien efectivamente tenga un derecho que reclamar, pero también por quien sólo cree tenerlo, e incluso por quien a sabiendas de no tenerlo lo invoca temerariamente. Es por ello que puede hablarse de pretensión fundada y pretensión infundada.

2.- Distinción entre pretensión, acción y demanda

Como ya vimos, la acción es el poder jurídico abstracto de pedir al órgano jurisdiccional la tutela de nuestros derechos. Este poder existe como atributo de la personalidad, aunque no

se ejercite, e incluso aunque se renuncie a ejercitarlo o se deje prescribir por el transcurso del tiempo en casos concretos. La pretensión, en cambio, no es una mera facultad o posibilidad, sino que se materializa mediante un acto procesal concreto por el que se pide la actuación de la jurisdicción.

La acción es por tanto previa al proceso, aunque cuando se ejercita se extiende a éste, y su existencia es lo que permite al sujeto invocar su pretensión. La pretensión, por su parte, no es previa al proceso, sino que se formula en la demanda que da inicio al proceso.

Sin embargo, tampoco debe confundirse a la pretensión con la demanda. La demanda es tanto el acto jurídico de iniciación del proceso como el documento formal mediante el cual el actor se persona o comparece ante el órgano jurisdiccional ejercitando su derecho de acción y formulando su concreta pretensión.

La pretensión constituye el núcleo esencial de la demanda, el fondo, lo que el actor pide que el órgano jurisdiccional constituya, declare o ejecute (el *petitum*), pero eso no agota la totalidad de dicho documento: además de la expresión de la pretensión, la demanda debe necesariamente que reunir todos los requisitos formales exigidos por la ley (arts. 1021 Pr. y siguientes), sin los cuales la demanda (y con ella la pretensión) sería rechazada *in limine litis* por el juzgador.

3.- Requisitos de la pretensión

Para que la pretensión pueda producir los efectos jurídicos deseados por el pretensor, es necesaria la concurrencia de los requisitos siguientes:

A.- En cuanto a los sujetos procesales

a.- El órgano jurisdiccional ante quien se formula la pretensión debe estar investido de competencia efectiva para conocer de ella.

b.- El actor debe tener tanto capacidad procesal (capacidad para ser parte y capacidad para actuar por sí mismo en el proceso) como legitimidad causal y procesal activa.

c.- El demandado debe tener tanto capacidad procesal (capacidad para ser parte y capacidad para actuar por sí mismo en el proceso) como legitimidad causal y procesal pasiva.

B.- En cuanto a su objeto

a.- El objeto debe ser posible: La pretensión que reclame lo material o jurídicamente imposible no tendrá los efectos normales de este acto procesal.

b.- El objeto debe ser lícito: La pretensión que reclame el cumplimiento de una obligación contraria a la ley, la moral o el orden público no será atendida.

c.- El objeto debe ser idóneo: Es decir, compatible con la vía procesal y la acción elegida.

d.- El objeto debe tener causa justificada: Es decir, el pretensor debe tener un interés legítimo en el cumplimiento de la prestación reclamada.

C.- En cuanto al lugar, tiempo y forma

a.- El lugar será el del proceso al que la pretensión se integra: la circunscripción geográfica, la sede y el local del órgano jurisdiccional ante quien se formula la pretensión.

b.- El tiempo es el de la demanda, la que está exenta de límites temporales, salvo los que proceden de la prescripción y de la caducidad de la instancia.

c.- La forma es la exigida para el tipo de proceso en que se hace valer la pretensión.

4.- Efectos jurídicos de la pretensión

a.- La pretensión engendra un proceso y puede determinar su mantenimiento.

b.- La pretensión, conservando su existencia, puede experimentar modificaciones sin alterar el objeto principal del proceso.

c.- la pretensión puede determinar la conclusión del proceso, cuando la reclamación de la parte actora deje de existir por algún acontecimiento legal que tenga esa repercusión.

Sección III

Los Sujetos Procesales

1.- Las personas del proceso

Se denominan personas del proceso a todas aquellas que de algún modo, en defensa de un interés, en mera manifestación de su voluntad, en ejercicio de alguna función o profesión, de manera constante o eventual, voluntaria o forzosamente intervienen en el proceso.

El conjunto de personas así definido comprende tanto a los sujetos de la relación jurídica procesal (juez-actor-demandado), como a las demás personas que de una u otra forma intervienen en el proceso, realizando o colaborando en la formación de los actos procesales.

Las personas del proceso se dividen en cinco categorías o clases:

a) Los titulares del órgano jurisdiccional: Son los miembros de los tribunales (jueces) que tienen la función orgánica de ejercer la actividad jurisdiccional en nombre y representación del Estado, dirigiendo el desarrollo del proceso y resolviendo el litigio;

b) Los auxiliares del órgano jurisdiccional: Son personas que colaboran en la formación del proceso con los titulares del órgano jurisdiccional, sea de manera permanente (secretarios de despacho, oficiales mayores) o eventual (asesores, médicos forenses). También existen otros colaboradores permanentes que no intervienen en la formación del proceso, pero que ayudan materialmente a la buena marcha del proceso (archiveros, amanuenses, notificadores, etc.);

c) Las partes procesales: Es aquel que pide en nombre propio, o en cuyo nombre se pide, la actuación del órgano jurisdiccional, y aquel frente al cual es pedida esa actuación. Son pues el demandante (actor) y el demandado (reo);

d) Los asistentes y representantes de las partes procesales: Son personas que colaboran con las partes asistiéndolas o representándolas en el proceso, actividad que es ejercida básicamente por profesionales del Derecho (Abogados, Notarios y Procuradores) y en menor medida por pasantes de Derecho. Colaboran al perfeccionamiento de la justicia y a la efectividad del principio constitucional de igualdad ante la ley;

e) Los terceros colaboradores del proceso: Son aquellas personas que prestan su actividad al proceso, pero no forman parte de la relación jurídica procesal. Cumplen su actividad llevando datos al proceso (como los testigos y peritos) o prestando servicios (como los depositarios, interpretes e interventores).

2.- Capacidad de las partes del proceso

En el proceso existen siempre por lo menos dos partes: el demandante (actor) y el demandado (reo). Para intervenir válidamente en la relación jurídico-procesal las partes deben

tener la facultad de realizar actos concretos procesales, sea como actor o como reo, es decir, ambas partes de la litis deben tener capacidad procesal. La capacidad procesal tiene dos aspectos: la capacidad para ser parte y la capacidad para obrar procesalmente. Adicionalmente, algunas legislaciones exigen a quien actúa en el proceso, el ius postulandi.

a.- Capacidad para ser parte: Es la aptitud para ser sujeto del proceso, es decir, la aptitud jurídica para ser titular de derechos y deberes de carácter procesal, sea como actor o como demandado.

Tiene su equivalente en la capacidad de goce del derecho civil, y es uno de los atributos de la personalidad.

También tienen esta capacidad para ser parte las personas jurídicas (llamadas también personas morales o de existencia ideal), sean estas de carácter público o privado.

En nuestros días, la capacidad es común a todas las personas naturales por el hecho de ser tales: aún los menores, los dementes y los interdictos pueden demandar o ser demandados en un proceso (cumplidos los requisitos de representación que estudiaremos más adelante) y de ser afectados o no en sus patrimonios como consecuencia de una sentencia judicial.

Como puede observarse, es muy difícil que falte este presupuesto con relación a las personas naturales.

Las personas morales, por otro lado, adquieren su personalidad de la ley. Por ello puede ocurrir la falta de este presupuesto, cuando no han llenado los requisitos legales para adquirir la personalidad. Por ejemplo, si no se inscribe la escritura constitutiva y los estatutos de una sociedad anónima, esta no adquiere personalidad jurídica (es decir, no nace la sociedad), y, como consecuencia, carece de capacidad para ser parte en el proceso.

Por lo expuesto, se puede afirmar que todas las personas naturales y las jurídicas legalmente constituidas, tienen capacidad para ser parte en un proceso.

b.- Capacidad para obrar procesalmente: La capacidad para ser parte no basta para obtener plena aptitud como parte en un proceso, sino que es necesario tener además la capacidad para obrar procesalmente. Esta es la aptitud para comparecer por sí solo al proceso. Su equivalente es la capacidad de obrar del Derecho Civil. Tienen capacidad para obrar procesalmente

todos los que según el Código Civil pueden obligarse sin ministerio o autorización de otros.

De acuerdo con el art. 937 Pr., el actor y el demandado deben ser personas capaces de obligarse y, por lo tanto, no pueden ser actores ni demandados, por sí mismos, en causas civiles:

i) Los privados judicialmente de la administración de sus bienes por causas legales: Por ejemplo, los concursados o quebrados.

ii) Los menores de veintiún años, salvo que hayan sido declarados mayores, o estén en los casos del art. 249 C. Se deben agregar a estas excepciones los casos contemplados en los arts. 272 C. y 7 C.C.

iii) Los privados de los derechos civiles. La interdicción civil es una pena accesoria que priva al penado durante la condena del derecho de patria potestad, de la administración de sus bienes y del derecho de disponer de ellos por acto inter vivos, salvo en los casos en que la ley limite estos efectos. Para la administración de sus bienes se le nombrará un guardador. Así se desprende de los arts. 55, 58 y 70 Pr.

La doctrina distingue tres formas de suplir la incapacidad para obrar procesalmente:

i) La representación. En virtud de ella, una persona representa a otra en juicio. La representación es convencional cuando proviene de un mandato, y en ella el mandante otorga poder al mandatario para tomar su lugar para gestionar en el proceso; es legal cuando proviene de una disposición de la ley, como cuando un padre representa a un hijo menor; y es judicial cuando proviene de un imperativo de órgano jurisdiccional, como en el caso del nombramiento de guardador ad-litem para representar los intereses de un ausente.

ii) La autorización. En virtud de ella, se le concede a la persona que goza de algún impedimento, autorización para comparecer personalmente en el juicio. Por ejemplo, se establece en algunos Códigos (como el español) que la mujer casada necesita la autorización del marido para comparecer personalmente al juicio.

iii) La asistencia. La asistencia es un acompañamiento o ayuda que una persona da a otra en el juicio. Las dos intervienen en el juicio: asistente y asistido.

Las dos últimas figuras no las regula nuestra legislación y las trata como si fueran representación, que es la única que reglamenta.

c.- *Ius postulandi*: En ciertas ocasiones no basta la capacidad para ser parte y la capacidad para obrar procesalmente; es preciso además tener la calidad de profesional del Derecho (*ius postulandi*). En muchas legislaciones esta calidad profesional (ser abogado) es indispensable para representar a otro en juicio y aun para defender sus propios derechos.

El art. 59 Pr. concede amplitud para la comparecencia en causa propia o como representante legal de otro. Según este artículo, en tales supuestos se puede comparecer por sí mismo o por apoderado. No obstante, el art. 3° de la Ley de Procuradores de 9 de octubre de 1897 restringe la representación convencional, estableciendo que se puede comparecer al juicio en la forma siguiente:

i) En causa propia, por sí mismo o por medio de apoderado, debiendo ser este abogado, a menos que sea pariente del mandante dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad legítima¹⁴.

ii) Como representante convencional de otra, por sí mismo cuando es abogado; si no lo es, debe hacerlo por medio de un sustituto, pero este tiene que ser abogado. Tanto el apoderado como el sustituto pueden comparecer por sí mismos, sin necesidad de ser abogados, siempre que se encuentren con relación al poderdante dentro del parentesco anterior.

iii) Como representante legal de otro (guardador, padre), por sí mismo, sin necesidad de ser abogado, o por medio de apoderado, debiendo este ser abogado.

3.- Posición jurídica de las partes

El concepto de parte es netamente procesal, independiente de la relación sustancial y de la pretensión, y se determina por la posición jurídica que se ocupa en el proceso. Es demandante o actor el que interpone la demanda, y es demandado o reo quien sufre la demanda.

¹⁴ Art. 108 Código de Aranceles Judiciales: "Los padres por los hijos legítimos, y los hijos legítimos mayores de edad, por los padres, pueden representarse respectivamente en juicio y fuera de juicio sin ser abogados, mediante el mandato correspondiente... Lo's cónyuges tienen igual manera el mismo derecho, así: el varón podrá representar a la mujer como en los casos anteriores; y la mujer, al varón solamente en lo extrajudicial y administrativo..."

En la doctrina se distinguen tres calidades que generalmente coinciden en las partes del proceso: la de parte procesal, la de sujeto de la relación sustancial, y la de legitimado en la causa (llamado también legitimado para pretender). Estas calidades coinciden frecuentemente en el proceso, lo que permite al juez fallar el fondo del asunto. Sin embargo, es posible que la parte demandante o la demandada no sean los mismos de la relación sustancial o los legitimados en la causa (como sucede con los sustitutos procesales y con la Procuraduría Civil) aunque esta falta de coincidencia de las señaladas calidades es menos frecuente.

Por ejemplo, si Juan es acreedor de Pedro por C\$50,000, y demanda a éste por no pagar al vencimiento del plazo pactado, en el proceso coinciden las tres calidades: Juan es parte procesal demandante, es sujeto acreedor de la relación sustantiva y está legitimado activamente en la causa; Pedro, por su parte, es parte procesal demandada, es sujeto deudor en la relación sustancial, y está legitimado pasivamente en la causa.

Si quien demanda a Pedro es José, éste, al no ser sujeto activo de la relación sustancial, carecería de legitimación en la causa, aunque aparezca como parte demandante, y la falta de esas calidades deberá ser fallada en la sentencia definitiva después de tramitado el proceso. La presencia de José (quien no es titular del crédito litigioso) es posible porque el derecho a ejercer la acción es autónomo de la relación jurídica sustancial.

Sin embargo, si es Carlos (acreedor de Juan) quien demanda a Pedro en ejercicio de la acción oblicua del art. 1870 C., si sería parte legitimada en el proceso, aunque no sea el sujeto activo de la relación sustancial reclamada. La misma situación se produce cuando el Ministerio Público entabla acción en defensa de los intereses de menores, incapaces o ausentes, en virtud de una relación jurídica en la que no es parte.

4.- Presencia y ausencia de las partes en el proceso

La presencia de las partes al proceso se logra mediante la actividad llamada comparecencia o personamiento. Es el acto inicial mediante el cual una persona se constituye parte procesal. Comparece o se persona el actor cuando interpone el escrito de demanda ante el órgano jurisdiccional competente; comparece o se persona el demandado cuando contesta la demanda o interpone excepciones previas.

La comparecencia de las partes al proceso es una carga procesal cuyo incumplimiento ocasiona a la parte morosa gravámenes o perjuicios. Por ejemplo, si bien el art. 955 inc. 2 Pr. dispone que nadie puede ser obligado a mostrarse actor, existen ciertos casos de litisconsorcio obligatorio en que el titular de un derecho está forzado a mostrarse actor, so pena de ser afectado por la sentencia que se dicte.

Sin embargo, es con relación al demandado que la no comparecencia al proceso es más común y de efectos más severos. La no comparecencia del demandado es denominada rebeldía en nuestro Derecho, y consiste en la falta de contestación de una demanda en el plazo legal, cuando se le emplazó válidamente.

Como la comparecencia al proceso es facultativa y no obligatoria, la rebeldía del reo no equivale en el Derecho Procesal al incumplimiento de un deber, sino a la falta de desembarazamiento de una carga procesal.

La rebeldía no puede declararse de oficio por el juez, sino que debe ser declarada a petición del actor. Una vez declarada la rebeldía, la demanda se tiene por contestada negativamente en todos sus extremos, y el proceso sigue su trámite normal, con la particularidad que la parte demandada no puede realizar ningún acto procesal válido mientras no purgue la rebeldía, ni tampoco es notificada de las actuaciones que se realicen. La única notificación que se le hace es la del auto que declara la propia rebeldía, y aun esa se realiza por la tabla de avisos del juzgado.

La rebeldía cesa tan pronto comparece el demandado, quien de previo debe satisfacer las costas causadas; el demandado tomará su defensa con prueba o sin ella, de acuerdo a la naturaleza del proceso y del estado en que este se halle, sin poder hacerlo retroceder ni aún para pruebas, si ya pasó su término. También termina la rebeldía de mero Derecho cuando se dicta sentencia definitiva en el proceso, con el objeto que pueda recurrir de la misma.

La rebeldía del reo no obstaculiza ni dificulta la acción del actor, la cual se continúa tramitando del mismo modo como si aquel hubiese comparecido. Tampoco garantiza la victoria del actor, quien aún debe probar los extremos de su demanda para lograr una sentencia favorable a su pretensión.

5.- Clasificación de las partes

5.1. Parte directa y parte indirecta

La parte es directa cuando los actos que realiza recaen y afectan su esfera jurídica individual. Es parte indirecta si los actos que realiza recaen y afectan a la esfera jurídica de otros, como sucede con la representación y la sustitución procesal. Lo normal es que la parte sea directa.

Según Guasp, en el supuesto de parte indirecta no existen dos partes procesales (una material y otra formal) sino una sola parte: en la representación la única parte procesal será el representado y no el representante; en la sustitución procesal será parte procesal la que actúa en el proceso y no aquella por la que se actúa.

5.2. Parte principal y parte accesoria

Dependiendo de si la pretensión es independiente o subordinada, las partes se dividen en principales y accesorias.

Son partes principales el demandante, el demandado, la Procuraduría Civil (en los casos en que la ley exige su participación en la defensa de los intereses de la sociedad, de los menores, de los incapaces o de los ausentes), y los terceros intervinientes -forzados o voluntarios- cuando lo hacen en forma excluyente.

Son partes accesorias o secundarias los terceros coadyuvantes, pues carecen de pretensiones propias independientes, y simplemente se adhieren a la pretensión de una de las partes.

5.3. Partes simples y partes múltiples

Si la pretensión es invocada por un actor en contra de un demandado, las partes son simples. Si la pretensión es de un actor contra varios demandados, de varios actores contra un demandado, o de varios actores contra varios demandados, las partes son múltiples.

5.4. Partes originales y partes intervinientes

Son partes originales aquellas con las que se inicia el proceso (actor y demandante).

Son partes intervinientes las que comparecen con posterioridad a la iniciación del proceso, sin haber sido citadas en la demanda (por ejemplo, los terceros forzados y voluntarios).

6.- Pluralidad de partes

Como ya lo expresamos, en el proceso puede existir pluralidad de partes.

Esta pluralidad comunmente tiene su origen en un litisconsorcio, pero también puede producirse por la intervención de terceros en el proceso. Entre varios demandantes o demandados habrá siempre litisconsorcio, pero entre un tercero y el actor y demandado puede existir o no. De manera que la pluralidad de partes es el género y el litisconsorcio la especie.

6.1.- El litisconsorcio

Según Dávila Millán *“el litisconsorcio denota la presencia de varias personas como partes, que por obligaciones, derechos o intereses comunes, están unidas en una determinada posición y piden al órgano jurisdiccional el pronunciamiento de una decisión lógica y jurídicamente única”*.

En el litisconsorcio existe pues un derecho o interés común entre las partes. Se le denomina también acumulación subjetiva de acciones.

El Código de Procedimiento Civil no tiene una regulación expresa de esta figura, y ni siquiera usa el término “litisconsorcio”. No obstante, se puede encasillar dentro de él algunas disposiciones del mismo cuerpo de leyes.

El litisconsorcio puede ser: a) voluntario y obligatorio; b) activo, pasivo y mixto; c) originario y sobrevenido.

a.- Litisconsorcio activo, pasivo y mixto

El litisconsorcio es activo cuando existen varios demandantes y un demandado. Pasivo, cuando existe un actor y varios demandados. Mixto, cuando existen varios demandantes y varios demandados.

Está reconocido implícitamente el activo y el pasivo en el art. 834 Pr., pero se sostiene que dicho artículo no excluye el mixto.

b.- Litisconsorcio voluntario y obligatorio

El litisconsorcio es voluntario (o facultativo) cuando los actores pueden unirse para presentar su demanda y tramitarla en un mismo juicio, o bien presentarla separadamente. También el actor podría acumular sus acciones contra los demandados, o presentar demandas separadas contra cada uno de ellos.

No obstante, en el litisconsorcio mixto los restantes litisconsortes prácticamente están forzados a presentarse como actores, si de acuerdo con el art. 838 Pr. los demandados piden que se ponga en conocimiento de ellos la demanda entablada por los otros litisconsortes. Por razones de conveniencia es posible admitir la aplicación del art. 838 Pr. al litisconsorcio activo.

El art. 834 Pr. reconoce implícitamente el litisconsorcio voluntario. Exige para su procedencia que las acciones nazcan de un mismo título o se funden en la misma causa de pedir.

Con relación al título y la causa, expone Prieto Castro: *“Por título ha de entenderse, para el art. 156 de la Ley, el contrato o negocio jurídico del que surge el derecho y las correlativas acciones y las obligaciones (por ejemplo, dos personas intervienen en el mismo contrato). Por causa ha de considerarse, para ese mismo precepto, el conjunto de hechos constitutivos, en cuanto captados por determinada norma jurídica -causa petendi- (ejemplo: varias personas que coincidentemente han causado los mismos daños o son víctimas de una misma imprudencia)”*¹⁵.

El expuesto se denomina litisconsorcio facultativo propio. No obstante, la doctrina reconoce el litisconsorcio facultativo impropio. Este se produce cuando no existe causa o título del cual emanen las acciones, pero sí cierta conexión, por lo cual se permite la acumulación de ellas. Se considera incluido en el art. 834 Pr.

Se citan dos ejemplos de la jurisprudencia española: a) El propietario de un ganado bovino originariamente sano que demanda conjuntamente a dos ganaderos de corderos enfermos que contagiaron a aquel ganado; b) La demanda de un propietario colindante a un río con infección de las aguas, debido a los escombros arrojados por diversas fábricas.

El litisconsorcio es obligatorio o necesario cuando la ley o la naturaleza de la relación jurídica imponen la necesidad de que la demanda deba ser presentada por todas o contra todos los litisconsortes. Todos los litisconsortes deben necesariamente intervenir en el proceso.

El litisconsorcio obligatorio (necesario) tiene su origen en la relación material. Ella exige que todas las partes implicadas

¹⁵ Prieto Castro piensa así al comentar el art. 156 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil española, modelo de nuestro art. 834 Pr.

estén presentes en el juicio. De otro modo, la sentencia que se dicte será ineficaz.

Cuando proviene de la ley se dice que es un litisconsorcio propiamente necesario, y cuando solamente proviene de la relación jurídica se dice que es un litisconsorcio impropiaamente necesario.

Como ejemplo de litisconsorcio propiamente necesario se cita el caso previsto en el art. 1930 C.: *“Si la división fuere imposible, solo perjudicarán al derecho de los acreedores los actos colectivos de estos, y solo podrá hacerse efectiva la deuda procediendo contra todos los deudores. Si alguno de estos resultare insolvente, no estarán obligados los demás a suplir su falta”*.

Como ejemplos del litisconsorcio impropiaamente necesario se citan los siguientes:

a) La acción pauliana y la acción de simulación. La acción pauliana debe ser dirigida contra el deudor y adquirente. Si existiere un subadquirente, también debe ser demandado. Este es un caso de litisconsorcio pasivo necesario. La acción de simulación debe ser dirigida contra todas las partes del acto simulado. Este es otro caso de litisconsorcio pasivo necesario.

b) La acción de nulidad o rescisión. Cuando son varias las partes de un contrato cuya nulidad o rescisión se pide, necesariamente debe demandarse a todas las partes.

c) Los juicios en que se pide la división de la cosa común, o la partición de la herencia o de los bienes de una sociedad. Todos los condueños deben intervenir en el juicio.

d) La disolución de una sociedad. Deben ser partes en el juicio todos los socios.

e) La acción en virtud de la cual se pretenda la propiedad o cualquier otro reclamo real frente a varias personas.

f) La acción para constituir una servidumbre sobre el predio sirviente que pertenece a varios.

c.- Litisconsorcio originario y sobrevenido

Tanto el litisconsorcio obligatorio como el voluntario pueden ser u originarios o sobrevenidos.

El litisconsorcio es originario cuando en la demanda actúan varios contra uno, uno contra varios o varios contra varios. Es la manera general de formarse el litisconsorcio.

Es sucesivo o sobrevenido cuando se forma con posterioridad al inicio del proceso. Por ejemplo, la muerte de una de las partes. El art. 60 Pr. dice: "Si durante el juicio falleciere alguna de las personas que obre por sí misma, quedará suspenso por este hecho el procedimiento, y se pondrá su estado en noticia de los herederos para que comparezcan a hacer uso de su derecho en un plazo igual al de emplazamiento para contestar demanda".

El art. 838 Pr. puede dar lugar a un litisconsorcio sobrevenido o a la acumulación de autos. Se refiere tanto al necesario como al voluntario. Se cita también al art. 82 Pr. como supuesto de litisconsorcio sobrevenido.

El litisconsorcio, en cualquiera de sus variedades, produce los siguientes efectos:

i.- Todas las pretensiones, derechos y defensas se tramitan en un mismo juicio. Así lo impone el principio de economía procesal. El art. 836 Pr. dispone: "La acumulación de acciones, cuando proceda y se utilice oportunamente por el actor, producirá el efecto de discutirse todas en un mismo juicio y resolverse en una sola sentencia". Los litisconsortes deberán unificar su representación de acuerdo con el art. 82 Pr.

ii.- Los litisconsortes voluntarios pueden o no acumular sus pretensiones. También pueden en forma independiente allanarse, desistir y celebrar transacciones sin perjudicar a los otros, o pueden apelar unos y no apelar otros. Sin embargo la incapacidad del actor promovida por uno de los litisconsortes aprovecha a los demás.

iii.- En el litisconsorcio necesario, el allanamiento, el desistimiento o renuncia de uno de los litisconsortes no perjudican a los demás. Lo mismo ocurre con la confesión. El recurso interpuesto por uno de los litisconsortes aprovecha a los otros. En general, todos los actos favorables de uno de los litisconsortes aprovechan a los demás. Los desfavorables, como la confesión, el allanamiento, etc., sólo tendrán eficacia si son aceptados por todos.

iv.- La falta de formación del litisconsorcio necesario puede ser declarada aun de oficio. Nuestro Código de Procedimiento no contiene una regulación expresa del litisconsorcio, por lo cual resulta difícil su aplicación dentro de aquel cuerpo de leyes.

La constitución defectuosa de la relación procesal por no haberse integrado el litisconsorcio necesario, puede ser denunciada por medio de una excepción dilatoria. Asimismo, el

tribunal puede oficiosamente revisar la ausencia en el proceso de uno de los litisconsortes, pues así lo exige el orden público.

El juez, ya sea a petición de parte o de oficio, debe abstenerse de conocer el fondo del asunto, si no aparece debidamente integrado el litisconsorcio necesario. Una sentencia que se dicte en esas condiciones no puede ser ejecutada, por cuanto es imposible su cumplimiento con respecto a los litisconsortes que no fueron partes en el proceso, a quienes no puede afectar. Esta sentencia es ineficaz. Si la sentencia es adversa a los demandantes, los litisconsortes activos que no comparecieron conservan su derecho a promover un nuevo juicio con la concurrencia de aquellos y así obtener una sentencia favorable que beneficia a todos. Si, por el contrario, la sentencia es favorable a los demandantes, su ejecución también aprovecha a los litisconsortes que no concurren al juicio, y el demandado no puede oponerse a ello, pues debía haberlo hecho durante el juicio.

6.2.- Intervención de terceros

Además del actor y del demandado, en el proceso pueden intervenir terceras personas que posean intereses comunes o contradictorios con aquellos. Al legislador le interesa que los derechos, pretensiones y defensas de las partes y de los terceros queden dilucidados sin necesidad de varios juicios sucesivos. Pero no solo el principio de economía procesal fundamenta la intervención de los terceros, sino también el peligro de que se puedan dictar sentencias contradictorias.

La intervención de los terceros está regulada en el art. 949 Pr. y ss. De conformidad con el art. 949 Pr., reformado por la ley del 4 de agosto de 1972, los terceros pueden intervenir en toda clase de juicios; pero en los juicios ejecutivos solamente tendrán cabida las tercerías de dominio, de prelación y de pago. El término tercería se usa para el juicio ejecutivo, aunque la intervención del tercero también se denomina tercería.

Los terceros pueden intervenir:

a) Como coadyuvantes. El tercero puede coadyuvar con el demandante o con el demandado. Se adhiere a la demanda del actor o a la excepción o defensa del demandado. No llega a entablar una nueva demanda o a oponer una nueva excepción; litiga sobre las invocadas. El tercero coadyuvante puede hacer alegaciones, presentar pruebas, etc.

Art. 954. *“El tercer opositor coadyuvante se reputará por una misma persona con el principal que litiga, debiendo tomar la causa en el estado en que se hallare”.*

Art. 955 Pr. *“No puede hacerla retroceder ni suspender su curso, excepto para prueba de algún hecho importante, a juicio del juez, y que no hubiere sido propuesto por el principal. Tampoco puede alegar ni probar lo que estuviere prohibido a este por ser pasado el término o por cualquier otro motivo”.*

Como consecuencia de que el tercero coadyuvante sea una sola parte con la principal, no se le permite en forma independiente desistir de la demanda o recurso de su principal, terminar el juicio por allanamiento o transacción e interponer recursos.

Dos son los requisitos para que proceda esta tercería: la existencia de un juicio (pues de lo contrario caería en el vacío) e interés propio. Si el interés fuere negado, se abrirá un incidente para su comprobación.

El opositor coadyuvante se podrá presentar en cualquier estado del juicio, debiendo tomarlo en la situación en que se encontrare, sin poder hacerlo retroceder.

Ejemplos de terceros coadyuvantes: el fiador, en el proceso del afianzado, el comprador excluido por el citado por evicción, si decide permanecer en el proceso como coadyuvante; etc.

b) Como excluyentes. El tercero excluyente esgrime derechos incompatibles con el demandante y el demandado. El art. 950 Pr. estatuye: *“Tercer opositor es aquel cuya pretensión se opone a la del actor o a la de los dos: en los dos primeros casos se llama opositor coadyuvante, y en el tercero, excluyente”.*

El tercero excluyente demanda al actor y al demandado. Dos son los requisitos para que proceda esta tercería: la existencia de un juicio o las diligencias de ejecución de sentencia (pues de otro modo caería en el vacío) y un interés propio.

El art. 956 Pr. establece que al tercer opositor excluyente se le concederá en causas de hecho y en cualquier instancia un término de prueba, que no podrá pasar del señalado por la ley, y será común a todas las partes litigantes, aunque hubieren ya pasado sus pruebas. Lo dicho en este artículo se entiende cuando el tercer opositor excluyente ocurre a la causa ya pasado el término de prueba o parte de él, y en los juicios en que se permite la apertura a pruebas en la segunda instancia.

Ejemplo de la tercería excluyente es la de dominio, y también se cita a la de prelación. La Corte Suprema ha dicho que en la tercería de dominio las partes principales son el tercerista y el ejecutante, y que el ejecutado puede coadyuvar con uno o con el otro. Si la apelación del tercerista es improcedente por apelar fuera de tiempo, también lo es la del ejecutado que se allane a la demanda, aunque hubiere apelado en tiempo.

En los juicios ejecutivos está limitada la intervención de los terceros. Sólo tendrán cabida las tercerías de dominio, de prelación y de pago. En el juicio prendario de la Ley de Prenda Agraria o Industrial sólo se admiten las tercerías de prelación en los supuestos del art. 34, literales a) y b). Los terceros que pretendan derechos sobre la cosa pignorada se limitarán a hacer reclamación antes de la subasta y podrán hacerlos valer en juicio ordinario dentro del término de quince días de efectuada la venta, bajo la sanción de caducidad.

7.- Intervención forzada

El demandante adquiere su posición en el proceso por su exclusiva voluntad y el demandado puede o no llegar a él. El art. 955, inc. 2 Pr., dispone que no puede obligarse a nadie a mostrarse actor. Sin embargo, el art. 838 Pr. obliga a mostrarse parte, bajo las sanciones que establece.

Otro supuesto de intervención forzada es la citación de evicción. El enajenante comparece tomando la posición del demandado y este podrá intervenir como coadyuvante. Si no comparece, incurrirá en las responsabilidades si se perdiere el juicio.

Por otra parte, el tercero adquirente de la cosa hipotecada podrá exigir, cuando se encuentre vencido el plazo, que el acreedor entable el correspondiente juicio para el pago, o cancele el gravamen si no lo verificare dentro del plazo prudencial que el juez le señala. Así se dispone en el art. 3842, inc. 2 C.

8.- Sucesión o cambio de las partes

Esta situación se produce cuando un sujeto, actuando a título personal y en interés propio, reemplaza físicamente al demandante o demandado original, por que el resultado afectará directamente su patrimonio. El cambio o sucesión de partes tiene lugar en los casos siguientes:

a) Por el fallecimiento de la parte. El art. 60 Pr. dispone: "Si durante el juicio falleciere alguna de las partes que obre

por sí misma, quedará suspenso por este hecho el procedimiento, y se pondrá su estado en noticia de los herederos para que comparezcan a hacer uso de su derecho en un plazo igual al de emplazamiento para contestar la demanda”.

Por otra parte, el art. 1050 Pr. establece: “Si antes de contestar la demanda muere la persona emplazada, se hará a sus representantes o herederos un nuevo emplazamiento. Si ya contestada la demanda muere el demandado, los trámites ulteriores se entenderán con sus herederos, o con el apoderado que lo representaba en el juicio y que no hubiesen removido dichos herederos. Si los herederos no se apersonaren en el juicio, después de la muerte de su causante, la parte contraria podrá pedir al juez que con ellos se entiendan los procedimientos, debiendo designar nominativamente quienes sean los herederos. Si estos negasen la calidad de tales, se resolverá el artículo por los trámites de los incidentes. Lo dicho en este artículo es aplicable también a los herederos del actor. Si muriesen ambos litigantes, el juicio se seguirá entre uno y otros herederos. Si los herederos estuviesen fuera del lugar del juicio, se procederá conforme al artículo 868. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de las reglas generales que los interesados quieran utilizar sobre declaración de herencia yacente”.

b) Por la venta del crédito o cosa litigiosa. La cesión de los derechos litigiosos está regulada en el art. 2741 C. y ss. El artículo citado establece: “Se cede un derecho litigioso, cuando el objeto directo de la cesión es el evento incierto de la litis, del que no se hace responsable el cedente. Se entiende litigioso un derecho para los efectos del siguientes artículos: desde que se notifica judicialmentela demanda, en los juicios ordinarios, verbales y sumarios; en los ejecutivos, desde la notificación del auto de requerimiento de pago; en los concursos voluntarios, desde que el cedente presenta al juzgado respectivo, su escrito de cesión; y en los concursos necesarios y quiebras, desde que el juez los decreta, sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente para los juicios ejecutivos”.

9.- Sustitución procesal

En virtud de la sustitución procesal una persona, llamada sustituto, ejerce en nombre propio, por tener interés para ello, una acción o excepción que pertenece a un tercero, denominado sustituido.

Lo normal es que los que ejerzan las acciones y las excepciones sean los titulares de las relaciones sustanciales en

que se fundan (legitimación ad causam ordinaria); pero la ley permite, dentro de un amplio ámbito de excepción, que terceros interesados las pueden ejercer a pesar de no ser sus titulares materiales (legitimación ad causam extraordinaria o anormal).

La extraordinaria o anormal es una legitimación principal e independiente, que se funda en un interés económico o de otra índole, como ocurre, por ejemplo, cuando actúa el Procurador Civil. El interés del sustituto se beneficia mediante la protección del interés del sustituido. aunque no de una manera inmediata, pero sí mediata.

La sustitución procesal puede ser: activa, si el tercero utiliza una acción; pasiva, cuando opone una excepción; voluntaria, si actúa sin verse forzado a ello por la ley; y forzada, cuando se lo ordena la ley, como le ocurre al Procurador de Justicia en su caso.

A la sustitución procesal no hay que confundirla con la sucesión o la representación procesal.

En la sucesión procesal existe un cambio de partes en el proceso (del demandante, del demandado o del tercero); en cambio, en la sustitución procesal el tercero ejerce en su interés y nombre propio la acción (o derecho) que pertenece a otra persona. Las partes no entran y salen del proceso.

En la representación procesal, el representante actúa en nombre del representado, sin someter a juicio sus derechos propios, y por ello la cosa juzgada no lo afecta personalmente. En cambio, en la sustitución procesal el tercero actúa en nombre propio, aunque usando de un derecho sustantivo ajeno, por lo cual la cosa juzgada recae sobre el sustituido, a menos que el sustituto haya invocado algunas pretensiones propias; pero esto no quiere decir que el sustituto sea extraño al perjuicio o beneficio de la sentencia dictada sobre el derecho que intenta tutelar, en cuyo caso queda afectado a su cumplimiento, y, en consecuencia, no puede repetir la misma acción.

En el Código de Procedimiento Civil no existe una regulación general de esta figura, pero tal circunstancia no es obstáculo para aceptarla, siempre que se cite de previo al sustituido para evitar que se le prive de un derecho sin haber sido antes oído, y por ello es conveniente tal audiencia, así al sustituto como al demandado. No obstante, si existen en nuestra legislación varios casos concretos de sustitución procesal; entre ellos tenemos:

a) La acción oblicua o subrogatoria, consagrada en forma general en el art. 1870 C. y, en especial, en otras disposiciones legales.

b) El endoso en prenda contemplado en el art. 68 de la Ley General de Títulos-Valores.

c) La nulidad absoluta de un acto o contrato no solo puede ser pedida por los contratantes, sino también por terceros interesados, por ejemplo los acreedores de aquellos, según se desprende del art. 2204 C.

d) La acción pauliana la ejercen los acreedores del deudor, según se desprende del art. 2226 C. y ss., que regulan ampliamente esta acción.

e) La acción de simulación no solo corresponde a las partes, sino también a los acreedores perjudicados, según se colige de la regulación general y amplia que hacen de esta acción los arts. 2220 C. y ss.

Sección IV

Acumulación de Autos (Acumulación de Procesos)

1.- Concepto y fundamento de la acumulación de autos

La acumulación de autos consiste en la reunión de varios procesos vinculados entre sí para que sean tramitados en uno solo y resueltos por una misma sentencia.

El principio de economía procesal y el interés del Estado de que no se dicten sentencias contradictorias, constituyen los fundamentos de la acumulación de autos o procesos.

2.- Regulación legal de la acumulación de autos

Esta figura se encuentra ampliamente regulada en el Libro III, Título V, arts. 840 al 860 del Código de Procedimiento Civil. Sirvieron de modelo a estas disposiciones las legislaciones procesales de España y Chile.

3.- Requisitos de procedencia de la acumulación de autos

Para que prospere la acumulación de autos es preciso que concurren copulativamente los tres requisitos siguientes: a.- Que exista una causa legal para la acumulación; b.- Que los juicios se encuentren sometidos a la misma clase de procedimiento; y c.- que los procesos se encuentren en instancias análogas.

3.1.- Causas legales de la acumulación de autos

Los arts. 840 y 841 Pr. regulan los supuestos en que procede la acumulación de autos. De acuerdo a las disposiciones citadas, procede la acumulación de autos en los casos siguientes:

a.- Cuando la sentencia que se dicte en un juicio deba producir cosa juzgada en otro.- Esta causal está contemplada en el art. 840 inc. 3 Pr., así como también en la primera parte del inc. 1 del mismo artículo.

Ejemplo: José demanda a los herederos de Pedro por la nulidad del testamento y en otro juicio demanda a los herederos de Pedro por la entrega de un legado con base en el mismo testamento.

b.- Cuando existe identidad de personas y objeto en los juicios, aunque la causa sea diferente. Esta causal está contemplada en el art. 841 inc. 1 Pr. Este y los restantes incisos usan impropriamente el vocablo “acciones”, cuando debieron haber usado el de “causas”.

Ejemplo: José demanda a Pedro para que le restituya el inmueble X, por cuanto ha terminado el contrato de arriendo en virtud de la falta de pago del precio, y en otro juicio posterior vuelve a demandar la terminación del mismo arriendo en virtud de que el arrendatario subarrendó el inmueble X sin su permiso.

c.- Cuando existe identidad de personas y causas en los dos juicios, aunque los objetos sean distintos. Esta causal está consagrada en el art. 841 inc. 2 Pr.

Ejemplo: Juan y Diego permutan los inmuebles A y B que les pertenecían respectivamente. Juan demanda a Diego para que le entregue el inmueble B, y Diego después demanda en otro juicio a Juan para que le entregue el inmueble A;

d.- Cuando existe identidad de causa en los juicios; aunque el objeto y las personas sean diferentes. Esta causal está consagrada en los arts. 840 inc. 1 segunda parte, y 841 incs. 3 y 4 Pr.

Ejemplo: viajando en un bus de la empresa de transporte “El Águila”, Raúl, Pedro y Diego sufren un accidente y demandan por separado a dicha empresa por los daños y perjuicios ocasionados en el accidente.

e.- Cuando existe identidad de causa y de objeto en los juicios, aunque las personas sean distintas. Esta causal está consagrada en el art. 841 inc. 5 Pr.

Ejemplos: Juan le compra el inmueble X a Diego y a José. Con base en que fue celebrado bajo violencia, se demanda la nulidad de dicho contrato en contra de Diego en un juicio y en contra de José en otro.

Del simple análisis de los casos expuestos se puede concluir que como regla general procede la acumulación de autos cuando coinciden dos elementos de la acción en los juicios. Excepcionalmente, procede la acumulación cuando existe solamente identidad de causa, por lo cual no cabe si solo existe un elemento común, salvo que éste sea la causa. Ejemplos:

i.- Identidad de personas, pero diversidad de objeto y de causa: Juan demanda a José con acción reivindicatoria para que le restituya el inmueble A, y en otro juicio demanda a José por la resolución del contrato de venta del carro B: no procede la acumulación;

ii.- Identidad de objeto, pero diversidad de causa y de partes: Juan demanda a Pedro con acción reivindicatoria para que le restituya el inmueble A, y en otro juicio Alejandro demanda a Diego para que le entregue el inmueble A, en virtud de la terminación del contrato de arriendo: no procede la acumulación.

Si se produce la triple identidad de partes, objeto y causa en ambos procesos, no cabe pedir la acumulación de autos, sino oponer la excepción de litispendencia.

La litispendencia y la acumulación de autos son diferentes:

i.- La litispendencia procede cuando coinciden los tres elementos de la acción; en cambio, la acumulación de autos procede cuando coinciden dos elementos, o bien uno, si éste es la causa.

ii.- La litispendencia es una excepción dilatoria; la acumulación de autos es un incidente especial.

iii.- La litispendencia procede aunque los juicios tengan diferentes tramitaciones o se encuentren en diferentes instancias; en cambio, la acumulación de autos no procede frente a tales situaciones.

iv.- La litispendencia termina con el nuevo juicio; en cambio, la acumulación de autos produce la fusión de ambos juicios.

La Corte Suprema de Justicia, a pesar de reconocer diferencias entre ambas, expresa que la excepción de litispendencia es productora de acumulación de autos¹⁶.

Si el demandado no opuso oportunamente la excepción de litispendencia, puede con posterioridad solicitar la acumulación de autos cuando existe la triple identidad. Se fundan en las mismas disposiciones que dan origen a esta causal de la acumulación de autos.

3.2.- Los juicios a acumularse deben encontrarse sometidos a la misma clase de procedimientos

La acumulación de autos reúne en uno solo a los diferentes juicios y, en consecuencia, es obvio que si no están sometidos al mismo procedimiento, no pueden sustanciarse juntos.

Un juicio ordinario puede acumularse a otro juicio ordinario; pero no un juicio sumario a un juicio ordinario, o viceversa. Un juicio ejecutivo corriente se puede acumular a otro juicio ejecutivo corriente; pero no un juicio ejecutivo corriente a un juicio ejecutivo con renuncia de trámites.

Como excepción a esta regla, se puede citar el supuesto de acumulación a los juicios universales, pues los juicios singulares que a ellos se acumulan se ajustan a su tramitación. Este requisito lo exige el art. 843 Pr.

3.3.- Los juicios a acumularse deben encontrarse en instancias análogas

Los juicios a acumularse deben encontrarse en la misma instancia, ya sea en primera o en segunda instancia. En consecuencia, no cabe la acumulación si un juicio se encuentra en primera instancia y el otro en segunda instancia. Este requisito lo exige el art. 843 Pr.¹⁷

A pesar de que la ley se refiere a "instancia", la Corte Suprema admite la acumulación de los recursos de casación¹⁸.

¹⁶ S. 10: 30 a.m. del 5 de mayo de 1950, B. J., pág. 15064.

¹⁷ S. 11:00 a. m. de 17 de julio de 1948. B.J., pág. 14344.

¹⁸ S. 12:00 m. de 31 de agosto de 1922. B.J., pág. 3806; S. 11:30 a.m. de 23 de noviembre de 1944. B.J., pág. 12580.

4.- Clases de acumulaciones de autos

La acumulación puede decretarse a petición de parte o de oficio. Se decreta de oficio sólo cuando los juicios se encuentran en el mismo juzgado o tribunal. Es potestativo para ellos la acumulación.

Se considera parte legítima todo el que ha sido admitido como parte en cualquiera de los juicios cuya acumulación se pretende¹⁹.

5.- Juzgado o tribunal ante el cual debe pedirse la acumulación de autos

Si los tribunales son de igual jerarquía, la acumulación se pedirá ante el que conoce del juicio más antiguo. Si se encontraren ante tribunales de distintas jerarquías, se pedirá ante el superior jerárquico²⁰.

6.- Oportunidad para pedir la acumulación de autos

La acumulación de autos puede pedirse en cualquier estado del juicio, pero antes de haberse dictado la sentencia definitiva. En los juicios ejecutivos, antes del pago de la obligación. En estos es procedente, aunque se haya dictado la sentencia de pago o de remate²¹.

7.- Efectos de la acumulación de autos

a.- Suspensión de los juicios. La solicitud de acumulación de autos no suspende por sí sola la tramitación de los juicios, salvo que el solicitante rinda fianza o hipoteca para responder de las costas, daños y perjuicios que se ocasionen a la contraparte si se rechaza definitivamente el incidente de acumulación²². Una vez rendida la fianza, el tribunal requirente suspenderá la tramitación y el requerido hará lo mismo desde que reciba el exhorto, por cuanto hasta ese momento conoce del incidente.

La suspensión de los juicios terminará cuando se decida el incidente de acumulación por el superior²³.

¹⁹ Art. 842 Pr.

²⁰ Arts. 844 y 846 Pr.

²¹ Art. 846 Pr.

²² Art. 858 Pr., reformado por Ley del 29 de julio de 1935.

²³ Art. 859, inc. 1 Pr.

También se alzará la suspensión cuando se admita la apelación en un solo efecto, de conformidad con los arts. 848 inc. 4, 850 inc. 2, 853 inc. 2 y 855 inc. 2 Pr.

b.- Reunión de los juicios. La acumulación de autos produce la reunión de las juicios en uno solo para ser fallados en la misma sentencia²⁴.

Para ello deberá suspenderse el curso de los juicios acumulados que estuvieren más avanzados, hasta que todos lleguen al mismo estado.

Esta regla no se aplica a la acumulación que de juicios singulares se haga a un juicio universal, a cuya tramitación se deben aquellos someter²⁵.

²⁴ Art. 859, inc. 2 Pr.

²⁵ Arts. 840 primera parte, y 845 Pr.

UNIDAD III

EL PROCESO DE DECLARACIÓN. LA FASE DE ALEGACIONES

1.- La demanda

1.1.- Concepto de demanda

Según Guasp la demanda constituye *“el acto procesal inicial del juicio, acto de introducción y nacimiento de la relación jurídica procesal. Es el continente de la pretensión material, constituyendo ésta el objeto de la demanda. Tanto la pretensión material (acción civil) como la demanda que la contiene son manifestaciones dinámicas del derecho de acción, ambas son declaraciones de voluntad del actor”*.

Para el mismo autor, a la par de la pretensión material existe una pretensión procesal, la cual define como *“la afirmación de un sujeto de merecer la tutela jurídica, dirigida esta afirmación a un tercero distinto de ambos”*.

La definición legal de la demanda nos la da el art. 1031 Pr., que nos dice que *“Demanda es la petición que se hace al juez o tribunal para que mande dar, pagar, hacer o dejar de hacer alguna cosa”*.

La demanda es, pues, el acto procesal constitutivo de la relación jurídica procesal: ella da inicio al proceso, el cual finaliza normalmente con una sentencia.

Entre el acto de creación (demanda) y el acto de decisión final (sentencia) se desarrolla el proceso declarativo (llamado también de conocimiento, cognoscitivo o de cognición).

1.2.- Relación entre la demanda y la sentencia

Entre la demanda y la sentencia debe existir una correspondencia subjetiva y objetiva, en el sentido de que la sentencia es la respuesta que da el juez a la pretensión material planteada por el actor contra el reo en la demanda. Por ello se afirma que la demanda es esencialmente un proyecto de la sentencia que el actor aspira obtener del juez.

Tenga o no fundamento la pretensión material aducida en la demanda, esta sirve, desde el punto de vista del pretensor, para delimitar objetiva y subjetivamente el contenido del proceso: objetivamente, porque fija el tema del debate, la materia del litigio; subjetivamente, porque fija también los sujetos entre los cuales se desarrollará la controversia.

El proceso que con la demanda se abre no puede tratar de otro asunto que del señalado en la demanda (prohibición de la

mutatio libelli o cambio de contenido de la demanda). Hace al mismo tiempo inadmisibles otros procesos con el mismo objeto, sujetos y causa mientras esté pendiente de resolución el primero (excepción dilatoria de litispendencia) o cuando ya ha sido resuelto el litigio por una sentencia firme (excepción mixta de cosa juzgada).

Además, el objeto de la pretensión deducida en la demanda (bien por sí mismo, bien en función de sus elementos subjetivos) fija la competencia territorial y jerárquica del juez y determina la vía procesal que debe seguirse para resolver el negocio (juicio ordinario, sumario, ordinario verbal, ejecutivo o especial).

1.3.- Requisitos de la demanda

El Código de Procedimiento Civil dispone que toda demanda debe interponerse ante el Juez competente y en la forma establecida por la ley²⁶.

En la doctrina se acostumbra distinguir entre los requisitos de admisibilidad de la demanda y los requisitos de tramitabilidad de la demanda.

Los requisitos de admisibilidad de la demanda son requisitos de fondo o de admisibilidad de la pretensión material, que en concreto se refieren a la posibilidad del actor de obtener una sentencia favorable.

Estos requisitos son básicamente:

a.- La legitimación causal de las partes activa y pasiva;

²⁶ Arts. 58, 396, 1021 Pr.

Sentencia de las 10:00 a.m. de 3 de mayo de 1926, B.J. pág. 5598 Cons.I: "*el recurrente no ha presentado el contrato a que se refiere en el recurso, y tan sólo acompañó el Número de La Gaceta en que fue publicado el acuerdo ejecutivo de 8 de enero de 1926 derogatorio del de 4 de marzo de 1925 que aprueba el contrato celebrado el 3 de febrero de ese último año entre la Corporación Municipal de Chinandega representada por su Alcalde don Felipe Quezada, por una parte y don Ramon Valladares P., por otra, por decirse en el acuerdo derogatorio que el referido contrato no fue puesto a licitación. A pesar de esta insuficiencia de datos, el propio recurrente afirma que ya se está discutiendo ante el Juez de Distrito de Chinandega la validez del contrato que celebró con el Alcalde de Chinandega señor Quezada, en virtud de demanda de nulidad que al recurrente y a dicha Municipalidad promovió el señor Roberto Sansón; y como dice además que ese es el contrato a que se contrae el acuerdo gubernativo de derogación de que se ha hecho mérito, debe tenerse por establecido que hay juicio pendiente acerca de la existencia misma de tal contrato. Artos. 115 Cn., 4, 5, 6 y 58 Pr., y 13 L.O. de T.*".

b.- La tutelabilidad (es decir, que el objeto del proceso sea un bien jurídicamente protegido y que esté dentro del ámbito del comercio humano);

c.- El interés para obrar en el plano obligacional o material.

Los requisitos de tramitabilidad de la demanda son requisitos de forma o de admisibilidad de la pretensión procesal, que se refieren a la posibilidad del actor de iniciar validamente la relación jurídico procesal mediante el cumplimiento de los requisitos que formalmente debe reunir.

Estos requisitos son básicamente:

a.- La apertura de la relación jurídico procesal mediante la presentación del escrito de demanda que reúna todos los requisitos formales exigidos por la ley;

b.- La legitimación procesal de las partes activa y pasiva (arts. 1029 y 1030 Pr.);

c.- La competencia material y jerárquica del órgano jurisdiccional (arts. 1032 y 1033 Pr.).

Como ya hemos explicado, para tramitar la demanda no es necesario que estén presentes los requisitos de fondo, sino que basta que se tenga una apariencia de juridicidad, la cual se logra mediante el cumplimiento de las formas mínimas que exige la ley procesal.

1.4.- Efectos procesales de la demanda

Esta produce los efectos procesales siguientes:

a.- El actor se somete tácitamente a la competencia territorial del juez desde el momento que interpone la demanda (art. 262 inc. 1 Pr.).

b.- El juez debe atender la demanda y proveer las peticiones del actor. También puede pronunciarse sobre su competencia material y jerárquica, según dispone el art. 827 inc. 2 Pr.

c.- El juez tiene facultades para rechazar de oficio la demanda que no reúne los tres primeros requisitos del art. 1021 Pr., tal como se dispone en el art. 1035 Pr.

1.5.- Forma de la demanda

Conforme al art. 1021 Pr., son cuatro los elementos formales que deben estar presentes en toda demanda: 1° El

nombre del actor²⁷; 2° El nombre del demandado; 3° La cosa, cantidad o hecho que se pide; 4° La causa o razón por que se pide, pudiendo unirse muchas causas para mayor seguridad de los derechos.

Sí los incisos 1°, 2° y 3° del art. 1021 Pr. no están presentes en la demanda, o si esta es oscura o ininteligible, el art. 1035 Pr. autoriza al juez para que de oficio no dé curso a su tramitación. Esta disposición no se aplica cuando la omisión versa sobre el Derecho, pues en este caso el juez puede suplirlas²⁸.

El art. 1022 Pr. añade como requisito formal la designación del juzgado o tribunal al cual se dirige la demanda.

El art. 1026 Pr. establece que la demanda puede acompañarse de documentos o no. Si se acompañan documentos, debe citárselos en la demanda. Si no se acompañan documentos, debe referirse el hecho ofreciendo probarlo, citando la ley en que se funda.

Los documentos que las partes no contradigan al darles el juzgado conocimiento de ellos, en cualquier momento que sean presentados, se tendrán por aceptados a favor de la parte contraria (art. 1051 Pr. in fine)²⁹.

Otros requisitos formales son: el uso de papel sellado, el uso del idioma español³⁰, escribir la fecha en letras y no en guarismos, la descripción detallada de la cosa cuya propiedad o posesión se pide, a no ser que la demanda sea general, como la de una herencia, de cuentas de una administración u otras

²⁷ Adicionalmente, el art. 4 inc. k) de la Ley de Identificación Ciudadana establece que es indispensable la presentación de la Cédula de Identidad para iniciar acción judicial. Por Resolución del Consejo Supremo Electoral de treinta y uno de enero de dos mil uno, esta disposición legal es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional a partir del uno de abril de dos mil uno.

²⁸ Sentencia de las 10:30 a.m. de 31 de agosto de 1956, B.J., pág. 18203: "No puede negarse que el art. 1021 Pr. concede a los jueces suficiente amplitud para suplir las omisiones de los demandantes y de los demandados, si pertenecen al Derecho, lo cual quiere significar que si tales omisiones se refieren a los hechos y el interesado no las aclara en su oportunidad legal, no pueden menos que trascender al fallo y hacerlo legalmente imposible, siempre que el juez no opte por la medida de no dar curso a la demanda desde el primer momento de iniciarse su tramitación".

²⁹ Esto no significa que por la falta de impugnación de la contraparte tales documentos adquieran carácter ejecutivo: si se trata de un documento privado, la aceptación de que se habla es con el valor propio que jurídicamente tienen estos (Sentencia de las 12:00 m. de 13 de agosto de 1946, Cons. I. B.J., pág. 13565).

³⁰ Véanse, sin embargo, las excepciones contempladas por el art. 11 Cn. y el art. 17 LOPJ.

similares, la certificación de inscripción en el Registro Público Mercantil, si el actor es comerciante, etc. (arts. 178, 1023 y 1024 Pr., XXXVIII Tít. Prel. C., 19 inc. 3° C.C.).

El requisito de descripción de la cosa reclamada se exige para poder identificar con precisión el objeto del litigio para los fines de la triple identidad de la cosa juzgada. El art. 1025 Pr. faculta al actor, sin embargo, a prometer que no señala la cantidad o sustancia de la cosa o el monto de la suma reclamada, aunque en la práctica esto sucede muy raras veces.

1.6.- Ampliación de la demanda

El actor puede ampliar o rectificar su demanda, o demandar a más personas, si lo estima conveniente, una vez notificada la misma a cualquiera de los demandados, siempre y cuando ninguno de ellos hubiese contestado la demanda original.

Las modificaciones se consideran como una demanda nueva para los efectos de su notificación, y sólo desde que esta diligencia se practica corre el plazo para contestar la primera demanda (art. 1036 Pr.).

Son pues dos los requisitos que se exigen para que el actor pueda ampliar o rectificar la demanda: a) Que la demanda haya sido ya notificada; y b) que la demanda no haya sido contestada.

2.- Trámite de mediación

2.1.- Generalidades del trámite de mediación

Aun cuando juzgar y ejecutar lo juzgado es una forma de resolver los litigios, esta no es la única forma de resolver los conflictos. En determinadas circunstancias es más adecuado utilizar otros sistemas de resolución de conflictos, en vez utilizar la vía contenciosa judicial.

La mediación judicial constituye una de estas formas alternativas de solución de conflictos, por medio de la cual son las propias partes las que consiguen poner fin al litigio mediante un acuerdo adoptado tras una negociación, reduciéndose el papel del mediador a acercar a los contendientes, pero sin imponer en ningún caso este acuerdo.

El art. 94 LOPJ establece que la mediación es un trámite obligatorio en todos los procesos de familia, civiles, mercantiles, agrarios y laborales³¹, el cual se lleva a cabo

³¹ Art. 38 RLOPJ: Al tenor de lo dispuesto en el Arto. 94 LOPJ, la mediación no procede en los siguientes casos: 1. Diligencias prejudiciales; 2. Juicios ejecutivos

previo a cualquier actuación o diligencia dentro del juicio. De acuerdo al art. 37 RLOPJ, su objeto es que las partes encuentren frente al juez la solución a la disputa mediante el diálogo y la negociación.

2.2.- Procedimiento de la mediación

El procedimiento es el siguiente: recepcionada la demanda, y si llena los requisitos para ser admitida, el juez convoca a las partes dentro de sexto día a la realización del trámite de mediación (art. 94 inc. 1 LOPJ).

Si el juez se considera implicado se excusará y abstendrá de conocer de la demanda y la trasladará al juez subrogante (art. 39 RLOPJ). Si el juez es objeto de recusación previo al trámite de mediación o al inicio de este, se resolverá la cuestión por el procedimiento establecido por la Ley, y el juez subrogante convocará a las partes a la mediación (art. 42 RLOPJ).

La citación para el trámite de mediación se hará mediante cédula judicial que debe contener: la denominación del juzgado, el nombre y domicilio del destinatario, el nombre y domicilio del actor, la acción que se promueve, el día, hora y lugar de la celebración del trámite, la información de las consecuencias legales de la inasistencia, y la firma del secretario que autoriza y el sello del juzgado (art. 40 RLOPJ).

Aun cuando la audiencia de mediación es una, puede realizarse hasta en dos sesiones, si es necesario para el cumplimiento de sus fines y objetivos. Estas sesiones deben realizarse en el local del juzgado dentro de días y horas hábiles (art. 41 RLPOJ). Si la primera audiencia no puede realizarse por motivos justificados, el juez convocará a una segunda audiencia en un plazo no mayor de diez días contados a partir que debió darse la primera (art. 43 RLOPJ).

Las partes pueden, sin embargo, acordar una prórroga del plazo de la mediación, lo que se hará constar en el acta respectiva (art. 48 RLOPJ).

Durante la realización de la mediación, el juez invitará a las partes a que solucionen amigablemente el conflicto, haciéndoles ver el tiempo y recursos que invertirán en el

singulares con renuncia de trámite y en los de ejecución de sentencia; 3. En los casos en que el procedimiento especial ya prevé la celebración de un trámite conciliatorio; 4. Nulidad de matrimonio; 5. Declaración de incapacidad y de rehabilitación; 6. Causas en que el Estado o sus entidades descentralizadas sean parte, salvo que actúen como personas de Derecho Privado; 7. Interdicción civil; 8. Quiebras o concursos; 9. Aquellos casos en que la Ley expresamente lo prohíba.

proceso judicial, pero se abstendrá de emitir opinión acerca de a quien le asiste o no la razón, insistiendo en aclararles que su cometido es el de reconciliarlos. El papel del juez en la mediación es, pues, solamente el de un amigable componedor (art. 94 incs. 3 y 4 LOPJ).

Las actuaciones realizadas en el trámite de mediación son confidenciales, y nada de lo propuesto o afirmado durante él podrá usarse en el proceso judicial de que se trate ni en otro proceso que se origine en hechos distintos de los que dieron origen a la controversia sobre la que recayó la mediación (art. 44 RLOPJ).

De lo actuado en el trámite se levantará un acta, en la cual se reflejará la voluntad de las partes. Esta acta contendrá: 1) denominación del juzgado; 2) lugar y fecha de la suscripción del acta; 3) nombres, identificación y domicilio de los participantes; 4) Descripción de la controversia; 5) Acuerdo alcanzado, sea total o parcial, estableciendo de manera precisa los derechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas y exigibles, o en su caso la falta de acuerdo o la inasistencia de las partes a la audiencia (en este último caso, se entenderá como negativa a llegar a acuerdo); 6) firma de los participantes y del juez (art. 45 RLOPJ).

El acta se copiará en un Libro especial que deben llevar todos los juzgados para ese efecto (art. 49 RLOPJ).

Cuando se llegue a acuerdo por las partes, el juez dicta un auto haciendo constar tal circunstancia y manda a archivar las diligencias, que contendrán el acta correspondiente. Si no hay acuerdo o una o ambas partes no concurren al trámite, su negativa se entenderá como falta de acuerdo (art. 94 inc. 5 LOPJ) y se agregará al expediente el acta en que consta tal circunstancia y se sigue el trámite del proceso judicial (art. 46 RLOPJ). La certificación librada por el juez correspondiente de haberse realizado un previo trámite de mediación entre las partes constituye un requisito formal para tramitar la demanda.

Si las partes llegan a un avenimiento, el acta judicial del acuerdo prestará mérito ejecutivo, teniendo el carácter de cosa juzgada, debiendo cumplirse por las partes sin excusa alguna y sin que quepa recurso alguno (art. 94 inc. 4 LOPJ). El mismo órgano judicial que conoció de la mediación ordenará la ejecución, cuando se incumpla el acuerdo. Para ello se aplicará el mismo procedimiento que en la ejecución de sentencias (art. 47 RLOPJ).

3.- Emplazamiento

3.1.- Concepto de emplazamiento

El emplazamiento es una figura de formal convocatoria que hace el órgano judicial mediante una providencia o auto de mero trámite: Presentada la demanda, el juez la pondrá en conocimiento del demandado, quien una vez notificado puede oponerse en el término que la ley le concede.

Según se desprende del art. 1020 Pr., el emplazamiento es un trámite esencial del juicio, cuya omisión anularía todo lo actuado en adelante.

Esta omisión autoriza a interponer el recurso de casación en la forma, de acuerdo con el art. 2058 inc. 8 Pr.

Nos referimos, por supuesto, al emplazamiento de la demanda, pues existe también emplazamiento en los recursos de apelación y casación. El art. 108 Pr. dice: *“Emplazamiento es el llamamiento que se hace a alguno para que comparezca en juicio, en virtud de una demanda o de un recurso interpuesto”*.

3.2.- Tratamiento procesal del emplazamiento

El emplazamiento debe hacerse personalmente en el oficio del secretario, en el despacho judicial, en la habitación del notificado, en el lugar donde se encuentre, o donde habitualmente ejerce su industria, profesión o empleo (arts. 116 y 128 Pr.).

Si el emplazado no está en su casa pero si en el lugar, se le notificará por cédula que se entregará a cualquier persona mayor de quince años que se encuentre habitando la casa de quien hubiere de ser notificado, o al vecino más próximo que fuere encontrado. Si no se encuentra a quien entregarla o si se niegan a recibirla, se fijará la cédula en la puerta de la casa (art. 120 Pr.).

Si no se conoce el domicilio de la persona que debe ser emplazada o si por haberse mudado de residencia se ignora su paradero, la notificación puede hacerse por cédula que se fijará en la tabla de avisos del juzgado y se publicará en un periódico de la localidad si lo hubiere, o en el Diario Oficial (art. 122 Pr.)³².

³² Art. 97 LOPJ: “Cuando la ley mandase a publicar edictos o carteles en el Diario Oficial, La Gaceta, se entenderá cumplido este trámite haciendo la publicación en lugar visible y en la forma establecida por la ley, en un periódico de circulación nacional y en la correspondiente Tabla de Avisos. En estos casos el costo de estas publicaciones correrá a cuenta de la parte interesada”

La cédula judicial debe reunir los requisitos contenidos en los arts. 130 y 131 Pr.: 1° El juez o tribunal que haya dictado la providencia, la fecha de esta y el negocio en que haya recaído; 2° El nombre y apellidos de la persona a quien se haga la notificación; 3° El objeto de la citación y la parte que la hubiere solicitado; 4° El término dentro del cual debe comparecer el emplazado y el juzgado o tribunal ante quien deba verificarlo; 5° La prevención de que si no compareciere le parará el perjuicio a que hubiere lugar en Derecho.

3.2.1.- Cuando es un solo demandado

Realizado el trámite de mediación, y si las partes no llegan a acuerdo, el juez proveerá mandando correr traslado por seis días a la parte demandada para que conteste la demanda (arts. 1037 y 1038 Pr.) bajo apercibimientos de ley si no la contesta³³. Los seis días de que se habla se entienden sin perjuicio del plazo extraordinario que se concede por la distancia³⁴.

3.2.2.- Cuando el demandado es uno solo y reside fuera de la circunscripción del juez de la causa

Si el emplazamiento se hace mediante exhorto, el emplazado tiene tres días para alegar ante el juez requerido la incompetencia del juez requirente. Si este considera fundada la incompetencia, actuará de acuerdo a lo dispuesto para las cuestiones de competencia por inhibitoria.

Pasados los tres días, si considera infundada la incompetencia, el juez requerido devolverá al juez requirente el exhorto diligenciado (art. 1040 Pr.).

3.2.3.- Cuando son varios los demandados

Si la parte demandada es múltiple, cada uno de los demandados será emplazado individualmente para que se persone al proceso, pero el plazo para contestar correrá a partir de la última notificación.

³³ La frase "bajo apercibimientos de ley en caso de no hacerlo" se refiere a la sanción de declaratoria de rebeldía contra el demandado que no contesta en el plazo legal (art. 1061 Pr.).

³⁴ Art. 29 Pr.: "*Siempre que la persona emplazada o citada resida o se encuentre en otro lugar del que se encuentre el juez o tribunal, se le dará el término de la distancia que será a razón de un día por cada treinta kilómetros de distancia*".

3.2.4.- Cuando son varios demandados y unos viven en el lugar del proceso y otros fuera de él

Si hay demandados en el lugar del proceso y fuera de él, el término del emplazamiento comienza a correr desde la notificación del último demandado que se halle fuera del lugar del juicio.

3.2.5.- Nombramiento de procurador común

Siendo varios los demandados, inmediatamente después de que las partes hayan comparecido y contestado la demanda, se deberá nombrar a estos un procurador común, conforme lo establecido en los arts. 82 a 86 Pr. (art. 1063 Pr.). Si los demandados no se ponen de acuerdo en la persona del procurador común, este será nombrado por el juez.

3.3.- Efectos del emplazamiento

Los efectos del emplazamiento son materiales y procesales.

Entre los efectos materiales del emplazamiento tenemos:

a.- Constituye en mora al deudor³⁵. El requerimiento judicial o extrajudicial es uno de los requisitos para constituir en mora al deudor.

b.- Interrumpe la prescripción³⁶. Toda prescripción se interrumpe civilmente por el emplazamiento judicial, embargo o secuestro notificado al poseedor o deudor, aunque el juez que conozca de estos actos sea incompetente, aunque dichos actos sean nulos por defecto en la forma, y aunque el demandante no haya tenido capacidad para presentarse en juicio.

c.- Convierte en litigioso un crédito. De acuerdo con el art. 2741 C., se entiende litigioso un crédito desde que se notifica la demanda.

Entre los efectos procesales del emplazamiento tenemos:

a.- El demandado puede oponer la excepción de litispendencia.

Para que prospere esta excepción es preciso que exista entre el primero y segundo juicio identidad de partes, de objeto y de causa. No importa que el demandante del primero aparezca como demandado en el segundo, o viceversa. Se concede para evitar que se pronuncien decisiones contradictorias e impedir

³⁵ Art. 1859 C.

³⁶ Art. 927 C.

que las partes puedan corregir los errores cometidos en el primer juicio.

b.- Comienza a obrar la caducidad de la instancia. Originalmente la Corte Suprema de Justicia sostenía que la caducidad comenzaba a obrar cuando se contestaba la demanda³⁷. Posteriormente cambió de criterio y sostuvo que la caducidad empieza a obrar desde la notificación de la demanda, pues es a partir de entonces que existe juicio³⁸.

4.- La rebeldía

La rebeldía consiste en la falta de desembarazamiento por el demandado de las cargas procesales de personamiento en el proceso y contestación de la demanda en el plazo que la ley le concede para ello. La rebeldía se decreta únicamente a ruego de parte.

4.1.- Casos en que procede la rebeldía

La rebeldía sólo tiene lugar cuando se trate del término señalado para comparecer al juicio y contestar la demanda, a solicitud de parte. Procede la rebeldía en los casos siguientes:

a.- Cuando el demandado no comparece (no se persona) al proceso en el plazo que se le hubiese señalado más el de la distancia, en su caso (art. 1060 Pr.).

b.- Cuando el demandado no comparece en el término del emplazamiento para contestar la demanda (art. 1063 Pr.).

c.- Cuando habiendo sacado los autos en traslado, el demandado deja pasar el término para contestar la demanda, hasta devolverlos con apremio y sin contestación. Si se devuelven por apremio y fuera del término, pero con contestación fechada dentro del término (fecha ficta) se tendrá por legal el escrito de contestación y no habrá rebeldía (art. 1064 Pr.).

4.2.- Consecuencias jurídicas de la declaración de rebeldía

Declarada la rebeldía por auto, esta surte los siguientes efectos sobre el proceso:

a.- Se tiene por fictamente contestados por el reo, en sentido negativo, todos y cada uno de los hechos y pretensiones aducidos por el actor en la demanda.

³⁷ S. de las 11:00 a.m. de 18 de enero de 1918, B.J., pág. 1818; S. de las 12:00 m. de 15 de febrero de 1933, B.J., pág. 8186.

³⁸ C. de 12 de marzo de 1982.

b.- Las notificaciones sucesivas solo se harán al actor, excepto las que se refieran al auto que decreta la propia rebeldía y a la sentencia definitiva que recaiga en el proceso, las que se notificarán al reo por cédula colocada en la tabla de avisos del juzgado (art. 136 Pr.). Sin embargo no se permitirá al actor iniciar sus gestiones antes de vencer los plazos legales (art. 1065 Pr.). El rebelde puede ser citado a absolución de posiciones o reconocimiento de firma, pero su presentación para esos actos no extingue la rebeldía (art. 1071 Pr.).

c.- Si el reo purga la rebeldía, tomará su defensa con prueba o sin ella, según la naturaleza del juicio y del estado en que este se halle, sin poder hacerlo retroceder ni aún para pruebas, si ya pasó su término (art. 1066 Pr.).

d.- La notificación de la sentencia definitiva termina con el estado de rebeldía, pero las notificaciones posteriores se harán al reo también por la tabla de avisos (art. 1070 Pr.).

4.3.- Forma de purgar la rebeldía

La rebeldía puede levantarse por el demandado antes de la sentencia definitiva, satisfaciendo de previo las costas causadas, las cuales son las incurridas por el actor desde la notificación hecha a él del auto de la rebeldía hasta el momento en que se presenta el rebelde.

Solicitado el levantamiento de la rebeldía, el juez tasa en el expediente las costas causadas, sin que de su resolución haya recurso alguno y sin que sea necesario notificarlo. El interesado pondrá en manos del juez el valor de las costas para entregarlo al actor, e inmediatamente se dictará auto levantando la rebeldía. Si el actor no quiere recibir el importe de las costas, después de ocho días el juez las depositará en la tesorería municipal a la orden del actor.

Al rebelde no se le admitirá excusa alguna para no satisfacer las costas de la rebeldía, y mientras no las pague seguirá rebelde. Si paga durante el curso del juicio, satisfará también las costas adicionales causadas durante su rebeldía.

4.4.- Incidente para evitar la declaratoria de rebeldía

Si el demandado ha tenido justa causa para no contestar la demanda³⁹, él mismo o cualquier otra persona pueden pedir que se les reciba prueba sobre esa causa, a fin de evitar la declaratoria de rebeldía. En este caso el juez dará traslado por

³⁹ Art. 169 Pr.: “Al impedido con justa causa no le corre el término que se le hubiese dado para contestar la demanda”.

tres días a la parte contraria, abrirá a pruebas por ocho días con todos los cargos, y dictará resolución dentro de los tres días siguientes (arts. 1074 y 1075 Pr.). Comprobado el impedimento, y según la gravedad y circunstancias del caso, el juez ordenará la suspensión de la rebeldía y concederá un plazo perentorio y suficiente para que conteste la demanda. Este plazo no puede exceder del que se concede para la contestación de la demanda. Si no se comprueba el impedimento, el demandado pagará las costas del incidente, más los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado (arts. 1076 y 1077 Pr.).

5.- Contestación de la demanda

De acuerdo al art. 1041 Pr., la contestación es la respuesta que da el demandado a la acción del actor, confesando o contradiciendo está y sus fundamentos.

El demandado puede adoptar varias posturas en relación con la demanda interpuesta por el actor: a) no contestar el fondo de la demanda, oponiendo excepciones dilatorias; b) contestar el fondo de la demanda, allanándose total o parcialmente ella; c) contestar el fondo de la demanda, negando pura y simplemente todos sus extremos; d) contestar el fondo de la demanda, oponiendo excepciones perentorias; e) contestar el fondo de la demanda, oponiendo excepciones mixtas; f) contestar el fondo de la demanda, contrademandando a su vez al actor.

5.1.- Interposición de excepciones dilatorias

El demandado puede abstenerse de contestar el fondo de la demanda, oponiendo en lugar de ello las excepciones dilatorias. Estas son defensas alegadas por el demandado in limine litis que tienen como objetivo diferir, retrasar o suspender el curso de la acción, es decir, son aquellas atacan vicios de forma de la demanda, pero sin negar o tocar la pretensión material objeto del proceso.

Todas las excepciones dilatorias que asistan al demandado deben oponerse dentro del plazo ordinario para contestar la demanda. Pasado ese término no se le dará curso a ninguna, excepto si versan sobre nulidades absolutas insubsanables, o que procedan de causas supervenientes. El demandado estará dentro del plazo ordinario para contestar la demanda cuando interpone las excepciones dilatorias con fecha ficta dentro de él, aunque devuelva el expediente después de pasado dicho término (art. 824 Pr.).

Las excepciones dilatorias se resuelven por el juez por el procedimiento del incidente común en la misma cuerda, antes

de seguir adelante con la tramitación del proceso. Una vez resueltas las excepciones dilatorias, se concederá al demandado un nuevo traslado para que conteste sobre el fondo de la demanda.

Sin embargo, el juez puede de oficio resolver sobre su competencia por razón de la materia, la cuantía o la jerarquía, o sobre la legitimidad de las personas que intervienen en el proceso. En el caso de la falta de legitimidad procesal, el juez pone en conocimiento de las partes la nulidad notada, para que dentro de tercero día ratifiquen o no lo actuado. Si se ratifica por quien tiene derecho a hacerlo, se declara la validez de lo actuado. Cabe también la ratificación en los casos del art. 439 Pr.⁴⁰, cuando se ha obrado con personería admitida antes en el mismo juicio.

El art. 821 Pr. da una lista simplemente enumerativa de las excepciones dilatorias:

a.- La incompetencia de jurisdicción: comprende la incompetencia por razón de la cuantía, el territorio y la jerarquía.

b.- La falta de legitimidad en las personas: se refiere a la legitimación procesal activa y pasiva. Con ella se ataca tanto la inexistencia de poder como la deficiencia del mismo.

c.- El beneficio de excusión: Este se refiere al derecho que tiene el fiador simple de pedir que se persigan primero el patrimonio del deudor y solo en el caso de no cumplir éste la obligación o de ser insuficiente o deficiente la ejecución en contra de éste, se proceda contra el fiador simple. No puede ser alegada por el fiador solidario.

d.- La oscuridad en la demanda: Se produce cuando de la lectura del libelo de demanda no es posible determinar que se pide, como se pide, contra quién se pide, en que condiciones se pide, en que carácter se pide, por qué se pide, etc. En tales circunstancias no es posible dictar un fallo congruente con la demanda. No debe confundirse esta excepción con la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda o con la excepción de ineptitud de libelo.

⁴⁰ Art. 439 Pr.: "Transcurridos los términos para preparar, interponer o mejorar cualquier recurso, sin haberlo utilizado, quedará de derecho consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada la resolución a que se refería, sin necesidad de declaración expresa sobre ello. Las partes pueden pedir se les libre ejecutoria, y se acordará así con noticia de la contraria".

e.- La acumulación de acciones contrarias o inconexas: la acumulación de acciones contrarias consiste en la exclusión por contrariedad, lo que implica que de admitirse una de las acciones acumuladas la otra debe rechazarse por ser su ejercicio incompatible con el ejercicio de la primera⁴¹. La acumulación de acciones inconexas se refiere al caso de no existir puntos de contacto entre las pretensiones acumuladas, y por lo tanto no se justifica intentarlas en una misma demanda. La conexión entre las acciones puede ser con relación al sujeto, el objeto o la causa de pedir.

f.- La petición antes de tiempo o de modo indebido: La petición antes de tiempo consiste en la existencia de un plazo o trámite pendiente. La petición de modo indebido se refiere al modo en el cumplimiento de la obligación (demandar una obligación como pura y simple cuando está sujeta a condición, o demandar como deudor solidario cuando es deudor mancomunado).

g.- El derecho de citar por evicción: No es propiamente una excepción dilatoria, pues no abre incidente de previo y especial pronunciamiento. Sin embargo, tiene el efecto de paralizar el proceso mientras se cita al arrendador o vendedor, según sea el contrato que da origen al proceso en que incide el pedimento de citación de evicción.

h.- cualquier otra que tenga por objeto diferir o suspender el curso de la acción: Como ya se dijo, la lista del art. 821 Pr. no es cerrada, dejando abierta la posibilidad de intentar como dilatoria cualquier otra defensa que sin atacar el fondo de la demanda paralice la tramitación del proceso.

Ejemplos de ellas son la excepción de ineptitud de libelo, que consiste en la falta de cumplimiento en la demanda de los requisitos exigidos por los arts. 1021 y 1025 Pr., o la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, que se funda en el incumplimiento de ciertas cargas o requisitos especiales (por ejemplo, para poder demandar en juicio los comerciantes deben presentar certificación de estar inscritos como tales en el Registro Público Mercantil, según el art. 19 inc. 3 C.C.).

⁴¹ Diferente es el caso de la acumulación eventual o subsidiaria, en el cual las acciones subsidiarias se plasman para el evento o el caso que se rechace la acción principal.

5.2.- Allanamiento a la demanda

El allanamiento consiste en la aceptación que hace el demandado de las pretensiones que el actor a plasmado en su demanda.

El allanamiento puede producirse en forma tácita o expresa:

a.- El allanamiento es tácito cuando el demandado renuncia al traslado que se le manda dar para que conteste la demanda, o cuando al contestar no contradice los hechos y pretensiones aducidos por el actor (arts. 1041 y 1051 Pr.). En estos casos, si la demanda versa solo sobre puntos de Derecho, el juez cita para sentencia y dicta la que corresponde; si hubiera hechos que probar, se abrirá la causa a prueba (art. 1042 Pr.).

b.- El allanamiento es expreso cuando el demandado en su contestación acepta clara y positivamente los hechos y pretensiones de la demanda. En este caso se fallará la causa principal sin necesidad de otra prueba ni trámite (art. 1049 Pr.).

El allanamiento puede también ser total o parcial. Si es total, se aplica la regla del art. 1049 Pr.; si es parcial, se tiene por comprobada la pretensión en la parte que se aceptó, y se sigue la tramitación del proceso sobre la parte que no se aceptó.

5.3.- Negativa pura y simple de la demanda

El demandado puede contestar el fondo de la demanda simplemente negando, rechazando e impugnando todos y cada uno de los hechos principales y de las pretensiones deducidas por el actor en la demanda.

Con esta forma de contestación, el demandado se libera de la carga procesal de contestación pero sin asumir la carga de la prueba. Es sobre el actor que recae la carga de probar los extremos de su demanda, y de no hacerlo se dicta sentencia absolviendo al demandado⁴².

El demandado debe tener el cuidado de negar por separado cada hecho principal y cada pretensión contenida en la demanda, sin excluir ninguna, pues lo que no niegue se le tendrá por aceptado o confesado y ya no será objeto de debate en el juicio.

⁴² Arts. 1078 a 1081 Pr.

Como ya se dijo, cuando el demandado es declarado rebelde, se tiene como fictamente contestada la demanda en sentido negativo.

La Corte Suprema de Justicia sostiene que negar pura y simplemente la demanda equivale a oponer la excepción de falta de acción del actor.

5.4.- Interposición de excepciones perentorias

El demandado puede contestar el fondo de la demanda negando todos sus extremos y oponiendo a la vez excepciones perentorias. Estas son aquellas defensas alegadas por el demandado y que tienen como objetivo extinguir o destruir la acción, es decir, atacan el fondo mismo de la demanda, negando la pretensión material del actor.

Las excepciones perentorias pueden oponerse además en cualquier estado del proceso y en cualquiera de sus instancias antes de la sentencia definitiva, protestando quien las opone no haber tenido conocimiento de ellas hasta ese momento.

Al oponer las excepciones perentorias, el demandado asume la carga de la prueba, pues constituyen afirmaciones de hechos positivos, y quien afirma algo en el proceso debe probarlo.

Las excepciones perentorias se resuelven por el juez con la sentencia definitiva.

El art. 820 Pr. da una lista simplemente enumerativa de las excepciones perentorias:

a.- El pago: Consiste en la demostración del cumplimiento natural de la obligación. Debe reunir los supuestos de persona, tiempo, lugar, modo y cantidad.

b.- La cosa juzgada: Es la fuerza y autoridad que la ley atribuye a la sentencia ejecutoriada. Si ya existe una sentencia firme que a resuelto el caso a favor del demandado, y existiendo la triple identidad de personas, objeto y causa, este puede oponer esta sentencia contra la nueva demanda del actor.

c.- El dolo: Existe dolo cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiese hecho (art. 2469 C.).

d.- El miedo grave: Es un vicio del consentimiento que permite declarar la nulidad de los contratos u obligaciones. La ley faculta a los jueces a calificarlo atendiendo a la edad, sexo

y condición de quien lo sufra. El temor simplemente respetuoso no es motivo de nulidad.

e.- La transacción: Consiste en un contrato en el que las partes se hacen mutuas y recíprocas concesiones y renunciaciones. La oponible es, lógicamente, la que se realizó extrajudicialmente.

f.- La remisión: Es un modo de extinguir las obligaciones por el perdón del acreedor a favor del deudor, a quien releva del cumplimiento de la obligación pendiente. Esta regulada en los arts. 2125 a 2138 C.

g.- El pacto de no pedir: Es llamado también pactum non petendo, pacto de remisión o pactum conventum. Mediante él las partes convienen en que el acreedor no exigirá al deudor el pago de la deuda o el cumplimiento de la obligación.

h.- La prescripción: Se refiere por supuesto a la prescripción negativa o extintiva que opera como un medio de extinguir las obligaciones. Consiste en la liberación de una carga u obligación por el lapso de tiempo y bajo las condiciones determinadas por la ley (art. 886 C.).

i.- Cualquier otra que acredite la falta de acción en el actor. Como en el caso de las excepciones dilatorias, la lista del art. 820 Pr. es enunciativa y no taxativa, por lo que el demandado puede oponer cualquier otra excepción que ataque el derecho sustantivo alegado por el actor en la demanda: la novación, la compensación, la confusión, la imposibilidad de pago, la nulidad, la falsedad civil, etc.

5.5.- Interposición de excepciones mixtas o anómalas

Estas son aquellas defensas alegadas por el demandado que pueden oponerse como dilatorias o como perentorias, en sus respectivos plazos.

Al oponer las excepciones mixtas o anómalas, el demandado asume la carga de la prueba, pues constituyen afirmaciones de hechos positivos, y es regla general que quien afirma algo en el proceso debe probarlo.

Las excepciones mixtas son perentorias por sus efectos destructivos con relación a la pretensión material. Si se les califica a estas tres excepciones como mixtas es sólo en cuanto a la forma o tiempo de hacerlas valer.

Por ello el art. 822 Pr., al enumerarlas menciona dos de las que ya se habló al tratar las excepciones perentorias: la transacción y la cosa juzgada. La tercera, el finiquito, no es

más que la aprobación que dan las dos partes de una administración patrimonial de bienes ajenos a las cuentas rendidas por el administrador, cerrando todo reclamo de una u otra parte, siendo su esencia es también, obviamente, perentoria. Las excepciones mixtas pueden oponerse en la oportunidad de las excepciones dilatorias o bien junto con la contestación de la demanda, como excepciones perentorias.

Si se oponen como perentorias, las excepciones mixtas se resolverán por el juez en la sentencia definitiva.

Si se oponen como dilatorias, y son acogidas por el juez, las excepciones mixtas concluyen con el proceso, dejando sin juzgar el fondo, pero como son perentorias por su esencia, también acaban con la causa aunque no se haya juzgado el fondo de manera directa, pues necesariamente aquel está en juego.

Es por esto que contra la sentencia que las acoge no cabe el recurso de reposición de que habla el art. 449 Pr., sino que el actor debe apelar de ella y en su momento recurrir de casación.

6.- Contrademanda, reconvencción o mutua petición

La contrademanda (llamada también reconvencción o mutua petición) es la acción que el reo ejecuta contra el demandante, aprovechando el proceso que inició éste. Cuando se contrademanda, las partes son a un mismo tiempo actor y reo, situación autorizada por el art. 935 Pr.

La facultad de reconvenir encuentra su fundamento en el principio de economía procesal: así como se le permite al actor acumular sus pretensiones en contra del reo, también debe permitírsele a éste ejercer en la reconvencción las pretensiones que tenga contra el actor. De esta forma se evita la multiplicidad de litigios, lo cual representa un ahorro de tiempo y de dinero tanto para las partes como para el Estado.

Para la procedencia de la reconvencción es necesario que concurren las condiciones siguientes:

a.- Competencia del tribunal ante quien se reconviene: Esta competencia debe ser por razón del territorio, materia, cuantía y jerarquía. Sin embargo, en cuanto a la cuantía, se le permite por excepción al reo reconvenir por una pretensión que debería conocer un juez inferior (arts. 254 y 1053 Pr.)⁴³.

⁴³ Art. 254 Pr.: *“Los jueces y tribunales que tengan competencia para conocer de un juicio, la tendrán también... para las cuestiones que se susciten por vía de*

b.- Identidad de procedimientos: La acción o acciones ejercidas en la contrademanda deben ser susceptibles de tramitarse por el mismo procedimiento que la demanda.

Este requisito no lo consagra expresamente el Código de Procedimiento Civil, pero resulta de las razones siguientes:

i.- La reconvención se tramita y falla de acuerdo con los trámites de la demanda principal y, en consecuencia, debe estar sujeta a los mismos procedimientos de la demanda;

ii.- La reconvención se considera como una acumulación objetiva de acciones y, por consiguiente, deben tramitarse las acciones bajo un mismo procedimiento.

Sin embargo, es permitido que una acción susceptible de tramitarse en forma ejecutiva, sumaria o especial, se ejerza en la reconvención que se haga en un juicio ordinario.

c.- El contrademandado debe ser el actor: Este requisito resulta del art. 1052 Pr. y lo confirma la Corte Suprema de Justicia⁴⁴. Según el art. 129 Pr., no es preciso que la contrademanda sea notificada personalmente al demandante, pues se le puede hacer a su apoderado en el juicio principal, aunque no tenga poder expreso para la reconvención.

El Código de Procedimiento Civil no exige la conexidad o relación material entre las pretensiones de la demanda y las de la contrademanda: Si Mario demanda a Guillermo para que le pague doscientos mil córdobas que le debe en virtud de un mutuo, Guillermo puede contrademandar para que Mario le pague cien mil córdobas por los daños causados en un accidente de tránsito.

La reconvención debe hacerse en el escrito de contestación de la demanda, sujetándose a las formalidades prescritas para la demanda.

Pasada esa oportunidad, se produce la preclusión del derecho a contrademandar y, en consecuencia, no se podrá proponer por vía de reconvención ninguna pretensión. Sin

reconvención... aunque el conocimiento de estas cuestiones, atendida a su cuantía hubiere de corresponder a un juez inferior si se entablaran por separado ...".

Art. 1053 Pr.: "No podrá deducirse reconvención sino cuando el juez tenga competencia para conocer de ella, estimada como demanda, o cuando sea admisible la prórroga de jurisdicción. Podrá también deducirse aun cuando por su cuantía la reconvención debería ventilarse ante un juez inferior. Para estimar la competencia, se considerará el monto de los valores reclamados por vía de reconvención separadamente de los que son materia de la demanda".

⁴⁴ Sentencia de las 09:45 a.m. de 9 de marzo de 1967, B.J., pág. 52.

embargo, el reo conserva la facultad de proponerlas en un proceso distinto, mientras no haya prescrito su derecho⁴⁵.

Como se dijo, la reconvención se sustancia por los procedimientos de la demanda principal, y se tramita y falla conjuntamente con esta, pero no se concederá aumento extraordinario del término probatorio para recibir pruebas de fuera de la República, cuando no se conceda en la demanda principal⁴⁶.

En la reconvención se admiten los escritos de réplica y dúplica. En el escrito de réplica puede el demandante ampliar su demanda y oponer excepciones dilatorias contra la reconvención; pero el contrademandante no puede hacer en la dúplica otra contrademanda en cuanto a la ampliación⁴⁷.

La reconvención encierra una acción independiente, autónoma; aunque a veces tiene relación o conexión material con la del actor primitivo. Esta autonomía produce las consecuencias siguientes:

a.- El reo no está obligado a reconvenir. Puede o no hacerlo, según convenga a sus intereses.

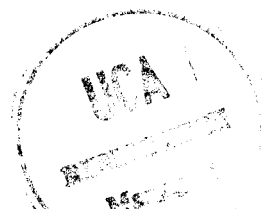
b.- Si el reo no reconviene, conserva su acción o acciones para ejercerlas en juicio separado.

c.- El desistimiento, la deserción y la caducidad de la acción no terminan con la reconvención, la cual se continuará tramitando con independencia de la acción extinguida.

⁴⁵ Arts. 1052 y 1057 Pr.

⁴⁶ Art. 1054 Pr.

⁴⁷ Art. 1055 Pr.



UNIDAD IV

EL PROCESO DECLARATIVO. LA PRUEBA

1.- Concepto de prueba

Con la contestación de la demanda (si no se ha producido el allanamiento) quedan fijados los términos de la litis: el actor a planteado los hechos en que funda sus pretensiones y el demandado ha expresado los hechos en que funda sus excepciones y defensas.

En la fase siguiente del proceso, las partes dedicarán su actividad procesal a convencer al juez de la veracidad de los hechos alegados en sus escritos de demanda y contestación, con el fin de obtener una sentencia favorable a sus pretensiones o excepciones.

El vocablo prueba se usa en dos sentidos distintos:

a.- Como actividad procesal de la parte destinada a producir en el ánimo del juez la certeza de que los hechos que ha alegado son verídicos y de que los alegados por la contraparte son falsos.

b.- Como el conjunto de medios de los que la parte se vale para producir aquella certeza: prueba documental, prueba pericial, prueba testifical.

Como actividad procesal de la parte, la prueba recae sobre todos los hechos, circunstancias, actos y contratos que sirven de fundamento para sus pretensiones o defensas. Se exceptúan, sin embargo, algunas categorías de hechos que no necesitan ser demostrados: los hechos aceptados o admitidos tácita o expresamente por la parte, los presumidos por la ley, los hechos notorios, etc.

La carga de la prueba (onus probandi) recae generalmente sobre la parte que hace afirmaciones en el proceso. El art. 1079 Pr. indica que "la obligación de producir prueba corresponde al actor; si no probare, será absuelto el reo, más, si éste afirmare alguna cosa, tiene la obligación de probarlo". El art. 1080 Pr. lo reafirma al establecer que "el que niega no tiene la obligación de probar, a no ser que la negativa contenga afirmación".

2.- Requisitos generales de la prueba en el proceso civil

Para que la prueba sea eficaz debe reunir ciertos requisitos generales, sin perjuicio de los requisitos especiales que deben observarse para cada medio de prueba en particular. Estos requisitos comunes a la actividad probatoria son:

UNIDAD IV

EL PROCESO DECLARATIVO. LA PRUEBA

1.- Concepto de prueba

Con la contestación de la demanda (si no se ha producido el allanamiento) quedan fijados los términos de la litis: el actor a planteado los hechos en que funda sus pretensiones y el demandado ha expresado los hechos en que funda sus excepciones y defensas.

En la fase siguiente del proceso, las partes dedicarán su actividad procesal a convencer al juez de la veracidad de los hechos alegados en sus escritos de demanda y contestación, con el fin de obtener una sentencia favorable a sus pretensiones o excepciones.

El vocablo prueba se usa en dos sentidos distintos:

a.- Como actividad procesal de la parte destinada a producir en el ánimo del juez la certeza de que los hechos que ha alegado son verídicos y de que los alegados por la contraparte son falsos.

b.- Como el conjunto de medios de los que la parte se vale para producir aquella certeza: prueba documental, prueba pericial, prueba testifical.

Como actividad procesal de la parte, la prueba recae sobre todos los hechos, circunstancias, actos y contratos que sirven de fundamento para sus pretensiones o defensas. Se exceptúan, sin embargo, algunas categorías de hechos que no necesitan ser demostrados: los hechos aceptados o admitidos tácita o expresamente por la parte, los presumidos por la ley, los hechos notorios, etc.

La carga de la prueba (onus probandi) recae generalmente sobre la parte que hace afirmaciones en el proceso. El art. 1079 Pr. indica que "la obligación de producir prueba corresponde al actor; si no probare, será absuelto el reo, más, si éste afirmare alguna cosa, tiene la obligación de probarlo". El art. 1080 Pr. lo reafirma al establecer que "el que niega no tiene la obligación de probar, a no ser que la negativa contenga afirmación".

2.- Requisitos generales de la prueba en el proceso civil

Para que la prueba sea eficaz debe reunir ciertos requisitos generales, sin perjuicio de los requisitos especiales que deben observarse para cada medio de prueba en particular. Estos requisitos comunes a la actividad probatoria son:

a.- La prueba debe ser pertinente: Esta consiste en la necesaria relación que debe haber entre la prueba propuesta y los hechos que se debaten. La prueba propuesta solo puede recaer sobre hechos que han sido propuestos en la demanda o en la contestación, de lo contrario sería impertinente. El art. 1082 Pr. establece que las pruebas deben ser pertinentes, centradas en el asunto que se discute, tanto en lo principal como en los incidentes y en las circunstancias importantes.

La falta de observancia de este requisito faculta al juez a repeler de oficio la prueba que estime impertinente (art. 1083 Pr.).

b.- La prueba debe ser útil: La utilidad de la prueba consiste en que sea idónea, apta, capaz de llevar al juez al convencimiento de la existencia o inexistencia del hecho debatido. Si no lleva a ese convencimiento, la prueba es inútil y debe ser rechazada de oficio por el juez.

c.- La prueba debe rendirse con citación de parte contraria⁴⁸: Si a una parte le asiste el derecho de proponer la declaración de un testigo, a la contraparte le asiste el derecho de repreguntarlo; si una parte propone una inspección, a la contraparte tiene el derecho de asistir y hacer las observaciones que estime conveniente. Lo que se exige es que la contraparte tenga conocimiento de que se ha propuesto la prueba y que se ha proveído, pero si no asiste a la practica de la prueba esto no la invalida. Lo que produce nulidad es la falta de citación a la parte contraria (arts. 1086 y 1088 Pr.).

d.- La prueba debe rendirse ante el juez de la causa o por su requisitoria: Toda prueba debe ser practicada ante el juez de la causa, excepto cuando la prueba es practicada por otro juez a pedimento o requisitoria del juez del proceso. Esto se produce cuando debe realizarse una diligencia de prueba fuera del asiento del juez de la causa, por lo cual este pide auxilio judicial al juez del lugar donde va practicarse.

e.- La prueba debe rendirse dentro de la estación probatoria: Con excepción de la prueba instrumental (documental) y de confesión, todas las pruebas deben ser propuestas y rendidas dentro del período de pruebas ordinario, o dentro del extraordinario, la prórroga o la ampliación.

⁴⁸ Art. 177 inc. 1 Pr.: “Siempre que se ordene o autorice una diligencia con citación, se entenderá que no puede llevarse a efecto sino pasadas veinticuatro horas después de la notificación de la parte contraria, la cual tendrá derecho a oponerse o deducir observaciones dentro de dicho plazo, suspendiéndose en tal caso la diligencia hasta que se resuelva el incidente”.

El término de pruebas ordinario es de veinte días (art. 1090 Pr.).

Este término puede ser extendido de forma extraordinaria en dos supuestos:

a.- Si la prueba debe rendirse en otro departamento o en alguna de las Repúblicas centroamericanas, el término ordinario de prueba se aumenta en un día por cada treinta kilómetros o fracción (arts. 1091 y 1092 Pr.);

b.- Si la prueba debe producirse en otro lugar diferente a lo enunciado anteriormente, se concede el término de seis meses para rendir la prueba, si concurren las circunstancias señaladas en el art. 1094 Pr.⁴⁹ (arts. 1093 y 1095 Pr.).

El término ordinario puede también prorrogarse conforme lo establecido en el art. 164 Pr. que establece que "*serán prorrogables los términos cuya prórroga no esté expresamente prohibida por la ley*". Para ello es necesario pedir la prórroga antes del vencimiento del término ordinario, alegando justa causa. La existencia de justa causa queda a criterio del juez, sin que contra su apreciación se conceda recurso alguno. El art. 165 Pr. indica que la prórroga no puede sobrepasar la mitad del término original, por lo que en el proceso ordinario no puede ser mayor de diez días. El plazo prorrogado es común para todas las partes, quienes pueden proponer y rendir todas las pruebas que estimen convenientes.

El período probatorio puede también ampliarse, según el art. 1108 Pr. La ampliación es un supuesto especial. Para que se conceda es necesario que se haya propuesto y proveído una prueba en el período ordinario, y que esta no se haya podido evacuar sin culpa de quien la propuso. En este caso el juez concederá un período de ocho días para evacuar esa prueba. Este término es individual y solo puede ser aprovechado por quien lo pidió y sólo para rendir la prueba que en su momento no pudo rendirse.

⁴⁹ Estas son: 1° Que se haga la solicitud dentro del término ordinario; 2° Que los hechos a probar hayan ocurrido en ese país extranjero; 3° Si la prueba es testifical, que se exprese el nombre, apellido, profesión, vecindad, señas de habitación y residencia de los testigos; 4° Si la prueba es instrumental, que se señalen los archivos donde se hallan los documentos que deben copiarse y que estos sean conducentes al pleito.

3.- Fases de la actividad probatoria

En general, para producir válidamente prueba en juicio, es necesario realizar una serie de actos que pueden ser divididos en cinco fases:

a.- **Proposición de la prueba:** Por aplicación de los principios procesales dispositivo y de rogación, en el proceso civil la prueba debe ser propuesta por la parte a la cual le interesa. La proposición se realiza mediante un escrito que debe contener, por lo menos, la designación precisa del medio de prueba que se quiere evacuar y la finalidad de la prueba que se propone. Además, debe cumplirse con los requisitos particulares del medio de prueba de que se trate.

Aunque la proposición se hace dentro del período probatorio, la determinación de los hechos esenciales que deben probarse y la selección de los medios idóneos para lograr la prueba de la pretensión alegada, es una actividad que el litigante realiza previo a la interposición de la demanda, al fijar la estrategia general del juicio.

b.- **Admisión de la prueba:** Esta es una actividad propia del juez, quien debe determinar si la prueba propuesta por la parte es admisible o no. Para ello toma en cuenta dos elementos: la pertinencia de la prueba propuesta (asunto al que nos referimos arriba) y la admisibilidad de la prueba propuesta (en el proceso civil se utiliza el sistema de *numerus clausus*, por lo que únicamente son admisibles los medios de prueba expresamente señalados en el art. 1117 Pr., y además la promesa deferida regulada en los arts. 1237 a 1254 Pr.).

Si el juez determina que el medio de prueba propuesto es pertinente y admisible, entonces provee la prueba, es decir, dicta un auto admitiendo la prueba y ordenando su recepción con citación a la parte contraria. De ser necesario, señalará el lugar, hora y fecha en que la prueba debe practicarse, así como cualquier otra circunstancia que sea necesaria para llevarla a cabo.

Contra la resolución del juez que deniega la prueba por impertinente o inútil, la parte perjudicada puede usar el recurso de reposición contra autos y sentencias interlocutorias simples, regulado en el art. 448 Pr. También conserva el derecho a reproducir su alegación en el escrito de expresión o contestación de agravios, si el asunto llega al conocimiento del Tribunal de Apelaciones por vía del recurso de alzada, de acuerdo a los arts. 495 y 2022 Pr., y puede incluso pedirse la apertura a pruebas en apelación para que sea el Tribunal de

Apelaciones quien determine si la prueba es pertinente o útil (art. 2024 Pr.).

Contra la resolución del juez que admite un medio de prueba, no se concede a la parte contraria recurso alguno. Puede, sin embargo, ilustrar al juez en su alegato de bien probado acerca de la impertinencia o inutilidad del medio de prueba en cuestión, para tratar de que el juez lo desestime en la sentencia.

c.- Evacuación o rendición de la prueba: En esta fase participan el juez y las partes. Consiste en la practica de la prueba según las reglas que para el caso establezca el Código de Procedimiento Civil y el Código Civil.

d.- Impugnación de la prueba: Esta fase puede o no estar presente en la actividad probatoria, pues si la prueba es rendida cumpliendo todos los requisitos establecidos para ello, no habrá lugar a impugnación.

Lo que se impugna en esta fase no es la valoración que el juez haga de la prueba, sino la falta de cumplimiento de los requisitos formales establecidos para practicar la prueba.

e.- Valoración de la prueba: La valoración de la prueba corresponde en exclusiva al juez. Consiste en la actividad que realiza el juez para determinar la efectividad de la actividad probatoria de las partes, es decir, determinar si realmente los medios propuestos y rendidos por las partes fueron idóneos y realmente llevaron a la convicción de ser ciertos los hechos alegados.

En el proceso civil, la prueba se valora por el sistema de la prueba tasada (llamado también "sistema de tarifa legal"). Este consiste en que la valoración no la hace libremente el juez, sino que este se encuentra sujeto a reglas rígidas que establece la propia ley con relación al peso relativo de cada medio probatorio. El juez de lo civil no tiene la potestad de apreciar la prueba fuera de las reglas establecidas por la ley.

El Título XX del Libro II del Código de Procedimiento Civil establece la graduación legal de los medios de prueba: los arts. 1394 y 1397 Pr. indican que para resolver cualquier tipo de causas es necesario que se produzca la plena y perfecta prueba, y que no se acepta la semiplena prueba. El art. 1395 Pr. indica que cuando se produzca por ambas partes plena

prueba, prevalecerá la más fuerte según el orden establecido por ese mismo artículo⁵⁰.

Si ambas partes presentan pruebas de igual género, estas se neutralizan y como en tal caso el actor no cumple con la obligación de probar que le impone el art. 1079 Pr., el juez debe obligatoriamente dictar sentencia absolviendo al demandado y declarando sin lugar la demanda.

4.- Medios de prueba en el proceso civil

Los medios de prueba admisibles en el proceso civil están regulados en los arts. 1117 a 1397 Pr. y 2356 a 2434 C.

De acuerdo al art. 2357 C. y al art. 1117 Pr., los medios legales de prueba son:

- 1° La cosa juzgada;
- 2° Los documentos;
- 3° La confesión;
- 4° La inspección del juez;
- 5° Los dictámenes de peritos;
- 6° La deposición de testigos;
- 7° Las presunciones e indicios.

A estos debe sumarse la promesa deferida (art. 1237 Pr. y siguientes).

Como los jueces civiles son también competentes para conocer de las causas mercantiles, debe agregarse a estos medios de prueba los regulados por los arts. 111 a 117 C.C.:

4.1.- La cosa juzgada

Esta regulada en los arts. 2358 a 2363 C., y 1119 a 1124 Pr. El art. 2358 C. establece que la cosa juzgada hace legalmente cierta la existencia o la inexistencia de la relación jurídica que en ella se declara, pero solamente las sentencias definitivas dictadas en jurisdicción contenciosa adquieren tal carácter (arts. 2359 C. y 1119 Pr.). Nos referimos, por supuesto, a la cosa juzgada material.

⁵⁰ El orden es el siguiente: 1° La **cosa juzgada**; 2° La **presunción de derecho**; 3° La **promesa deferida** por la parte o por el juez; 4° La **inspección personal**; 5° La **confesión judicial**; 6° La **prueba instrumental**; 7° El **dictamen de peritos**; 8° La **prueba de testigos**; 9° La **presunción humana**, cuando hace plena prueba. La presunción legal no tiene entonces cabida porque cede a la prueba contraria, salvo en el caso de la presunción de derecho de que habla el número 2°.

El fundamento de la cosa juzgada material se expresa en la locución latina *non bis in idem* (no volver sobre lo mismo) es decir, no se puede volver a juzgar lo ya resuelto por que, de lo contrario, el mundo sería un caos de litigios interminables. La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material es un acto jurídico inatacable y esencialmente no revocable, aunque si puede ser renunciado. La autoridad de cosa juzgada sólo la adquiere la sentencia definitiva que se encuentra firme (es decir, que no es susceptible de ulterior recurso).

El art. 2359 C., en armonía con los arts. 1120 y 1121 Pr. se refieren a la acción y excepción de cosa juzgada. Sólo puede alegarse como acción o como excepción cuando entre el primer juicio y el segundo existe la triple identidad de sujetos, objeto y causa de pedir.

Esgrimida como acción, permite al actor victorioso abrir la vía ejecutiva en un proceso de ejecución de sentencia. Utilizada como excepción, da al demandado que fue absuelto en el primer juicio la oportunidad de defenderse del actor que trata de reproducir la pretensión por la que fue ya derrotado. En ambos casos (como acción y como excepción) la cosa juzgada se demuestra presentando la certificación de la ejecutoria de la sentencia de que se trata.

Si la parte a quien le favorece no hace uso oportuno de la cosa juzgada, entonces se considera que renuncia a ella y el juez no la puede hacer valer de oficio.

4.2.- La prueba documental o instrumental

a.- Concepto de documento

La prueba instrumental o documental está regulada en los arts. 2364 a 2404 C., y 1125 a 1199 Pr.

Aunque ni el Código Civil ni el Código de Procedimiento Civil dan una definición o concepto de documento, del análisis de sus disposiciones se deduce que a los efectos del proceso civil nicaragüense sólo se considera como tal aquel que contiene signos de escritura. Por ello, consideraremos como "documento" toda incorporación de un pensamiento sobre papel mediante signos de escritura⁵¹.

⁵¹ Esta definición excluye, pues, a los planos, fotografías, videocintas, grabaciones magnetofónicas, radiografías, dibujos, etc., los cuales no son considerados como documentos en nuestro proceso civil.

b.- Clasificación de los documentos

Así definidos, los documentos se clasifican en documentos públicos y documentos privados.

Los documentos públicos se distinguen de los documentos privados por que en la formación de los primeros participa un funcionario al que la ley le confiere la potestad de investir el documento con el atributo de fe pública, es decir, la participación del funcionario le otorga plena credibilidad al contenido del documento. Los documentos privados, por el contrario, se forman con la participación de las partes, sin intervención de funcionario que certifique su autenticidad.

Esta diferencia es fundamental desde el punto de vista probatorio: mientras que la autenticidad del documento público se prueba por el mismo documento, la autenticidad del documento privado hay que probarla por otros medios (por reconocimiento expreso o tácito, o por verificación o cotejo de letras, en su caso).

Los documentos públicos se subdividen a su vez en documentos auténticos e instrumentos públicos (escrituras públicas y actas notariales).

Los documentos auténticos son los emanados de funcionarios públicos en uso de sus funciones y en ejercicio de sus atribuciones (por ejemplo, las certificaciones de partidas de nacimiento emitidas por el Registrador del Estado Civil de las Personas, las certificaciones de sentencias emitidas por el juez y el secretario que autoriza).

Los instrumentos públicos son el producto de la actividad de los notarios como fedatarios públicos dentro de las atribuciones que les concede la Ley del Notariado y otras leyes y disposiciones conexas (por ejemplo, escritura de compraventa, acta de protesto de un título-valor).

El art. 1125 Pr. hace una relación, incompleta, de los documentos que se consideran públicos, sin diferenciar entre documentos auténticos e instrumentos públicos:

1º Las escrituras públicas otorgadas con arreglo a Derecho;

2º Las certificaciones emitidas por los corredores de comercio y los agentes de bolsa, con referencia al Libro de Registro de sus operaciones según lo regule el Código de Comercio y leyes especiales;

3° Los documentos expedidos por los funcionarios públicos que estén autorizados para ello, en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones;

4° Los libros de actas, estatutos, ordenanzas, registros, catastros y demás documentos que se hallen en archivos públicos o dependientes del Estado o los municipios, y las copias sacadas y autorizadas por los secretarios y archiveros por mandato de la autoridad judicial;

5° Las ordenanzas, estatutos y reglamentos de sociedades, comunidades o asociaciones, siempre que estuvieren autorizadas por autoridad pública, y las copias autorizadas en la forma dispuesta en el número anterior;

6° las ejecutorias y las actuaciones judiciales de toda especie;

7° Los despachos telegráficos y telefonemas extendidos de acuerdo a las disposiciones de los arts. 2399 a 2404 C.

c.- Requisitos para la eficacia probatoria de los documentos públicos

El art. 1126 Pr. establece los requisitos que deben cumplir los documentos públicos para que tengan plena eficacia probatoria en juicio:

1° Deben llegar al proceso con citación de parte contraria. Los que llegan al proceso sin citación de la parte contraria deben cotejarse con sus originales, previa citación de parte contraria si ésta a impugnado expresamente la autenticidad del documento. Si no hay impugnación, no se precisa el cotejo y el documento tiene plena eficacia probatoria.

2° Si el testimonio que se presenta es de sólo una parte del documento original, debe agregarse a los autos el contenido que la contraparte considere conveniente.

3° Los testimonios o certificaciones deben ser libradas por el encargado del archivo, oficina o registro en que se hallen los documentos, o bien por el secretario del juzgado donde radiquen los autos.

El cotejo de los documentos con sus originales se practica por el secretario del juzgado, quien en presencia de las partes o de sus representantes se persona en el archivo donde se encuentran los documentos. Para ello se señala de previo el lugar, día y hora del cotejo. Si lo estima conveniente, el cotejo podrá hacerlo el juez.

El art. 1127 Pr. establece los casos de excepción en que no es necesario o posible aplicar la regla del cotejo:

1° Las ejecutorias, certificaciones y testimonios de sentencias firmes expedidas en forma legal por los jueces y tribunales;

2° Las escrituras públicas antiguas que carezcan de matriz, y todas aquellas escrituras cuyo protocolo hubiera desaparecido;

3° Cualquier otro documento público que carezca de original o registro con el que pueda cotejarse.

El art. 1133 Pr. indica que no hacen prueba los documentos rotos o cancelados en parte sustancial (nombre de los otorgantes, de los testigos instrumentales o del notario, la fecha, etc.). Tampoco hacen fe las correcciones hechas al documento, si no se salvan antes de las firmas de los otorgantes, testigos y notario.

Los documentos públicos otorgados en el extranjero son admitidos como válidos y de igual fuerza probatoria que los otorgados en Nicaragua, si cumplen los siguientes requisitos⁵²:

1° Que el asunto o materia del acto o contrato sea lícito y permitido por las leyes del país de otorgamiento y de Nicaragua;

2° Que los otorgantes tengan aptitud y capacidad legal para obligarse según su ley personal;

3° Que en su otorgamiento se hayan respetado las formas y solemnidades exigidos en el país donde se realizó el acto o contrato (*lex loci*);

4° Que el documento esté legalizado y se garantice la autenticidad de los mismos mediante la vía diplomática.

Si el documento no está redactado en castellano, debe traducirse, lo cual puede hacerse aún privadamente, pero si la parte contraria impugna la traducción, esta se vuelve a hacer por intérprete nombrado por el juez (art. 1132 Pr.).

d.- Los documentos privados

Como ya se expresó, el documento privado es el otorgado por particulares sin intervención de funcionario público o notario en ejercicio de sus atribuciones. El documento privado

⁵² Art. 402 de la Convención Sobre Derecho Internacional Privado (Código de Bustamante). Este instrumento internacional tiene la categoría de Ley de la República.

carece por sí mismo de autenticidad, requiriéndose que ésta sea probada judicialmente, si es discutida (arts. 1151 Pr. y 2385 C.).

Existen dos formas de dar autenticidad al documento privado: el reconocimiento de firma (expreso o ficto) y la verificación de firma.

El reconocimiento de firma se realiza citando a la persona a quien se opone el documento privado para que el día y hora señalados por el juez comparezca personalmente a reconocer su firma en el mismo. Si el citado comparece y reconoce su firma en el documento, entonces se trata de un reconocimiento expreso.

Si el citado no comparece, previa constancia de secretaría se le cita por segunda y última vez. Si tampoco comparece a reconocer la firma, se pide que previa constancia de secretaría se declare fictamente reconocida la firma en el documento.

También se declara fictamente reconocida la firma cuando el citado, a pesar de haber concurrido al trámite de reconocimiento, se retira del despacho a pesar de advertirle el juez que de irse se tendrá por reconocida la firma (arts. 1160 y 1209 Pr.); o cuando el citado no contesta firme y categóricamente si es su firma o no, sino que se limita a dar respuestas evasivas, a pesar de advertirle el juez que de continuar con evasivas se tendrá por reconocida la firma (arts. 1158 y 1159 Pr.).

En todos los casos en que el juez declare reconocido el documento privado, se copiará íntegramente en la sentencia el documento que se manda tener por reconocido (art. 1152 inc. 2 Pr.). El documento reconocido judicialmente en forma expresa o ficta tiene el valor de una escritura pública (art. 1151 Pr.).

El reconocimiento de firma puede pedirse en cualquier estado de la causa y aun como diligencia prejudicial. Si se pide fuera del término probatorio una vez vencido este no hay necesidad de término extraordinario, y se actúa conforme lo dispuesto en el art. 1100 inc. 2 Pr.

Si el citado comparece al trámite de reconocimiento y niega ser esa su firma, puede procederse al trámite de verificación de firma para probar la validez del documento privado (arts. 1162 y 1173 Pr.).

La verificación de firma es un trámite especial que puede realizarse como un juicio sumario autónomo o como un incidente especial dentro del proceso principal en el cual se

trata de hacer valer al documento privado como medio de prueba (art. 1175 Pr.).

La verificación de firma tiene la finalidad de demostrar con el apoyo de otros medios probatorios, incluidas la testifical y el cotejo de letras, la autenticidad de una firma suscrita en un documento privado y que ha sido negada por su presunto suscriptor en una diligencia prejudicial de reconocimiento o cuando se le presentó como prueba en el juicio principal. La sentencia de la verificación que declara la autenticidad del documento produce iguales efectos que la sentencia del reconocimiento.

Cuando se tramita como incidente dentro de un proceso principal, tiene la característica de que se utiliza en él el término probatorio ordinario, siempre que no sean menos de ocho. Si quedan menos de ocho se completa el plazo mínimo para la verificación. Si el término probatorio ya ha concluido, se otorga un plazo especial improrrogable de ocho días (arts. 1176 a 1179 Pr.).

En este incidente de verificación no se dicta sentencia interlocutoria, sino que la resolución del juez sobre él se dicta en la sentencia definitiva en que se decida sobre la legitimidad o ilegitimidad del documento y sobre el fondo del asunto (art. 1184 Pr.).

La verificación se realiza por peritos calígrafos que cotejan la firma plasmada en el documento negado con una que conste en un documento indubitado que señale la persona que pida el cotejo. Para este efecto se consideran indubitados: 1° Los documentos que las partes reconozcan como tales de común acuerdo; 2° La escritura matriz; 3° Los documentos privados reconocidos en juicio por la parte a quien se atribuye la dudosa; 4° El mismo escrito impugnado, en la parte que reconozca la letra como suya aquel a quien perjudique (art. 1182 Pr.).

Si no hay un documento que contenga una firma que haya sido aceptada como propia por el que niega, el juez dictará un párrafo para que sea copiado a mano por quien niega, poniendo su firma al pie. Si se niega se le podrá estimar confeso en el reconocimiento del documento impugnado, con tal que se demuestre que sabe escribir o por lo menos firmar. El juez hará la comprobación por sí mismo después de oír a los peritos, y apreciará el dictamen de estos conforme a la sana crítica (art. 1183 Pr.).

e.- Incidente de falsedad civil

La falsedad de un documento consiste en que este contenga declaraciones contrarias a la verdad o que su texto haya sido adulterado o modificado materialmente. No debe confundirse la falsedad con la nulidad del instrumento, pues esta consiste en el incumplimiento de solemnidades legales en el instrumento o la carencia de capacidad de los otorgantes.

Cuando el documento es alterado material o físicamente (por adición, supresión o modificación) nos encontramos ante la llamada falsedad objetiva o material.

Cuando el documento hace constar un hecho o circunstancia que jamás ha ocurrido en la realidad material y/o jurídica, nos encontramos ante la llamada falsedad ideológica, subjetiva o civil propiamente dicha. La falsedad civil lesiona la autenticidad del acto o del instrumento que contiene al acto.

Tanto el instrumento público como el documento privado pueden ser redargüidos de falsos en cualquier estado del juicio en primera y segunda instancia. Es por tanto un incidente especial que escapa de la exigencia de oportunidad que pesa sobre las cuestiones incidentales (art. 1185 Pr.). El portador del documento atacado de falso siempre tiene la prueba en contrario para afirmar su validez y autenticidad.

La falsedad civil puede dar lugar a un proceso autónomo que se tramita en la vía ordinaria, y en el cual la pretensión es obtener una declaración de falsedad para destruir los efectos aparentes del instrumento falso; o puede ser una cuestión incidental dentro de un juicio principal en el cual se trata de hacer valer al documento redargüido de falso. Es este último caso el que estudiaremos.

La especialidad de este incidente tiene tres aspectos:

Primero, con relación al período probatorio debe distinguirse: si la falsedad se reclama antes de que la causa principal se abra a pruebas, se usa el término ordinario para probar la falsedad (art. 1186 Pr.); si la falsedad se propone cuando va corriendo el plazo de pruebas de la causa principal, se usará todo el tiempo que quede de ese plazo, siempre que no sea menor de los ocho días que corresponden a los incidentes comunes, y si quedan menos de ocho días el juez dará el plazo para completar ese tiempo (arts. 1187 y 1188 Pr.) siendo este plazo perentorio; Si la falsedad se alega estando ya concluido el plazo de pruebas, el juez concederá los ocho días de los incidentes comunes (art. 1187 Pr.).

Segundo, no se dicta sentencia interlocutoria que ponga fin a la cuestión incidental, sino que la falsedad se resuelve en la propia sentencia definitiva, y sobre la base de su procedencia o improcedencia se falla sobre el fondo del proceso principal.

Tercero, si previamente se está tramitando la verificación de firma y en ese estado se alega la falsedad civil, en el mismo incidente de verificación debe probarse la falsedad sin que haya ampliación del término de pruebas, pues el de ocho días de la verificación es común para el de falsedad.

Todos los medios probatorios reconocidos por el Código de Procedimiento Civil pueden ser utilizados para probar la falsedad, pero si se usa de la testifical se requieren por lo menos cinco testigos para hacer plena prueba (arts. 1195, 1365 y 1366 Pr.).

Las declaraciones del notario, juez, secretario o testigos instrumentales no tienen valor legal alguno si ellos están implicados en la falsedad. Contrario sensu, si no están implicados en la falsedad, si deben valorarse sus declaraciones (art. 1196 Pr.). Si se trata de nulidad del instrumento si son admisibles sus declaraciones, al tenor del art. 1192 Pr.

Si se impugna la autenticidad de un documento público que carece de matriz, protocolo o archivo en el cual realizar el cotejo, y el funcionario autorizante no lo reconoce, se puede pedir el cotejo de letras si el documento a sido escrito a mano. Si no es posible el cotejo de letras y no hay otro documento indubitado para cotejar el documento impugnado, por razones de seguridad jurídica se da a ese documento todo el valor legal que corresponde a los documentos públicos (art. 1191 Pr.).

4.3.- La prueba de confesión (absolución de posiciones)

a.- Concepto de confesión

La confesión está regulada en los arts. 2405 a 2416 C., y arts. 1200 a 1236 Pr.

En el proceso civil, la confesión es la declaración judicial o extrajudicial, espontánea o provocada, por la cual una parte capaz de obligarse por sí mismo, reconoce un hecho, circunstancia, acto u obligación que le causa perjuicio.

La confesión hecha en un juicio y que no ha sido tomada en cuenta en él, puede usarse en otro. Si ha sido tomada en cuenta, es mejor invocar la cosa juzgada (art. 1227 Pr.).

b.- Clases de confesión

La confesión puede ser judicial, cuando se produce ante un juez, o extrajudicial, cuando se produce fuera del proceso.

La confesión judicial, a su vez, puede ser espontánea o provocada, y puede efectuarse como diligencia prejudicial o dentro de un proceso principal. En el primer caso, es siempre provocada por el interrogatorio de la contraparte, rendido bajo promesa de ley; en el segundo caso puede ser espontánea, si el absolvente confiesa en sus escritos sin ser interrogado, o provocada por el interrogatorio de la contraparte o del juez, rendido bajo promesa de ley.

La confesión judicial provocada puede ser además expresa o tácita (ficta). Es expresa cuando se realiza en términos explícitos. Es tácita o ficta la que establecen los arts. 1208 y 1217 Pr., por no comparecer el absolvente a las posiciones, por la negativa a contestar o por dar respuestas evasivas.

La confesión extrajudicial puede ser verbal o escrita. La verbal es inútil para probar demandas en las que no se admita prueba de testigos (art. 2101 Pr.). La confesión extrajudicial escrita puede constar en un instrumento público o privado, y en ese caso tendrá el valor probatorio que la ley da a estos (art. 2413 C.).

Tanto la confesión judicial provocada (expresa o tácita) como la espontánea producen plena prueba, ya sea que se haga personalmente o por apoderado especialmente facultado para ello (art. 1218 Pr.).

La confesión judicial puede también ser simple, calificada o compleja:

Es simple la que reconoce el hecho sin agregar o suprimir nada (Por ejemplo: si, recibí los cinco mil córdobas).

Es calificada la que reconoce el hecho, pero lo une a otro que cambia su naturaleza (por ejemplo: si recibí los cinco mil córdobas, pero no como mutuo sino como donación). Aquí las partes están de acuerdo con la existencia del hecho, pero no en su calificación jurídica.

Es compleja cuando se reconoce el hecho y su calificación jurídica, pero se le agrega una circunstancia fundada en un hecho diferente del confesado (por ejemplo: si recibí los cinco mil córdobas en calidad de mutuo, pero ya los pague).

c.- Requisitos de la confesión

Son dos: a) la capacidad legal de quien confiesa; b) que recaiga sobre hechos personales del confesante (art. 2405 C.). La capacidad legal se refiere a la que tienen todos los que pueden obligarse por sí mismos, sin ministerio ni autorización de otros.

La persona llamada a absolver posiciones puede negarse a contestar las referidas a hechos no personales, pero en ese supuesto se admite la confesión de terceros que personalmente estén enterados del hecho de que se trate por haber intervenido en ellos a nombre del litigante interrogado, si este lo solicita, aceptando la responsabilidad (art. 1210 Pr.).

d.- Irrevocabilidad de la confesión

Hecha la confesión, está no podrá revocarse por el confesante, salvo cuando se incurrió en error de hecho (art. 2408 C.). En este caso, el confesante que reclama haber cometido error de hecho debe probar el error dentro del término probatorio de la causa, si este ya estuviera corriendo, o en un término probatorio especial de cuatro días, si el término probatorio de la causa ya está vencido o si para que se venza faltan menos de cuatro días.

e.- Inadmisibilidad de la confesión

La prueba de confesión no es admisible en todo tipo de procesos. El art. 1232 Pr. establece los casos en que no cabe la confesión:

1° En los juicios de separación de cuerpos, divorcio o nulidad de matrimonio, la confesión de las partes sobre la verdad de las causas alegadas no hará prueba;

2° En el juicio sobre la legitimidad del hijo, la confesión de la madre no hará prueba;

3° En la liquidación de la sociedad conyugal no hace prueba contra los acreedores de la sociedad la confesión de uno de los cónyuges de pertenecer al otro bienes determinados;

4° La confesión de padres o guardadores fallidos de pertenecer ciertos bienes a sus hijos o sus menores, respectivamente, no hacen prueba contra los acreedores;

5° En los casos en que la ley exige instrumento público como prueba de un acto o contrato, la confesión de las partes no hace prueba;

6° En todos los casos en que por la confesión pueda eludirse el cumplimiento de las leyes (art. 2406 C.);

7° En los demás casos determinados por las leyes generales o especiales.

vi.- Procedimiento de la confesión provocada (absolución de posiciones)

El procedimiento es similar al del reconocimiento de firmas, ya estudiado.

Como ya se dijo, puede provocarse la confesión por la parte interesada, sea como una diligencia prejudicial, sea dentro del juicio principal en cualquier estado del mismo antes de la citación para sentencia (arts. 1100 y 1203 Pr.).

La parte interesada formulará la petición de absolución de posiciones por escrito. Las posiciones se presentan en un sobre cerrado, que el juez conservará sin abrir hasta el acto de comparecencia del absolvente⁵³. Las preguntas deben ser claras, precisas y pertinentes al objeto del debate (art. 1204 Pr.), formuladas en sentido asertivo y con sólo un hecho por pregunta.

El sobre con las posiciones puede presentarse también el mismo día de la comparecencia, pero en este caso debe hacerse la presentación de las posiciones por lo menos media hora antes de la señalada para la comparecencia⁵⁴.

El juez citará al absolvente con un día de anticipación, por lo menos, señalando la hora, el día y el lugar en que debe llevarse a efecto la comparecencia. Si el absolvente no comparece ni alega justa causa que se lo impida, previa constancia de secretaría de lo falta de comparecencia, se le cita por segunda vez, bajo apercibimiento de tenerlo por confeso si no comparece (art. 1206 Pr.).

Si tampoco comparece el absolvente a la segunda cita, el petente, previa constancia de secretaría, debe introducir un nuevo escrito pidiendo se tengan como fictamente contestadas en sentido asertivo las preguntas contenidas en el pliego de posiciones.

Si el absolvente comparece a cualquiera de las citas que se le hacen, se abre el sobre de las posiciones y el juez procede a resolver acerca de la admisibilidad de las preguntas, y a continuación procede a examinar al absolvente sobre cada una de las preguntas admitidas.

⁵³ Si el citado está fuera de la República, no puede presentarse el sobre cerrado con las posiciones (art. 1205 Pr.).

⁵⁴ B.J. págs. 13946, 18082 y 19581.

Si el absolvente se niega a contestar las preguntas, abandona el local del juzgado o contesta evasivamente, previa advertencia del juez se procede a declararlo fictamente confeso (art. 1208 y 1209 Pr.).

El absolvente debe contestar las preguntas por sí mismo, de palabra, en presencia de la parte contraria y del abogado de esta, si asistiere, sin auxiliarse de ningún borrador de respuestas, pero se permitirá que consulte notas simples o apuntes, si lo considera conveniente el judicial para auxiliar su memoria (art. 1207 Pr.). No se le permitirá ser asistido por abogado o defensor, ni persona alguna que lo asesore (art. 1212 Pr.).

Las respuestas deben ser afirmativas o negativas, pudiendo agregar las explicaciones que estime convenientes o las que el juez le pida. Si alguna de las preguntas no se refiere a hechos personales del absolvente, este puede negarse a contestarla.

El secretario extenderá un acta judicial de lo ocurrido, en la que se inserta la declaración, la cual podrá ser leída por la parte que absolvió las posiciones o por el juez. El juez preguntará al deponente si ratifica la declaración o si varía, añade o aclara algún aspecto de la misma. A continuación de lo que dijere, el absolvente la firmará con el juez y demás concurrentes, autorizando el acta el secretario.

Si las posiciones se solicitan como prejudicial, se pondrán en el Libro Copiador de Documentos Privados una copia íntegra del pliego de posiciones y del acta de absolución, con razón en dichas piezas de haber sido copiadas en el Libro. Sin esto no se tendrá por auténtica la confesión.

4.4.- La inspección del juez

a.- Concepto de inspección

Está regulada en los arts. 2417 a 2419 C., y arts. 1255 a 1262 Pr.

Es una prueba real porque recae sobre cosas, y una prueba directa porque el juez la aprecia directa e inmediatamente por sus sentidos, de manera que es la percepción sensorial la que forma en el ánimo del juez la convicción acerca de los hechos que se quieren probar.

Su característica distintiva consiste en la ausencia de cualquier instrumento o persona que se coloque entre el juez y la cosa que va a inspeccionar.

Este medio probatorio se emplea cuando para el esclarecimiento y apreciación de los hechos sea necesario que el juez examine por sí mismo y sin intermediarios algún sitio o la cosa litigiosa para formarse una idea exacta, cabal y perfecta del asunto, y quedar así totalmente instruido para dictar su fallo.

b.- Procedimiento de la inspección del juez

Como regla general, esta prueba debe proponerse y evacuarse dentro de la estación probatoria (por el principio de oportunidad que regula el art. 1086 Pr.); sin embargo es posible que de manera excepcional se pueda proponer y recibir en cualquier estado del juicio antes de la citación para sentencia, siempre y cuando el juez de la causa la considere necesaria para quedar instruido del asunto, pues en caso contrario es nula (arts. 1259 y 1260 Pr.).

A petición de parte interesada (o de oficio, cuando al amparo del art. 213 Pr. el juez decreta una diligencia para mejor proveer) se dicta un auto ordenando recibir la prueba y señalando con tres días de anticipación, por lo menos, el día, la hora y el lugar en que se practicará el reconocimiento (art. 1255 Pr.).

Las partes y sus representantes tienen el derecho a concurrir al acto, a hacer al juez las observaciones que considere conveniente y a hacerse acompañar de un práctico en la materia sobre la que versa la inspección⁵⁵. Si el juez considera conveniente oír al práctico, le toma promesa de ley y anota en el acta de la inspección la opinión de éste.

En el acta de la inspección puede el juez asentar los hechos y circunstancias materiales que capte con sus sentidos, sin que por estos señalamientos se le pueda imputar opinión anticipada para fundar un motivo de impugnancia o recusación (art. 1261 Pr.).

Cuando se procede a esta prueba a petición de parte, el promotor de la inspección debe depositar en concepto de gastos necesarios las sumas que el juez le señale para la evacuación de la prueba. Esta suma no es un honorario, sino que sirve para sufragar los gastos indispensables en la recepción de esta prueba (art. 1260 Pr.). Si la inspección se decreta de oficio, ambas partes deben cooperar con los gastos a prorrata.

⁵⁵ Este práctico no es un perito, sino una persona que trata de ilustrar al juez en la inspección. Su parecer es una prueba simplemente ilustrativa, que no es obligatoria ni siquiera bajo las reglas de la sana crítica (B.J. pág. 15652).

Según las necesidades de ilustración del órgano judicial, es posible que con el acto de la inspección concurren la prueba pericial y la testifical. Cada una de ellas se levanta por separado en actas individuales y no en la misma acta, pues la concurrencia de los tres medios es sólo material (arts. 1257 y 1258 Pr.).

4.5.- Los dictámenes de peritos

a.- Concepto de peritos

Está regulada en los arts. 2420 a 2422 C., arts. 1263 a 1294 Pr., arts. 191 a 200 y 202, 204 y 205 LOPJ, y arts. 97 a 100 RLOPJ.

Los peritos son personas con conocimientos especializados de carácter práctico, artístico o científico, que son llamados al proceso para aportar los conocimientos y experiencia que el juez no tiene y no está obligado a tener, y para facilitar la percepción y la apreciación de hechos concretos objeto de debate.

b.- Casos en que procede el peritaje

El dictamen del perito recae sobre un hecho, persona o situación presente y actualmente perceptible o ya establecido, para que el perito traslade al juez su percepción del mismo sobre la base de su conocimiento especializado. Por ello, la doctrina sostiene que, más que un medio probatorio en sí mismo, la pericial constituye un medio auxiliar puesto a disposición del juez para suplir los conocimientos que normalmente éste no tiene.

Es por ello que el art. 1266 Pr. establece que es el juez a quien compete pronunciarse acerca de la pertinencia o impertinencia de esta prueba para declarar su admisibilidad o inadmisibilidad.

Según los arts. 1263 y 1294 Pr., procede la prueba pericial en los casos siguientes:

1º Para conocer o apreciar algún hecho de influencia en el litigio, que exija conocimientos científicos, artísticos o prácticos;

2º Para probar la estimación de una cosa que ya no existe, si por otra parte está probada plenamente su naturaleza y condiciones que tenía;

3° En general, para valorar daños y perjuicios⁵⁶, cuya existencia esté demostrada.

c.- Peritaje facultativo y peritaje obligatorio

El peritaje es obligatorio cuando la ley exige al juez que lo realice: para declarar la demencia (arts. 332 y 333 C.), en el cotejo de letras (art. 1180 Pr.), en la acción de limitación de dominio (art. 1515 Pr.), para comprobar si la cosa común admite cómoda división (art. 1511 Pr.).

El peritaje es facultativo cuando se refiere a puntos de hecho para cuya apreciación se requieren conocimientos científicos, prácticos o artísticos, quedando la determinación de su procedencia en manos del juez.

d.- Procedimiento para el peritaje

Por regla general, la prueba pericial se decreta a petición de parte, aunque excepcionalmente se puede decretar de oficio (art. 1283 Pr. in fine).

La parte interesada propone por escrito la realización de la prueba pericial, señalando con claridad y precisión los puntos sobre los que debe recaer. Recibido el escrito petitorio, el juez ordenará tres días de vista a la parte contraria para que alegue lo que crea conveniente acerca de la pertinencia y utilidad de la prueba propuesta y, en su caso, ampliarla a otros puntos (arts. 1264 y 1265 Pr.).

Vencido el plazo de la vista, haya o no alegado la parte contraria, el juez dicta un auto pronunciándose acerca de la admitiendo o rechazando la pericia propuesta. Si la admite, en el mismo auto determinará los puntos que serán objeto de la prueba (art. 1266 Pr.). Asimismo, con arreglo al art. 194 LOPJ, desinsaculará a dos peritos judiciales.

Seleccionados los dos peritos, el juez dicta un nuevo auto teniéndolos por nombrados y ordenando que se ponga en conocimiento de ellos. El ejercicio del cargo de perito es obligatorio (art. 195 LOPJ)⁵⁷.

⁵⁶ Es **daño** la salida de un bien del patrimonio de una persona (la destrucción de un automóvil, por ejemplo); es **perjuicio** la falta de percepción de los frutos naturales, civiles o industriales que produce un bien (la pérdida de las entradas de un negocio, por ejemplo).

⁵⁷ Art. 198 LOPJ: "En caso de que se solicite informes o pericias a los funcionarios de la Administración Pública, estos están obligados a prestar su colaboración bajo su responsabilidad. Los demás profesionales o técnicos en determinadas materias, podrán ser requeridos hasta por dos veces al año para emitir dictamen pericial en causas judiciales. En este caso los honorarios que se devenguen por su trabajo serán

Los peritos rendirán promesa de ley para cumplir el cargo. Esta promesa puede prestarse antes de emitir su dictamen, cuando se asume el cargo o en el acta misma del dictamen (art. 1279 Pr.).

Los peritos realizarán de previo el estudio de los medios o instrumentos, que sirva de base a su dictamen; luego discuten sus posiciones para ver si hay coincidencia de criterios. Acto seguido, se levanta el acta del dictamen. El dictamen se levanta en una sola acta o en actas separadas.

Si hay discordia entre los peritos, en la siguiente audiencia se procede de oficio por el juez a desinsacular a un tercer perito que dirima la discordia, el cual es promesado igual que los primeros, y se le señala audiencia para dictaminar.

El perito tercero puede seguir las siguientes alternativas:

1° Puede adherirse a una de las opiniones discordantes;

2° Puede tomar elementos de ambas opiniones discordantes;

3° Puede apartar totalmente las opiniones discordantes y emitir su propia opinión.

e.- Apreciación del dictamen pericial

El juez apreciará el dictamen pericial con base a las reglas de la buena (sana) crítica, sin estar obligado a sujetarse a él, excepto cuando se trata de determinar el valor de cosas, en cuyo caso el avalúo debe ser aceptado por el juez.

4.6.- La deposición de testigos

a.- Concepto de testigo

La prueba testifical está regulada en los arts. 2423 a 2430 C., y arts. 1295 a 1378 Pr.

Testigo es toda persona extraña al juicio, al cual es llamada a declarar acerca de hechos relacionados con aquel y que le constan en forma personal o de oídas. La declaración de los testigos recae, pues, sobre apreciaciones de los sentidos.

b.- Capacidad para testificar

En general todas las personas son hábiles para testificar, salvo las excepciones establecidas por razones de impedimento

los fijados en el Arancel Judicial. Si se rehusaren a prestar ese servicio se les impondrá una multa equivalente al triple de lo que hubieren percibido en la función que se niegan a cumplir”.

físico (art. 1313 Pr.), edad (arts. 1311 y 1319 Pr.), falta de probidad (art. 1316 Pr.) o relaciones con los litigantes (art. 1317 Pr.).

Todos los que no estén legalmente impedidos están obligados a declarar como testigos. Quienes sin causa legal que lo justifique se niegan a declarar podrán ser apremiados con multa, y si aún así se resisten, pueden ser conducidos por la fuerza pública, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal⁵⁸.

c.- Clases de testigos judiciales

Los testigos judiciales son los que comparecen al proceso, y pueden ser testigos presenciales (si estuvieron presentes durante la realización de los hechos) y testigos de oídas (si tienen conocimiento de los hechos por haberlos oído de labios de las partes o de los testigos presenciales).

d.- Admisibilidad de la prueba testifical

Las testificales son admisibles, sin límite de cuantía, para la prueba de hechos puros y simples, como por ejemplo, la existencia de una cerca divisoria, el tiempo de la posesión, etc.(art. 2426 C.).

e.- Limitaciones de la prueba testifical

No se admite la prueba testifical:

i.- Para probar los actos, convenios y contratos con valor mayor a cien pesos (doscientos córdobas).

Para hacer la estimación del objeto de la convención o acto, no se toma en cuenta los frutos, intereses u otros accesorios (art. 2423 C.). Si la demanda excede los doscientos córdobas por razón de estos, se admite la prueba testifical.

Si el objeto de la demanda tiene un valor mayor a doscientos córdobas no se admitirá prueba de testigos, aunque el actor limite a ese monto la demanda. Tampoco se admite la testifical en las demandas menores de esa cantidad cuando el actor declare que es parte o resto de un crédito que debió consignarse por escrito.

En el caso de los actos que no sean convenciones, debe tomarse en cuenta las consecuencias del hecho que trata de

⁵⁸ Art. 347 inc. 5° Pn.: "Cometen desacato contra la autoridad: ...5° Los que desobedecen abiertamente a la autoridad"; art. 348 Pn.: "Los reos de cualquiera de los delitos comprendidos en el artículo anterior, sufrirán la pena de prisión de seis meses a cuatro años"

probarse: si estas consecuencias exceden de doscientos córdobas no se admite la prueba de testigos.

ii.- Para probar contra o fuera de lo contenido en documento público o privado, cualquiera sea la cuantía, ni sobre lo que se dijo antes, al tiempo o después de redactarse aquel, salvo lo dispuesto en los arts. 1192, 1194, 1196 y 1197 Pr. acerca de la falsedad civil (arts. 2424 C. y 1304 Pr.).

A pesar de estas restricciones, el art. 2428 C. establece que se puede usar la prueba testifical para probar actos cuyo objeto valga más de doscientos córdobas y para comprobar las convenciones entre las partes en los casos siguientes: a) cuando exista imposibilidad (física o moral) de procurarse la prueba literal; b) cuando se produce la pérdida fortuita de la prueba literal; c) cuando existe un principio de prueba por escrito (siempre que el principio de prueba por escrito emane de la persona a quien se opone, y que el mismo haga verosímil el hecho alegado).

d.- Tramitación de la prueba testifical

El procedimiento de la prueba testifical se regula en los arts. 1320 a 1348 Pr.

En lo civil, la prueba testifical se rinde a solicitud de parte, la que debe presentar por escrito el interrogatorio según el cual van a examinarse los testigos.

En los juicios ordinarios se admiten hasta seis testigos por cada parte, sobre cada hecho que deba probarse; en los incidentes que se produzcan dentro del juicio principal se admitirán hasta tres testigos por cada parte sobre cada hecho que deba acreditarse.

Los testigos harán sus deposiciones con citación de parte contraria y bajo promesa de ley⁵⁹. La contraparte podrá

⁵⁹ Art. 353 Pn.: “Comete delito de falso testimonio el que ya sea como testigo, perito, intérprete o traductor afirmare una falsedad, u ocultare la verdad en todo o en parte, ante autoridad competente, y será castigado con prisión de uno a cinco años, si el falso testimonio fuese cometido en causa civil...”; Art. 354 Pn.: “El que ofreciere o prometiére una dádiva o cualquier otra ventaja a una de las personas a que se refiere el artículo anterior, para que cometa falso testimonio, si la oferta o promesa no fuere aceptada o siéndola, la falsedad no fuera cometida, será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión. En caso contrario, son aplicables al sobornante las penas correspondientes al falso testimonio”; Art. 355 Pn.: “El que se ocupare de ofrecer testigo falso, ya sea en asuntos judiciales o administrativos, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión”.

presentar interrogatorios de repreguntas, sea antes o durante el examen de los testigos.

Las preguntas deben formularse en sentido asertivo, y especificando en cada pregunta un solo hecho. El juez puede hacer a los testigos las preguntas que estime conveniente, siempre que se relacionen con los hechos contenidos en el interrogatorio.

Los testigos están obligados a dar razón de sus dichos, y el juez deberá exigirla aun cuando no se pidan en el interrogatorio.

El juez cuidará que la parte que presente al testigo, y su abogado, estén de espaldas al deponente, haciendo salir a la parte o abogado que no acate esta disposición, que interrumpa al testigo mediante palabras, signos, gestos o hechos, que interviene en la declaración sugiriendo respuesta o que provoca o injuria al declarante, a la parte contraria o a su abogado.

Las partes y sus abogados no podrán interrumpir a los testigos ni hacerles otras preguntas o repreguntas que las contenidas en sus respectivos interrogatorios.

El juez repelerá de oficio las preguntas o repreguntas impertinentes o que a nada conducen; y puede detener al testigo que se niega a declarar, a hacer las explicaciones que se le pidan y a dar razón de su dicho.

La declaración testifical constituirá un solo acto, el que no podrá interrumpirse sino por causas graves y urgentes o por acuerdo unánime de partes y testigos.

El testigo no podrá llevar escrita su declaración, ni leer ningún papel o escrito para contestar las preguntas. Sin embargo, cuando las preguntas se refieran a cuentas, libros, papeles, leyes o decretos, podrá permitírsele que los consulte para dar declaración.

Los gastos ocasionados a los testigos por su comparecencia son a cargo de la parte que los presenta, sin perjuicio de que se los reembolsen si se condena en costas al perdedoso.

e.- Trámite de la prueba testifical realizada fuera del asiento del juez de la causa

Los arts. 1349 a 1352 Pr. regulan las diligencias a realizarse cuando es necesario tomar declaraciones testificales fuera del lugar de asiento del juez de la causa.

Estas se tramitan por vía de exhorto⁶⁰, en el cual se incluyen los pliegos de preguntas y de repreguntas (si la contraparte presenta estas últimas). Si la contraparte no presenta pliego de repreguntas, puede concurrir al lugar de recepción de las declaraciones y presentar ahí las repreguntas.

El escrito donde se pide la prueba testifical fuera del lugar de asiento del juez de la causa debe contener: a) La designación del lugar donde residen los testigos; b) El pliego de preguntas, abierto; c) La promesa de no haber otros testigos del hecho en el lugar del asiento del juez de la causa, en el caso que se pida aumento extraordinario del término (art. 1350 Pr.).

f.- Valoración de la prueba testifical

La valoración de la prueba testifical está regulada en los arts. 1353 a 1366 Pr.

El valor de la prueba testifical se gradúa por la veracidad, imparcialidad y número de los testigos.

Las declaraciones de los testigos deben estar conformes en las personas, en el lugar, en el modo como se ejecutó el hecho y en el tiempo en que aconteció.

Dos testigos presenciales idóneos y conformes en sus dichos hacen plena prueba, excepto en los casos en que la ley exige un mayor número (como en el caso de la falsedad civil). También hacen plena prueba las declaraciones de dos testigos presenciales contestes, es decir, de acuerdo en lo sustancial y no en lo accidental, siempre que lo accidental no modifique la esencia del hecho. Cuatro testigos de oídas hacen plena prueba.

Siendo absolutamente iguales las circunstancias de los testigos presentados por las partes, harán fe los que fuesen de mayor número; si son iguales en número y circunstancias, no habrá prueba del hecho a que se refieran las declaraciones (se cancelan entre sí); siendo igual o desigual el número de testigos, y habiendo diferencia entre ellos en razón de su probidad, veracidad y conocimiento referentes a la causa, será preferida la declaración de aquellos en quienes concurren estas circunstancias.

⁶⁰ El auxilio judicial está regulado en los arts. 113a 123 LOPJ, art. 59 RLOPJ y arts. 140 a 157 Pr.

Son legalmente verdaderas:

1° Las declaraciones de dos o más testigos idóneos, presenciales y contestes acerca de las circunstancias esenciales;

2° Las de los testigos idóneos y contestes que dan razón de sus dichos o demuestran que tienen motivo particular para saber lo que declaran, aunque no sean presenciales;

3° Las declaraciones de testigos que se apoyen en el concepto que se han formado por sus conocimientos especiales en la materia del pleito.

Son legalmente verdaderas las declaraciones de los testigos idóneos que dan razón de sus dichos refiriéndose a lo que oyeron a otro, si concurren las circunstancias siguientes:

1° Que nombren a las personas a quienes oyeron lo que se refiere, y que estas sean cuando menos dos;

2° Que las personas citadas sean testigos presenciales, de buena fama y dignos de todo crédito, y que no puedan ser examinados como testigos.

Carecen de verdad legal:

1° Las declaraciones de los testigos que no dan razón de su dicho, o que varían o son contradictorios en sus exposiciones;

2° Las declaraciones de los convencidos de falsarios.

Para valorar la declaración de un testigo, el juez considerará las circunstancias siguientes:

1° Que no sea inhábil por cualquier causa;

2° Que por su edad, capacidad e instrucción tenga el criterio necesario para juzgar el acto;

3° Que por su probidad, independendencia y antecedentes personales, tenga completa imparcialidad;

4° Que el hecho que se trata de probar sea susceptible de ser conocido por medio de los sentidos, y que lo conozca por sí mismo y no por inducciones ni referencias de otras personas;

5° Que su declaración sea clara, precisa, sin dudas ni reticencias, sea sobre la sustancia del hecho, sea sobre sus circunstancias esenciales;

6° Que no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno.

g.- La tacha de testigos

La tacha de testigos está regulada en los arts. 1367 a 1378 Pr.

Consiste en el señalamiento de un vicio legal que hace al testigo inhábil: falta de edad, falta de capacidad, falta de probidad o por la condición del testigo (art. 1367 y 1368 Pr.). La tacha recae sobre la persona del testigo y no sobre sus dichos o declaraciones. Los vicios de estas deben articularse en el alegato de conclusión o bien probado. No es tachable el testigo presentado por ambas partes.

Las repreguntas no convalidan al testigo tachable. Siempre se conserva el derecho a tachar (art 1369 Pr.).

Al proponer la tacha de los testigos, el proponente debe señalar con claridad y precisión su fundamento. En caso contrario debe ser rechazada por el juez.

La tacha debe hacerse y probarse dentro del término probatorio. Excepcionalmente, cuando la otra parte presenta testigos en los últimos tres días del término de pruebas, se pueden conceder para la prueba de la tacha hasta seis días adicionales. Este plazo no ampara las pruebas de la causa principal, sino solo a las tachas.

Si se recurre a las testificales para probar la tacha, solo se admiten tres testigos. Contra estos testigos no se admite prueba testifical para justificar a su vez la tacha.

La decisión sobre la tacha se hace en la sentencia definitiva.

4.7.- Las presunciones e indicios

a.- Concepto de presunción

Las presunciones están reguladas en los arts. 2431 a 2434 C., y arts. 1379 a 1393 Pr.

El art. 2431 C. nos dice que las presunciones son las consecuencias que la ley o el juez deduce de un hecho conocido, para averiguar un hecho desconocido. El art. 1379 Pr. establece casi el mismo concepto, agregando que en el primer caso se llama presunción legal y en el segundo caso se llama presunción humana.

Esto significa que mediante una operación de razonamiento deductivo, con base a un hecho probado (conocido) se da por probado un hecho desconocido. En síntesis, la prueba de presunciones supone la presencia de tres elementos: a) un hecho cierto y probado que sirve de

antecedente; b) un hecho presumido que es consecuencia necesaria e ineludible del hecho conocido; y c) un razonamiento lógico que sirve de nexo entre el hecho conocido y el hecho presumido.

La presunción es pues, una conjetura que lógicamente deducimos del modo en que generalmente se comportan los seres humanos o los fenómenos naturales, o una conjetura que la ley nos impone.

Los indicios, por su parte, son las circunstancias o antecedentes (los hechos conocidos o probados) que autorizan a fundar esa conjetura (presunción) acerca de la existencia del hecho desconocido. Indicios vehementes son aquellos hechos conocidos o probados que mueven con tanta fuerza la mente del juez a creer una cosa, que ellos por sí solos equivalen a prueba semiplena.

De lo expuesto se deduce que hay una relación de causa y efecto entre los indicios y las presunciones: El indicio es el hecho o circunstancia conocidos que lleva a la ley o al juez a la presunción de la existencia del hecho desconocido.

b.- Clases de presunciones

Como nos señala el art. 1379 Pr., las presunciones pueden ser legales o humanas (llamadas también presunciones judiciales).

Las presunciones legales son establecidas expresamente por la ley o son consecuencia inmediata y directa de ella (art. 1380 Pr.). Se subdividen en presunciones de Derecho (llamadas también presunciones absolutas o presunciones *iuris et de iure*) y presunciones simplemente legales (llamadas también presunciones relativas o presunciones *iuris tantum*).

Las presunciones humanas son aquellas por las que el juez, con base a hechos debidamente probados (indicios) deduce la existencia un hecho desconocido que es consecuencia necesaria o infalible de aquel (art. 1381 Pr.)⁶¹.

c.- Requisitos de las presunciones

En el caso de las presunciones legales de ambos tipos, quien la tiene a su favor no está obligado a probar el hecho en que se funda (por ejemplo, la presunción de buena fe en la posesión). Sin embargo, quien invoca una presunción legal debe

⁶¹ Art. 2434 C.: "Las presunciones no establecidas por la ley, quedan al prudente arbitrio del juez; pero sólo pueden admitirlo en los casos en que se reciba prueba testifical".

probar la existencia de los hechos que le sirven de base (art 2432 C.).

De acuerdo con el art. 1383 Pr., no se admite prueba contra las presunciones legales cuando la ley lo prohíbe expresamente (presunciones de Derecho)⁶², ni cuando el efecto de la presunción es anular un acto o negar una acción⁶³.

Contra las presunciones simplemente legales y contra las presunciones humanas es admisible la prueba en contrario⁶⁴.

Las presunciones humanas deben ser graves, precisas y concordantes. Son graves cuando son dignas de ser aceptadas por persona de buen criterio, produciendo en el ánimo del juzgador una impresión suficiente para hacerle creer verosímilmente en la verdad de un hecho. Son precisas cuando del hecho probado en que se fundan en todo o en parte las presunciones, no se puede extraer nada más que una consecuencia determinada, pues si se extrajese más de una evidentemente se crearía en el ánimo del juez la duda o la incertidumbre, y no la precisión. Son concordantes cuando, siendo varias las presunciones con que se quiere probar un hecho, estas no se modifican entre sí ni se destruyen unas a otras, y tienen tal enlace lógico entre sí y con el hecho probado (es decir, el indicio), que no puedan dejar de considerarse como antecedentes o consecuencias de éste (art. 1388 Pr.), de modo que forman un todo coherente y natural en el cual cada hecho indiciario toma su respectiva colocación en cuanto al tiempo, lugar y demás circunstancias: es decir, reunidas todas las presunciones, no pueden conducir a conclusiones diversas.

Las presunciones humanas solo son admisibles para probar aquellos hechos o actos que puedan probarse por testigos (art. 1386 Pr.). En los casos en que se exija prueba documental (sea *ad solemnitatem* o *ad probationem*) no se admitirán las presunciones humanas.

⁶² Por ejemplo, la presunción del art. 1746 C.: “Siempre se presume de mala fe el despojo violento”.

⁶³ Por ejemplo, la presunción del art. 987 C.: “Las disposiciones (testamentarias) en favor de personas inhábiles son **absolutamente nulas**, aunque se hagan por interpósita persona. Se tiene como personas interpuestas los descendientes, ascendientes, hermanos, o cuñados del inhábil...”.

⁶⁴ Art. 2433 C.: “Las presunciones establecidas por la ley pueden destruirse por la prueba en contrario, excepto en los casos en que la ley lo prohibiere expresamente”.

d.- Procedimiento en las presunciones

Ni el Código de Procedimiento Civil ni el Código Civil señalan un procedimiento para llevar al proceso las presunciones, por lo que es suficiente que se pruebe el hecho en que se fundan y además invocar la aplicación de ellas al caso. La prueba de tal hecho debe proponerse, admitirse y evacuarse de acuerdo al procedimiento general establecido por la ley.

e.- Valor probatorio de las presunciones

Las presunciones simplemente legales y las de Derecho producen plena prueba (art. 1390 Pr.), pero las primeras admiten prueba en contrario (art. 1391).

Las presunciones legales eximen de la carga de la prueba a la parte favorecida por ellas, trasladándola a la parte que la quiera destruir.

4.8.- La promesa deferida

a.- Concepto de promesa deferida

La promesa deferida está regulada en los arts. 2410 a 2412 y 2415 C., y 1237 a 1254 Pr.

Promesa deferida es la declaración de una de las partes sobre la verdad de un hecho. La parte que defiere se obliga a lo que diga la parte contraria.

b.- Clases de promesa

La promesa deferida puede ser decisoria, cuando tiene por objeto la decisión del fondo del juicio o incidente; o estimatoria, cuando tiene por objeto la valoración de la cosa que se litiga o del daño reclamado.

c.- Capacidad para deferir la promesa

Quien defiere la promesa y quien la acepta deben tener la libre administración de sus bienes. Si se hace por apoderado, este debe estar especialmente facultado para deferirla o para aceptar su delación, pero solo la podrá deferir a falta de otro medio de prueba, salvo autorización especial para ello.

d.- Admisibilidad de la promesa

Puede deferirse la promesa en todas las causas que pueden resolverse sin más pruebas que la confesión judicial. Por ello la promesa decisoria no puede deferirse en las causas relativas al estado civil de las personas, ni en general en las que no se pueda transigir. La promesa estimatoria sólo puede deferirse en

el supuesto de no poderse justificar la cantidad sobre la que debe recaer la sentencia.

e.- Referencia de la promesa

Si la parte a quien se defiere la promesa está obligada a prestarla, sólo podrá excusarse de ella refiriéndola a su contendor, siempre que quien la refiere tenga facultad para ello. La parte a quien se refiere la promesa no podrá excusarse de prestarla, y si se negare, se entenderá que reconoce el hecho alegado por el contendor.

f.- Valor probatorio de la promesa

La promesa deferida produce plena prueba, y el juez dictará sentencia con arreglo a ella sin más trámite.

La promesa debe rendirse a petición de parte interesada, pero en el supuesto del art. 1245 Pr. se permite al juez deferir la promesa estimatoria.

Unidad V

EL PROCESO DECLARATIVO. LA FASE DE DECISIÓN

1.- Alegatos de conclusión o bien probado

Este es un trámite especial previsto sólo para los juicios ordinarios de hecho (art. 1402 Pr.) y tiene la finalidad de brindar a las partes la oportunidad de realizar un examen metódico de la prueba propia y de la contraria, para así ilustrar al juez sobre la fortaleza de su posición y de la debilidad de la contraria, aumentando así la posibilidad de obtener una sentencia favorable.

Transcurrido el plazo para prueba o luego de que se haya practicado toda la propuesta, sin gestión de las partes o sin tramitarla si se hiciere, el juez mandará a unir a los autos las pruebas practicadas (art. 1109 Pr.) poniéndolo en conocimiento de las partes y mandando a correr traslado de los autos al actor por el plazo de seis días para que alegue de conclusión o bien probado. Una vez devuelto el expediente, voluntariamente o por apremio, se dicta un nuevo auto mandando correr traslado al demandado por los mismos seis días para que también alegue de conclusión (art. 1398 Pr.).

El art. 1399 Pr. indica el contenido del escrito de conclusión, el que debe limitarse a lo siguiente:

a.- En párrafos numerados, se expresará clara y concisamente cada uno de los hechos que hayan sido objeto del debate, haciendo un breve y metódico resumen de las pruebas que a juicio de la parte los justifiquen o contradigan;

b.- En párrafos numerados, se expresará clara y concisamente siguiendo el mismo orden de los hechos, se apreciará la prueba de la parte contraria;

c.- Se consignará lisa y llanamente si se mantienen, en todo o en parte, los fundamentos de Derecho alegados en la demanda y en la contestación. Aquí pueden alegarse otras leyes y doctrinas jurisprudenciales o científicas en que pueda fundarse la resolución de las cuestiones debatidas en el juicio, pero limitándose a citarlas sin comentario ni otra exposición que la del concepto positivo en que se estimen aplicables al caso.

2.- La Vista

La Vista constituye una etapa de oralidad en la cual las partes informan de manera directa, personal y oral al juez,

sobre los hechos que han sido objeto del debate. En la Vista del proceso debe intervenir personalmente el juez (art. 101 LOPJ).

La Vista puede tener lugar en todo tipo de proceso, y es un trámite facultativo que puede decretarse a petición de parte o de oficio en los casos que el juez considere necesario (arts. 102 LOPJ y 55 inc. 1 RLOPJ). Las partes tienen un plazo de tres días, contados a partir de la conclusión de la estación probatoria, para solicitar la realización de la vista de la causa (art. 55 inc. 2 RLOPJ).

Decidida la Vista, se señalará por auto que debe notificarse a las partes por lo menos con tres días de anticipación. El señalamiento se hará de acuerdo al riguroso orden de estar las causas en estado de sentencia definitiva. La vista se decretará en el mismo auto en que se tiene por concluida la actividad procesal y se cita para sentencia (art. 103 LOPJ).

La vista será pública, el juez dirigirá las actuaciones, otorgando la palabra a las partes o a sus apoderados, en dos oportunidades según lo convengan ellas (réplica y dúplica). Ambas tendrán el tiempo necesario y prudente para hacer sus exposiciones. Las partes podrán renunciar a su derecho a informar oralmente, y la inasistencia de una de ellas no evitará el acto ni lo viciará de nulidad. De todo lo actuado se levantará acta que firmará el juez, las partes que concurrieron y el secretario que autoriza, y esta acta formará parte del expediente del proceso (art. 104 LOPJ). La vista sólo se suspenderá por caso fortuito o fuerza mayor (art. 105 LOPJ).

3.- Diligencias para mejor proveer

Después de la vista y antes del fallo, el juez puede acordar las medidas de que habla el art. 213 Pr. para mejor proveer:

a.- Que se traiga al vista cualquier documento que crea conveniente para esclarecer el derecho de las partes;

b.- Exigir la confesión judicial a cualquiera de las partes sobre hechos que estimen de influencia en la cuestión y que no resulten probados;

c.- Que se practique cualquier avalúo o reconocimiento que se reputa necesario, o que se amplíen los que ya se hubieren hecho;

d.- Traer a la vista cualesquiera autos que tengan relación con el pleito;

e.- La inspección personal del objeto de la cuestión;

f.- El informe de peritos;

g.- La comparecencia de testigos que hubiesen declarado en el juicio, para que aclaren o expliquen sus dichos oscuros o contradictorios.

Todas estas medidas son actos de instrucción realizados oficiosamente por el órgano jurisdiccional para poder formar su propia convicción sobre el material probatorio del litigio.

En opinión de la Corte Suprema de Justicia, estas medidas se dictan en interés de la más recta administración de la justicia y no en interés de las partes, las cuales no pueden exigir las ni oponerse a ellas⁶⁵. Esta opinión se contradice con el art. 2025 Pr. *in fine*⁶⁶, que insinúa que en algunos casos las partes tienen derecho a solicitarlas. Sin embargo, tal como se desprende de su naturaleza y como lo sostiene consistentemente la doctrina, las diligencias para mejor proveer no sustituyen ni suplen la carga probatoria que recae sobre las partes, siendo su única finalidad encontrar dentro de las pruebas aportadas por las mismas partes un mejor material de convicción, corrigiendo desviaciones o imperfecciones en la recepción de los medios probatorios. Es por esa razón que el art. 213 Pr. niega a las partes recurso contra las providencias que las ordenan y niega también intervención que no sea acordada por el juez.

4.- Modos de terminar el proceso

El proceso termina normalmente en virtud de sentencia definitiva que resuelve las pretensiones y defensas de las partes.

También existen modos anómalos de terminar con la relación procesal. Estos son: la caducidad, el desistimiento, el allanamiento, la conciliación o avenimiento, el arbitraje, la extinción de la relación sustantiva y la transacción.

Muchos autores los agrupan en actos de las partes (autocomposición) y actos del juez (heterocomposición). Los primeros encierran tres figuras bien delineadas: el desistimiento, el allanamiento y la transacción, pero comprenden también otras no bien definidas, como la confesión y la retractación en los delitos de injurias y calumnias en

⁶⁵ B.J. págs. 15860, 16312, 8 de 1965 y 147 de 1968.

⁶⁶ Art. 2025 Pr.: "Sin necesidad de recibir el pleito a prueba podrán pedir los litigantes desde que se les entreguen los autos en traslado hasta la citación para sentencia lo dispuesto en el Arto. 213. El tribunal en los casos de los incisos 3°, 5°, 6° y 7° lo acordará si lo cree conveniente".

materia penal. Los segundos se reducen a la sentencia que decide el fondo del asunto.

A la anterior división otros autores le agregan dos más: por inactividad de las partes (caducidad) y por hechos que impidan la continuación del proceso (muerte del cónyuge en el divorcio, o del reo en el proceso penal, amnistía sobre delitos pendientes de enjuiciamiento, la confusión de derechos, etc.).

Por otra parte se considera que la conciliación y el avenimiento no son formas de terminar el proceso, sino instrumentos que pueden conducir al desistimiento, a la transacción o al allanamiento. También se piensa que el arbitraje no extingue el proceso sino que es más bien un sustituto del mismo.

4.1. La Sentencia

4.1.1.- Concepto de sentencia

Sentencia es la decisión del juez o tribunal, tomada sobre la base de la consideración de los hechos alegados y probados por las partes en el proceso y al Derecho aplicable, acerca del caso concreto que ha sido sometido a su conocimiento, y que pone fin a un procedimiento judicial, sea que recaiga sobre un incidente dentro del proceso, sea que recaiga sobre el fondo del asunto que se discute.

La sentencia contiene siempre una declaración de voluntad del juez o tribunal, en la que se aplica el Derecho a un caso concreto.

4.1.2.- Estructura lógica de la sentencia

Toda sentencia es en sí misma un juicio⁶⁷, una operación mental de carácter crítico: el Juez elige entre la tesis del actor

⁶⁷ **Juicio** es todo pensamiento del que puede decirse que es verdadero o falso, y que contiene una relación enunciativa entre conceptos. Se clasifican: de acuerdo a la **calidad**, en *afirmativos* (el hombre es mortal) y *negativos* (las ballenas no son peces); según la **cantidad**, en *universales* (todas las aves ponen huevos) y *singulares* (este perro es ovejero); según la **modalidad**, en *apodícticos* o *forzosos* (moriré algún día), *asertóricos* o *libres* (José está a la derecha de Óscar) y *problemáticos* o *prorables* (mañana tal vez llueva); según la **relación**, en *hipotéticos* o *condicionales* (el hombre es responsable, si es libre), *disyuntivos* o *de doble alternativa* (el Universo ha sido creado en un momento dado, o tiene una edad infinita) y *asertóricos* o *incondicional* (el hombre es libre). Se llega al juicio a través del **razonamiento inductivo** llamado **silogismo**, compuesto por una **premisa mayor** de carácter general (todos los seres humanos son mortales), una **premisa menor** de carácter singular (Juan es un ser humano) y una **conclusión**, que constituye el **juicio** (entonces, Juan es mortal).

y la del demandado (o eventualmente una tercera) la solución que le parece ajustada al Derecho y a la justicia.

Esta labor se desenvuelve a través de un proceso intelectual cuyas etapas pueden irse aislando separadamente y al que la doctrina llama formación o génesis lógica de la sentencia.

Durante mucho tiempo un buen sector doctrinal a concebido la sentencia como el resultado de un simple silogismo, en el cual la ley sería la premisa mayor, los hechos (el caso concreto) serían la premisa menor; y la decisión del juez la conclusión: si la ley dice que comete delito de homicidio el que priva de la vida a otro y tendrá como pena de 6 a 14 años de presidio, y Juan mata a Pedro, la conclusión lógica es que Juan debe recibir una condena de 6 a 14 años de prisión. Si la ley dice que todo el que causa un daño a otro esta obligado a repararlo e indemnizar al afectado, y Mario causa un daño a José, la conclusión lógica es que Mario será condenado a pagar la correspondiente indemnización a José.

Pero tal idea no es exacta, pues la labor real del juez para llegar a dictar la sentencia definitiva no es tan mecánica, no se reduce a formular un silogismo, sino que es mucho más intensa y compleja, constando de varias fases bien diferenciadas:

a.- Examen preliminar del caso a decidir

Antes que nada, el juez debe determinar si la pretensión del actor debe ser admitida o rechazada.

Por ejemplo, si la demanda solicita el divorcio, y no se acredita la existencia del vínculo matrimonial, tal pretensión debe ser rechazada in limine litis, sin necesidad de entrar al análisis de los hechos. Si se pide la ejecución de una hipoteca en la vía ejecutiva singular y no se acompaña la demanda con la constancia del Registro Público de estar vigente la obligación y la hipoteca, también deberá rechazarse la pretensión sin más trámite, pues la presentación de esa constancia es un presupuesto esencial para ejercitar esa acción.

b.- Examen crítico de los hechos

Realizado éste análisis preliminar, y determinada por el juez la admisibilidad de la demanda, se entra al análisis de los hechos del caso.

Para ellos se basa en el conjunto de hechos narrados por las partes en sus escritos de demanda y contestación, y en las pruebas que las partes han producido para depararle la convicción de la verdad y permitirle efectuar la verificación de

sus respectivos alegatos. Realiza pues una reconstrucción histórica de los hechos que han dado origen al proceso.

Una vez reconstruidos los hechos, el juez se ve en la necesidad de realizar un diagnóstico concreto: mediante un esfuerzo de abstracción intelectual, el juez trata de reducir los hechos concretos a la hipótesis general (o tipo jurídico) contenida en una figura jurídica determinada: por ejemplo, cuando se dice que los padres son responsables del daño causado por sus hijos menores de quince años que habiten en su misma casa, y que en defecto de los padres son responsables los guardadores o encargados del menor, se trata de la figura de cuasidelito (art. 2511 C.).

El objetivo de esta actividad del juez es reducir los hechos del caso concreto a figuras jurídicas comunes y conocidas, pero sin aplicar aun el Derecho a los hechos. Este simple esfuerzo de abstracción mental, permite al juez reducir los hechos a sus contornos jurídicos más simples y manejables.

c.- Aplicación del Derecho a los hechos

Reducidos los hechos a tipos o figuras jurídicas determinadas, el juez entra a la fase de determinación del Derecho aplicable. Se trata de determinar si al hecho reducido a tipo jurídico le es aplicable la norma A o la norma B; si el cuasidelito conlleva la responsabilidad civil o si se rige por la norma que releva de la obligación de indemnizar, etc.

Esta operación recibe el nombre de subsunción, y consiste en establecer el enlace lógico entre la situación particular, específica y concreta que es objeto del proceso, con la previsión abstracta, genérica e hipotética contenida en la ley. El hecho concreto determinado y configurado por el juez pasa a confundirse con la categoría genérica, abstracta e hipotética prevista por el legislador.

En esta actividad, el juez no está atado a las normas jurídicas por las partes en sus pretensiones y defensas, sino que es libre de elegir el Derecho que cree aplicable, según su ciencia y su conciencia.

Por ello es una obligación del juez motivar su fallo. La motivación del fallo es un deber administrativo del juez, que la ley le impone para posibilitar la fiscalización de su actividad intelectual frente al caso, de manera que pueda comprobarse que su decisión es un acto reflexivo, emanado de un estudio de las circunstancias particulares, y no un acto arbitrario de su voluntad autoritaria. Una sentencia sin motivación priva a las

partes del más elemental de sus poderes de fiscalización sobre los poderes reflexivos del juez.

Expresa Calamandrei sobre la fundamentación de la sentencia: *“La motivación de las sentencias es, verdaderamente, una garantía grande de justicia, cuando mediante ella se consigue reproducir exactamente, como en un croquis topográfico, el itinerario lógico que el juez ha recorrido para llegar a su conclusión; en tal caso, si la conclusión es equivocada, se puede fácilmente determinar, a través de la motivación, en qué etapa de su camino perdió el juez la orientación”*.⁶⁸

d.- La decisión o fallo

Hecha la elección de la norma aplicable, se entra a la última etapa: la decisión, la cual sólo puede ser estimatoria o desestimatoria de la demanda, porque en último término el juez debe resolver si la demanda debe ser acogida o rechazada.

A través del proceso crítico que acabamos de reseñar, el juez concluye en la solución o fallo favorable o adverso al actor, pronunciándose en definitiva por el acogimiento o rechazo de la demanda.

De todo lo dicho, se colige que la sentencia no se agota en una simple operación lógica, aunque esta juegue un papel preponderante en el razonamiento del juez. La sentencia también reclama la contribución de los conocimientos científico-jurídicos del juzgador, y de su experiencia personal, apoyada en el conocimiento que tiene el sobre el mundo y las cosas. El juez no es una maquina de razonar, ni la sentencia es una cadena de silogismos. Es, ante todo, una operación humana, de sentido crítico, en la cual la función más importante recae en el juez como ser humano y como sujeto volitivo.

4.1.3.- Forma de la sentencia

Al mismo tiempo que un hecho y un acto jurídico, la sentencia es un documento, elemento material, indispensable en un Derecho evolucionado para reflejar la existencia del fallo judicial y permitir sus efectos hacia el mundo jurídico.

Existe ya sentencia en el ánimo del juez o tribunal mucho antes del otorgamiento de la pieza escrita, pero para que esa sentencia sea perceptible y conocida, se requiere la existencia de una forma mediante la cual se representa y refleja la

⁶⁸ Elogio de los Jueces. Ob. cit. pag. 175.

voluntad del juez o tribunal de cara a las partes y a los terceros.

En el Derecho nicaragüense el texto de la sentencia se redacta de la forma siguiente:

a.- El encabezado. Este contiene la denominación del juzgado que emite la resolución, y el lugar, hora y fecha de la misma;

b.- El “Vistos... Resulta”. Es la parte histórica de la sentencia, y consiste en una relación sumaria y ordenada de los autos, actos y diligencias practicados por el órgano jurisdiccional, y de los escritos, pruebas y alegatos de las partes y que constan en el expediente del proceso, los cuales sirven de base al juez para realizar sus consideraciones acerca del caso (art. 436 incs. 1 a 3 Pr.);

c.- Los “Considerandos”. Es la parte analítica de la sentencia, y en ella el juez pasa a estudiar lógica y críticamente los hechos, pruebas y alegatos deducidos por las partes en el proceso y su relación con el Derecho aplicable, con el fin de fundar en éste análisis su fallo (art. 436 inc. 4 y 5 Pr.);

d.- El “Por Tanto”. Es la parte resolutive de la sentencia, en el cual el juez, sobre las bases de las conclusiones a las que arribo en la parte considerativa, aplica las normas sustantivas que corresponden y dicta su fallo, estimando o desestimando la demanda del actor (art. 436 inc. 6 Pr.);

e.- Las firmas. La sentencia debe estar firmada por el juez que la dicta y el secretario del Despacho que autoriza, pues sin ellas carece de validez formal⁶⁹.

4.1.4.- Clasificación de las sentencias

Las sentencias se clasifican en sentencias interlocutorias (simples, con fuerza de definitiva y con fuerza definitiva) y definitivas.

A.- Sentencias interlocutorias

a.- Sentencias simplemente interlocutorias

Son las que deciden solamente un artículo o incidente del pleito, sin poner término al juicio.

⁶⁹ Art. 444 Pr.: “Las sentencias definitivas o interlocutorias que pongan término al juicio son nulas por no estar autorizadas por las autoridades que la dictaron y los secretarios o notarios respectivos”.

Ejemplos de ellas son: la resolución que declara sin lugar la caducidad, la que resuelve las excepciones dilatorias, la que manda a tramitar las excepciones dilatorias, la que desecha la cosa juzgada opuesta como dilatoria, la que declara la caducidad en primera instancia.

b.- Sentencias interlocutorias con fuerza de definitiva

Son las que deciden un incidente y que hacen imposible la continuación del juicio.

Ejemplos de ellas son: la declaración de la deserción de la acción o del recurso, la que declara improcedente el recurso, las que acogen la cosa juzgada, la transacción y el finiquito opuestas como dilatorias, las que declaran la caducidad del recurso, etc.

Estas sentencias afectan en forma indirecta el fondo del asunto, pues impiden que se vuelva a discutir el derecho sustancial invocado en el juicio (por ejemplo: la resolución se contrae a declarar la deserción, la caducidad o la improcedencia del recurso, trae como consecuencia que la sentencia definitiva recurrida haga tránsito a cosa juzgada).

c.- Sentencias interlocutorias con fuerza definitiva

Son aquellas que se dan sobre incidentes y que, si bien pueden considerarse con fuerza de definitivas en razón de que ponen término a un incidente, no lo son, sin embargo, por que no ponen término al juicio.

Dentro de estas sentencias se encuentran las que deciden sobre la remoción de un depositario, la que otorga el beneficio de pobreza, el aseguramiento de los bienes litigiosos, etc.

B.- Sentencias definitivas

Es la que se da sobre todo el pleito o causa y acaba con el juicio, absolviendo o condenando al demandado. A ellas se refiere también el art. 413 Pr., que dice: *"Sentencia es la decisión legítima del juez o tribunal sobre el pleito o causa ante él controvertido"*.

Con apoyo en el derecho sustancial acogido, las sentencias definitivas se subdividen a su vez en:

a.- Sentencias de condena. Las que imponen al demandado el cumplimiento de una prestación (un dar, un hacer o un no hacer).

b.- Sentencias meramente declarativas. Las que declaran la existencia o inexistencia de un derecho o relación jurídica.

Por ejemplo la que declara la nulidad de un instrumento público.

c.- Sentencias constitutivas. Las que constituyen, modifican o extinguen un estado jurídico. Por ejemplo, la que decreta el divorcio.

Por el sentido de la declaración que contienen, las sentencias definitivas se clasifican en:

a.- Sentencias estimatorias. Las que acogen la pretensión del demandante y, en su caso, condenan al demandado.

b.- Sentencias desestimatorias. Las que rechazan la pretensión del demandante y, en su caso, absuelven al demandado.

Por la materia a que se refieren, las sentencias definitivas se dividen en:

a.- Sentencias de fondo. Las que resuelven sobre la pretensión material, juzgando el derecho sustantivo subyacente al proceso, causando cosa juzgada material.

b.- Sentencia de forma (o absolutorias de instancia). Las que dejan sin juzgar el fondo, refiriéndose exclusivamente a cuestiones procesales relevantes. Es decir, concluyen sólo la relación jurídica procesal (el proceso fenece), sin trascender a cosa juzgada material.

4.1.5.- Efectos de las sentencias

Las sentencias producen los efectos de acción y excepción de cosa juzgada⁷⁰ y de desasimio del juez o tribunal. Los dos primeros efectos ya fueron estudiados en la Unidad IV, por lo cual nos limitaremos aquí al estudio del desasimio.

El efecto de desasimio consiste en que una vez autorizada una sentencia definitiva no podrá el juez o tribunal que la dictó alterarla o modificarla en manera alguna (art. 415 Pr.: *"Autorizada una sentencia definitiva, no podrá el juez o tribunal que la dictó alterarla o modificarla en manera alguna. Podrán sin embargo, a solicitud de parte, presentada dentro de*

⁷⁰ Art. 437 Pr.: "Las sentencias definitivas o interlocutorias firmes producen la acción o excepción de cosa juzgada..."; Art. 438 Pr.: "Se entiende por sentencia firme aquella contra la cual no hay recurso alguno ordinario ni extraordinario, ya por su naturaleza, ya por haber sido consentida por las partes"; Art. 439 Pr.: "Transcurridos los términos para preparar, interponer o mejorar cualquier recurso, sin haberlo utilizado, quedará de Derecho consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada la resolución a que se refiera, sin necesidad de declaración expresa sobre ello".

veinticuatro horas de notificada la sentencia, aclarar los puntos oscuros o dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia o hacer las condenaciones o reformas convenientes, en cuanto a daños y perjuicios, costas, intereses y frutos”.

4.2.- Formas anómalas de terminación del proceso

4.2.1.- La caducidad de la instancia

a.- Concepto y fundamento de la caducidad de la instancia

la caducidad de la instancia consiste en la terminación del proceso por el abandono que de él hacen las partes.

La caducidad de la instancia o del recurso es una sanción que la ley impone a las partes por su negligencia en gestionar por escrito el curso del proceso.

Dos son los fundamentos por los cuales la ley ha establecido la sanción de caducidad de la instancia:

i.- Los derechos y defensas invocados en el proceso no pueden permanecer por largo tiempo en forma incierta e insegura. Esta situación va contra la seguridad jurídica.

ii.- Se presume que las partes no quieren continuar con el juicio al no gestionar su avance.

b.- Plazo para que opere la caducidad de la instancia

En primera instancia la caducidad se produce transcurridos ocho meses, en segunda instancia se produce a los seis meses y en casación a los cuatro meses (art. 397 Pr.). Si durante esos plazos las partes no instan el curso del juicio, se producirá la caducidad.

Los plazos señalados en el Arto. 397 Pr. se interrumpen únicamente por gestión escrita de los litigantes que conduzca real y directamente a la prosecución del proceso⁷¹; y sólo se suspenden por vacaciones judiciales, o por caso fortuito o fuerza mayor.

La caducidad puede ser declarada de oficio por el juez o a petición de partes, y obra de pleno Derecho o por sólo el ministerio de la ley⁷², lo que significa que se produce y debe considerarse existente desde el momento en que se vence el

⁷¹ S. 11:00 a.m. de 14 de junio de 1933, B.J. pág. 8282.

⁷² S. 11: 40 a.m. de 16 de octubre de 1975, B.J. pág. 274.

plazo que la ley indica para cada fase del proceso, aunque no se haya solicitado su declaración, y que las gestiones posteriores que los litigantes realicen no la convalidan, pues una vez producido el abandono, el proceso fenece y no puede reavivarse ni por acuerdo de las partes, ni antes ni después de dictada la sentencia que lo declara⁷³.

Sin embargo, la caducidad se puede interrumpir haciendo la gestión pertinente que conduzca real y directamente a la prosecución del juicio. Si los autos están en traslado, por ejemplo, la gestión pertinente es pedir su devolución.

c.- Efecto de la caducidad de la instancia sobre el derecho material invocado en la demanda

Si el juicio se encuentra en primera instancia, la caducidad no extingue el derecho sustantivo invocado en la demanda (art. 404 Pr.: *“La caducidad de la primera instancia no extingue la acción, la cual podrá ejercitarse de nuevo en el juicio correspondiente, entablando nueva demanda, si dicha acción no hubiere prescrito con arreglo a derecho”*).

Si el juicio se encuentra en apelación o casación, la sentencia firme de caducidad da lugar a que la sentencia de primera instancia recurrida haga tránsito a cosa juzgada.

d.- Casos en que no puede alegarse la caducidad de la instancia

No puede alegarse la caducidad:

i.- En las diligencias de ejecución de sentencia (art. 403 Pr.);

ii.- En los juicios de quiebra o concurso de acreedores, división o liquidación de la herencia, sociedades o comunidades, de deslinde y amojonamiento, distribución de agua, consentimiento para contraer matrimonio y los sometidos a arbitramentos. (Esta excepción se refiere únicamente a la primera instancia y no a los recursos que se puedan dar en estos juicios);

4.2.2.- El desistimiento

a.- Concepto y fundamento legal del desistimiento

El desistimiento consiste en el retiro que de la demanda hace el actor.

⁷³ S. 10:35 a.m. de 21 de agosto de 1978, B.J. págs. 235.

El art. 385 Pr. expresa que el que haya intentado una demanda puede desistir de ella en cualquier estado del juicio, manifestándolo así ante el juez o tribunal que conoce del asunto.

b.- Efectos del desistimiento

Si el desistimiento se presenta en primera instancia antes de notificarse el auto de emplazamiento, la sentencia que lo acoge no extingue el derecho sustantivo invocado por el actor. Este desistimiento se resuelve sin trámite alguno.

Si el desistimiento se hace con posterioridad a la notificación del emplazamiento, será tramitado y la sentencia que lo acoja producirá la extinción del derecho sustantivo invocado por el actor. El art. 389 Pr. dice: "La sentencia que acepta el desistimiento, haya o no habido oposición, extinguirá las acciones a que él se refiera, con relación a las partes litigantes y a todas las personas a quienes habría necesariamente afectado la sentencia del juicio a que se pone fin, no pudiendo intentarlas de nuevo".

Si el juicio se encontrare en apelación o casación, el desistimiento puede ser de la demanda o del recurso. En el primer caso, la sentencia que admite el desistimiento es la ejecutoria. En el segundo es la sentencia recurrida. El desistimiento del recurso será acogido por el tribunal sin trámite alguno.

4.2.3.- El allanamiento

a.- Concepto y fundamento del allanamiento

El allanamiento es el reconocimiento que el demandado hace de los hechos y fundamentos de Derecho de la demanda.

Tiene su fundamento en que los intereses que se ventilan en el proceso civil son de orden privado, y si el interesado desea renunciar a ellos está en su derecho de hacerlo.

Sin embargo, es posible que el juez no declare procedente la acción en virtud del allanamiento, v. gr. cuando se refiere a derechos irrenunciables, o cuando el que se allanó no tiene suficiente facultad para ello.

b.- Clases de allanamiento

El allanamiento puede ser total o parcial, pero lo típico es que sea total. El allanamiento puede ser también expreso o tácito. Es expreso cuando el demandado explícitamente reconoce los hechos y el derecho invocado. Es tácito cuando el demandado ejecuta la prestación pedida.

c.- Efectos del allanamiento

El allanamiento no admite condición, pues debe ser puro y simple. Su efecto consiste en que el juez acoja la demanda y el actor pueda pasar a la vía ejecutiva.

d.- Comparación del allanamiento con la confesión

Semejanzas:

- i.- Representan derechos procesales renunciables;
- ii.- Aon actos de reconocimiento a favor de la contraparte;
- iii.- Limitan los poderes de valoración o decisión del juez.

Diferencias:

i.- La confesión se contrae a los hechos; el allanamiento, por el contrario, a la pretensión jurídica, aunque lleve implícita una confesión de los hechos. Pueden confesarse todos los hechos y no allanarse, porque se invoca otros que discute el adversario o les da una significación distinta a la de la contraparte (confesión calificada o compleja).

ii.- El allanamiento es un acto exclusivo del demandado; la confesión puede provenir de cualquiera de las partes;

iii.- El allanamiento sólo se da en primera instancia y no en la vía impugnativa. Si el demandado es recurrente, lo que cabe es el desistimiento del recurso. Si el demandado es el recurrido, lo que debe aceptarse es una transacción. En cambio la confesión puede ocurrir en la vía impugnativa;

d.- El allanamiento es un modo de terminar el proceso, en cambio la confesión es un medio probatorio que influye en la sentencia, la cual es el acto que pone fin al proceso.

4.2.4.- La transacción

a.- Concepto y características de la transacción

La transacción es un modo de terminar el proceso mediante un arreglo contractual entre las partes. Considerada como un contrato, la transacción tiene las características de ser bilateral, oneroso, generalmente conmutativa, consensual si el valor de la litis fuere menor de doscientos córdobas y solemne si pasa de ese valor.

b.- Clases de transacción

La transacción puede ser judicial o extrajudicial.

La transacción es extrajudicial cuando previene una controversia futura, y judicial cuando pone término a un pleito

pendiente, ya sea que se celebre ante el juez de la causa o ante un notario.

Existen autores que sostienen que la transacción es extrajudicial cuando se celebra fuera del juzgado, sea para prevenir un pleito futuro o para concluir uno pendiente, y que será judicial la que se celebre ante el juez. En otras palabras, para estos autores la transacción judicial es exclusivamente la que se refiere a un pleito pendiente y que es realizada ante el juez de la causa.

4.2.5.- Conciliación o avenimiento

a.- Concepto y fundamento de la conciliación

La conciliación consiste en un trámite judicial o administrativo que persigue la finalidad de concluir un litigio mediante un arreglo, logrado con la intervención de un tercero imparcial que ayuda a las partes en conflicto a encontrar una solución equitativa, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero. Puede ser parcial o total.

Su fundamento radica en el interés del Estado en ponerle fin a los conflictos entre particulares en la forma más rápida y sencilla, por así exigirlo el interés social y la seguridad jurídica, pero en la práctica esta institución cumple su finalidad con escasa eficacia.

b.- Características de la conciliación

En la conciliación, el tercero propone a las partes alternativas concretas de solución del conflicto, por lo que para poder desempeñar eficientemente su papel, el conciliador debe conocer a fondo la controversia de que se trata, a fin de estar en capacidad de proponer a las partes alternativas razonables y equitativas de solución.

Sin embargo, la función del conciliador es únicamente proponer posibles soluciones, pues su aceptación queda sujeta, en todo caso, a la libre voluntad de las partes, las que pueden aceptar o rechazar las propuestas del conciliador.

c.- Clases de conciliación

La conciliación puede darse como un trámite del juicio o como un trámite previo, en cuyo caso la autoridad que conoce de este puede ser la competente para tramitar el juicio, o bien otra de tipo judicial o administrativa.

En los juicios laborales y de inquilinato la conciliación es un trámite obligatorio; en los primeros se realiza dentro del

juicio (ante el juez de la causa) y en los segundos de manera previa (ante un funcionario municipal).

El Código de Procedimiento Civil no la contempla en forma general; pero en algunos juicios recurre a ella, como, por ejemplo, en el juicio especial de distribución de agua, en el juicio de disolución del matrimonio por mutuo consentimiento y en el juicio que surge por las diferentes acciones que se dan entre comuneros.

d.- Comparación entre conciliación y transacción

Semejanzas:

- i.- Ambas ponen término a un conflicto;
- ii.- En las dos el apoderado requiere autorización especial;
- iii.- No se pueden celebrar sobre derechos irrenunciables o en los que está en juego el orden público;
- iv.- La conciliación puede encerrar una transacción.

Diferencias:

i.- La transacción puede ser judicial o privada; la conciliación siempre se da ante una autoridad judicial o administrativa.

ii.- La transacción es un contrato civil; la conciliación es una convención que se celebra ante las autoridades competentes.

iii.- La transacción no es un trámite obligatorio; en cambio, la conciliación lo es.

iv.- En la celebración de la transacción la intervención del juez no es activa, ya que las partes por su propia iniciativa la inician y la celebran; en cambio, en la conciliación el juez participa activamente en su realización, por así disponerlo la ley.

v.- La conciliación es una figura más amplia que la transacción, ya que puede consistir en renunciaciones o concesiones unilaterales o bien bilaterales (en cuyo caso encierra una transacción); en cambio en la transacción, por ser un contrato oneroso, deben existir prestaciones o concesiones recíprocas.

vi.- La conciliación es solemne; en cambio la transacción puede ser solemne o consensual.

vii.- En la transacción las partes disfrutan amplitud para renunciar a sus derechos; en cambio, en la conciliación laboral

y de inquilinato no tiene valor la renuncia de los derechos que concede la ley.

viii.- El Código Civil equipara la transacción a la cosa juzgada; en cambio, las leyes laborales y de inquilinato no le dan a la conciliación ese carácter.

4.2.6.- La mediación

a.- Concepto de mediación

Es un medio heterocompositivo, en el que un tercero se limita a facilitar la comunicación entre las partes, a fin de que estas puedan negociar y llegar a un acuerdo que resuelva el conflicto. También se denomina interposición de buenos oficios.

Sorensen señala que la función de los buenos oficios y de la mediación consiste en producir la iniciación o la reanudación de las negociaciones entre las partes, y en ayudar a su progreso. El mediador tiene entonces un papel más pasivo que el conciliador en la solución del conflicto.

b.- Regulación legal de la mediación

En nuestro Derecho Procesal, la mediación está establecida por el art. 94 LOPJ como un trámite obligatorio previo a cualquier actuación judicial, con las excepciones establecidas en el art. 38 RLOPJ.

Recepcionada la demanda, y si esta llena los requisitos formales para ser admitida, el juez cita a las partes dentro de sexto día a la realización del trámite de mediación. Si las partes asisten, el juez las invitará a que solucionen amigablemente el litigio, haciéndoles ver el tiempo y recursos que invertirán en el proceso, y las incomodidades y molestias que este conlleva, pero se abstendrá de emitir opinión acerca de a quien asiste la razón en el conflicto.

c.- Efectos de la mediación

Si las partes llegan a acuerdo, el acta judicial en que este se consigne prestará mérito ejecutivo, teniendo el carácter de cosa juzgada, y el acuerdo alcanzado deberá cumplirse por las partes sin excusa, y sin que quepa contra lo acordado recurso alguno.

Si no se llega a acuerdo, la certificación del acta judicial en que se consigne la falta de acuerdo es requisito indispensable para seguir adelante con el proceso.

4.2.7.- El arbitraje

a.- Concepto de arbitraje

El arbitraje es un medio de solución de litigios en el que las partes deciden sustraer del conocimiento de los jueces y tribunales la decisión del conflicto y someterlo a la decisión de terceros denominados árbitros.

El arbitraje como medio para terminar con una disputa puede celebrarse antes del juicio o durante su desarrollo. Si se produce en esta última forma, el juicio se extingue y pasa al conocimiento de los árbitros.

b.- Comparación entre arbitraje, conciliación y mediación

Los árbitros juegan un papel más activo aún en la solución del litigio de lo que ocurre en el caso de la conciliación y la mediación.

En esta figura, el árbitro no se limita a ayudar a acercar a las partes litigantes (como el mediador) o a proponer a éstas alternativas de solución (como el conciliador), sino que dispone dicha solución a través de una resolución obligatoria para las partes, y que recibe el nombre de laudo arbitral.

c.- Efectos del laudo arbitral

Para que el laudo arbitral sea válido es necesario que previamente ambas partes hayan aceptado, de común acuerdo, someterse a la decisión del árbitro. Esto es debido a que el árbitro es tan solo un particular y no un funcionario público que actúa como órgano del Estado.

Es decir, el árbitro carece de *imperium* para imponer coactivamente, por sí mismo, sus resoluciones. Pues sus facultades no derivan directamente de la autoridad del Estado sino de la anuencia de las partes.

El fundamento de la obligatoriedad del laudo arbitral reside en el acuerdo previo de las partes y en la autorización que la Ley da a estas para que sometan su controversia a arbitraje.

4.2.8.- Extinción de la relación material

El proceso no es un fin en sí mismo, sino tan solo un medio para lograr un fin: el mantenimiento de la paz social a través de la resolución de los conflictos que se dan en relación al derecho material que las partes pretenden que se les tutele. Si desaparece el derecho material sobre el que versa el proceso judicial, éste se extingue por falta de objeto.

Existen ciertos hechos o situaciones que al producir la extinción de la relación sustantiva (material) objeto del juicio, terminan con este. Ejemplos de ello son: la muerte de uno de los cónyuges en el juicio de divorcio; la reunión de las calidades de actor y de demandado en virtud de la confusión de las calidades de acreedor y deudor; la extinción de la obligación de garantía por la novación de la obligación principal, etc.

CUESTIONARIOS

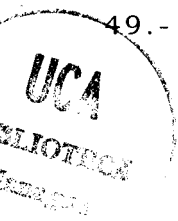
UNIDAD I LA ACTIVIDAD PROCESAL

- 1.- ¿Cuál es la diferencia entre hecho procesal y acto procesal?
- 2.- Dé una definición de acto procesal
- 3.- Desarrolle la clasificación de los actos procesales por los sujetos de los que proceden
- 4.- Desarrolle la clasificación de los actos procesales desde el punto de vista de la marcha del proceso
- 5.- Desarrolle la clasificación de los actos procesales que hace Couture
- 6.- ¿A qué se llama negocio procesal? De dos ejemplos
- 7.- Enumere y explique los requisitos de los actos procesales
- 8.- Explique la diferencia entre inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa de los actos procesales.
- 9.- En materia de nulidad de los actos procesales ¿en qué consiste el principio de especificidad?
- 10.- En materia de nulidad de los actos procesales ¿en qué consiste el principio de perjuicio?
- 11.- En materia de nulidad de los actos procesales ¿en qué consiste el principio dispositivo?
- 12.- Enumera y explique los medios de impugnación de nulidades procesales

UNIDAD II EL PROCESO DE DECLARACIÓN. EL OBJETO DEL PROCESO

- 1.- Explique el concepto de derecho de acción según Couture
- 2.- Explique la naturaleza jurídica de la acción según la teoría de la autonomía del derecho de acción
- 3.- ¿Cuáles son los elementos de la acción? Explique
- 4.- Explique la clasificación de las acciones por el criterio civilista
- 5.- Explique la clasificación de las acciones por el criterio procesalista
- 6.- ¿Cuál es la diferencia entre las acciones declarativas y las acciones constitutivas?
- 7.- ¿En qué consisten las acciones perjudiciales?
- 8.- Enumera las potestades que comprende el derecho de acción
- 9.- Qué es la acumulación de acciones
- 10.- Explique la acumulación objetiva de acciones
- 11.- En qué casos no cabe la acumulación objetiva de acciones
- 12.- Explique las clases de acumulación objetiva de acciones
- 13.- Explique el concepto de pretensión
- 14.- ¿Cuál es la diferencia entre pretensión, acción y demanda?

- 15.- ¿Cuáles son los requisitos que deben concurrir en la pretensión?
- 16.- ¿A quienes se denomina personas del proceso?
- 17.- Enumere las categorías o clases de personas del proceso
- 18.- ¿En qué consiste la capacidad para ser parte?
- 19.- ¿Quiénes tienen capacidad para ser parte?
- 20.- ¿En qué consiste la capacidad para obrar procesalmente?
- 21.- ¿Quiénes tienen capacidad para obrar procesalmente?
- 22.- ¿Quiénes carecen de capacidad para obrar procesalmente?
- 23.- ¿Cómo se suple la incapacidad para obrar procesalmente?
- 24.- ¿De qué maneras se puede comparecer al proceso?
- 25.- ¿Cuándo la parte es directa y cuando es indirecta?
- 26.- ¿Cuándo la parte es principal y cuando es accesoria?
- 27.- ¿Cuándo la parte es simple y cuando es múltiple?
- 28.- ¿Cuándo la parte es original y cuando es interviniente?
- 29.- ¿A qué se denomina litisconsorcio?
- 30.- Explique la distinción entre litisconsorcio activo, pasivo y mixto
- 31.- ¿A qué se denomina litisconsorcio voluntario o facultativo?
- 32.- ¿Cuándo el litisconsorcio facultativo es impropio?
- 33.- ¿Cuándo el litisconsorcio es obligatorio (necesario)?
- 34.- ¿Cuándo el litisconsorcio necesario es propio?
- 35.- ¿Cuándo el litisconsorcio necesario es impropio? Dé ejemplos
- 36.- ¿Cuáles son los efectos del litisconsorcio?
- 37.- ¿A qué se denomina intervención de terceros?
- 38.- ¿Cómo pueden intervenir los terceros?
- 39.- ¿Cuándo un tercero es coadyuvante? Dé dos ejemplos
- 40.- ¿Cuáles son las consecuencias de la tercería coadyuvante?
- 41.- ¿Cuáles son los requisitos para que proceda la tercería coadyuvante?
- 42.- ¿Cuándo un tercero es excluyente? Dé dos ejemplos
- 43.- ¿Cuáles son los requisitos para que proceda la tercería excluyente?
- 44.- ¿Cuáles son las únicas tercerías admitidas en el juicio ejecutivo?
- 45.- ¿Qué es la intervención forzada? Dé dos supuestos de intervención forzada
- 46.- ¿A qué se denomina sucesión o cambio de partes?
- 47.- ¿En qué casos ocurre la sucesión o cambio de partes?
- 48.- ¿En qué consiste la sustitución procesal? Dé tres ejemplos
- 49.- ¿Cuándo la sustitución procesal es normal?



- 50.- ¿Cuándo la sustitución procesal es normal?
- 51.- ¿Cuándo la sustitución procesal es anormal o extraordinaria?
- 52.- ¿Cuál es la diferencia entre sucesión procesal y sustitución procesal?
- 53.- En qué consiste la acumulación de autos
- 54.- Explique los requisitos de procedencia de la acumulación de autos
- 55.- Explique los efectos de la acumulación de autos

UNIDAD III EL PROCESO DE DECLARACIÓN. LA FASE DE ALEGACIONES

- 1.- Dé un concepto de demanda
- 2.- Explique la relación entre la demanda y la sentencia
- 3.- Cuáles son los requisitos de la demanda
- 4.- Cuáles son los efectos procesales de la demanda
- 5.- Explique la forma de la demanda
- 6.- En qué casos cabe la ampliación o rectificación de la demanda
- 7.- Qué es el trámite de mediación
- 8.- Explique brevemente el procedimiento de la mediación
- 9.- Qué es el emplazamiento
- 10.- Cómo se procede en el emplazamiento cuando es un solo demandado
- 11.- Cómo se procede en el emplazamiento cuando el demandado es uno solo y reside fuera de la circunscripción del juez de la causa
- 12.- Cómo se procede en el emplazamiento cuando son varios los demandados
- 13.- Cómo se procede en el emplazamiento cuando son varios demandados y unos viven en el lugar del proceso y otros fuera de él
- 14.- Explique el nombramiento de procurador común
- 15.- Cuáles son los efectos materiales y procesales del emplazamiento
- 16.- En qué consiste la rebeldía
- 17.- En qué casos procede la rebeldía
- 18.- Cuáles son las consecuencias jurídicas de la declaración de rebeldía
- 19.- Cómo se purga la rebeldía
- 20.- Explique la tramitación del incidente para evitar la declaratoria de rebeldía
- 21.- Qué es la contestación de la demanda
- 22.- Explique la interposición de excepciones dilatorias
- 23.- Explique cuatro excepciones dilatorias
- 24.- En qué consiste el allanamiento a la demanda

- 25.- Explique la interposición de excepciones perentorias
- 26.- Explique cuatro excepciones perentorias
- 27.- Explique la interposición de excepciones mixtas o anómalas
- 28.- Enumere y explique las excepciones mixtas.
- 29.- Qué es la contrademanda, reconvención o mutua petición
- 30.- Cuáles son los requisitos de procedencia de la reconvención
- 31.- Explique la tramitación de la contrademanda

UNIDAD IV EL PROCESO DE DECLARACIÓN. LA PRUEBA

- 1.- Sobre quién recae la carga de la prueba
- 2.- Enumere y explique los requisitos generales de la prueba en el proceso civil
- 3.- Explique los términos ordinario y extraordinario de prueba en el juicio ordinario
- 4.- Explique la ampliación y la prórroga del término probatorio del el juicio ordinario
- 5.- Explique las fases de la actividad probatoria
- 6.- Enumere los medios de prueba admitidos en materia civil
- 7.- ¿Qué sentencias pasan en autoridad de cosa juzgada material?
- 8.- ¿Cómo puede alegarse la juzgada?
- 9.- ¿A qué se considera "documento" en nuestra legislación civil?
- 10.- Desarrolle la clasificación de los documentos
- 11.- ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los documentos públicos para que tengan plena eficacia probatoria en juicio?
- 12.- Indique los casos en que no es necesario o posible aplicar la regla del cotejo
- 13.- ¿Cuáles son los requisitos para que los documentos públicos otorgados en el extranjero sean admitidos como válidos y de igual fuerza probatoria que los otorgados en Nicaragua?
- 14.- ¿Cuáles son las formas de dar autenticidad al documento privado?
- 15.- Desarrolle el procedimiento de reconocimiento de firma
- 16.- Desarrolle el procedimiento de verificación de firma
- 17.- Desarrolle el procedimiento del incidente de falsedad civil
- 18.- Defina la confesión
- 19.- Enumere las clases de confesión
- 20.- En que casos se produce la confesión judicial provocada tácita (ficta)
- 21.- ¿Cuáles son los requisitos de la confesión.
- 22.- En que casos no es admisible la prueba de confesión.

- 23.- Desarrolle el procedimiento de la confesión provocada (absolución de posiciones)
- 24.- ¿En qué casos se emplea la inspección judicial?
- 25.- Desarrolle el procedimiento de la inspección judicial?
- 26.- ¿Con cuáles otros medios de prueba puede concurrir la inspección judicial?
- 27.- ¿A quienes se denomina peritos?
- 28.- ¿Sobre qué debe recaer el peritaje?
- 29.- ¿En qué casos procede la prueba pericial
- 30.- Explique las clases de peritaje
- 31.- Desarrolle el procedimiento para el peritaje
- 32.- ¿Cómo aprecia el juez el dictamen de los peritos
- 33.- ¿A quienes se denomina testigos?
- 34.- ¿En qué casos se considera inhábil a una persona para testificar?
- 35.- Cómo se clasifican los testigos judiciales
- 36.- Cuándo es admisible la prueba testifical
- 37.- Cuándo no es admisible la prueba testifical
- 38.- Desarrolle el procedimiento de la prueba testifical
- 39.- Cómo se tramita la prueba testifical fuera del asiento del juez de la causa
- 40.- Explique la valoración de la prueba testifical
- 41.- Cuando son legalmente verdaderas las declaraciones de los testigos
- 42.- Cuándo carecen de verdad legal las declaraciones de los testigos
- 43.- Qué debe tomar en cuenta el juez para valorar la declaración de un testigo
- 44.- En qué consiste la tacha de testigos
- 45.- A qué se llama presunciones
- 46.- A que se llama ios indicios
- 47.- Explique las clases de presunciones
- 48.- Explique los requisitos de las presunciones
- 49.- Desarrolle el procedimiento de las presunciones
- 50.-Cuál es el valor probatorio de las presunciones
- 51.- A qué se denomina promesa deferida
- 52.- Explique las clases de promesa
- 53.- Quienes tienen capacidad para deferir la promesa
- 54.- En qué casos se admite la promesa
- 55.- En qué consiste la referencia de la promesa
- 56.-Cuál es el valor probatorio de la promesa

UNIDAD V EL PROCESO DE DECLARACIÓN. LA FASE DE DECISIÓN

- 1.- En qué consiste el alegato de conclusión o bien probado
- 2.- Qué es la Vista y cuál es su procedimiento
- 3.- En qué consisten las diligencias para mejor proveer
- 4.-Cuál es el propósito del auto de citación para sentencia
- 5.- A qué se denomina "sentencia definitiva"
- 6.- Como se clasifican las sentencias definitivas por el derecho sustancial acogido
- 7.- Como se clasifican las sentencias definitivas por el sentido de la declaración
- 8.- Como se clasifican las sentencias definitivas por la materia a que se refieren
- 9.- Cuáles son los efectos de la sentencia definitiva
- 10.- Cuáles son los requisitos de fondo de la sentencia definitiva
- 11.- Como se impugna la sentencia definitiva de primera instancia
- 12.- Qué es la caducidad de la instancia
- 13.- Cuáles son los plazos para que opere la caducidad de la instancia
- 14.-Cuál es el efecto de la caducidad de la instancia sobre el derecho material invocado en la demanda
- 15.- En qué casos no puede alegarse la caducidad de la instancia
- 16.- En qué consiste el desistimiento
- 17.- Qué efectos tiene el desistimiento
- 18.- En qué consiste el allanamiento
- 19.- Explique las clases de allanamiento y sus efectos
- 20.- En qué consiste la transacción
- 21.- Explique las clases de transacción
- 22.- Qué es la conciliación
- 23.- Explique las características de la conciliación
- 24.- Qué clases de conciliación existen
- 25.- Qué es la mediación
- 26.- Qué es el arbitraje
- 27.- Cuáles son los efectos del laudo arbitral
- 28.- En qué consiste la extinción de la relación material



ÍNDICE

UNIDAD I LA ACTIVIDAD PROCESAL (p. 1)

- 1.- Conceptos de hecho procesal y de acto procesal (p. 1)
- 2.- Clasificación de los actos procesales (p. 2)
- 3.- El negocio procesal (p. 3)
- 4.- Requisitos de los actos procesales (p. 4)
- 5.- Nulidades procesales (p. 5)
- 6.- Medios de impugnación las nulidades procesales (p. 9)

UNIDAD II EL PROCESO DE DECLARACIÓN. EL OBJETO DEL PROCESO (p. 11)

Sección I El Derecho de Acción (p. 11)

- 1.- Concepto de derecho de acción (p. 11)
- 2.- Naturaleza jurídica de la acción (p. 12)
 - 2.1.- Teoría clásica (privatista) de la acción (p. 12)
 - 2.2.- Doctrina germánica del derecho de acción (teoría de la autonomía de la acción) (p. 13)
- 3.- Elementos de la acción (p. 15)
- 4.- Potestades que comprende el derecho de acción (p. 16)
- 5.- Clasificación de las acciones (p. 16)
 - 5.1.- Clasificación de las acciones desde el punto de vista civilista o clásico (p. 16)
 - 5.2.- Clasificación de las acciones desde el punto de vista procesalista o moderno (p. 18)
- 6.- Acumulación de acciones (p. 20)
 - 6.1.- Concepto de acumulación de acciones (p. 20)
 - 6.2.- Acumulación objetiva de acciones (p. 21)
 - 6.3.- Acumulación subjetiva de acciones (p. 23)

Sección II La Pretensión (p. 23)

- 1.- Concepto de pretensión (p. 23)
- 2.- Distinción entre pretensión, acción y demanda (p. 23)
- 3.- Requisitos de la pretensión (p. 24)
- 4.- Efectos jurídicos de la pretensión (p. 25)

Sección III Los Sujetos Procesales (p. 25)

- 1.- Las personas del proceso (p. 25)
- 2.- Capacidad de las partes del proceso (p. 26)
- 3.- Posición jurídica de las partes (p. 29)
- 4.- Presencia y ausencia de las partes en el proceso (p. 30)
- 5.- Clasificación de las partes (p. 32)

- 5.1. Parte directa y parte indirecta (p. 32)
- 5.2. Parte principal y parte accesoria (p. 32)
- 5.3. Partes simples y partes múltiples (p. 32)
- 5.4. Partes originales y partes intervinientes (p. 32)
- 6.- Pluralidad de partes (p. 33)
- 6.1.- El litisconsorcio (p. 33)
- 6.2.- Intervención de terceros (p. 37)
- 7.- Intervención forzada (p. 39)
- 8.- Sucesión o cambio de las partes (p. 39)
- 9.- Sustitución procesal (p. 40)

Sección IV Acumulación de Autos (Acumulación de Procesos) (p. 42)

- 1.- Concepto y fundamento de la acumulación de autos (p. 42)
- 2.- Regulación legal de la acumulación de autos (p. 42)
- 3.- Requisitos de procedencia de la acumulación de autos (p. 42)
- 3.1.- Causas legales de la acumulación de autos (p. 43)
- 3.2.- Los juicios a acumularse deben encontrarse sometidos a la misma clase de procedimientos (p. 45)
- 3.3.- Los juicios a acumularse deben encontrarse en instancias análogas (p. 45)
- 4.- Clases de acumulaciones de autos (p. 46)
- 5.- Juzgado o tribunal ante el cual debe pedirse la acumulación de autos (p. 46)
- 6.- Oportunidad para pedir la acumulación de autos (p. 46)
- 7.- Efectos de la acumulación de autos (p. 46)

UNIDAD III EL PROCESO DE DECLARACIÓN. LA FASE DE ALEGACIONES (p. 49)

- 1.- La demanda (p. 49)
- 1.1.- Concepto de demanda (p. 49)
- 1.2.- Relación entre la demanda y la sentencia (p. 49)
- 1.3.- Requisitos de la demanda (p. 50)
- 1.4.- Efectos procesales de la demanda (p. 51)
- 1.5.- Forma de la demanda (p. 51)
- 1.6.- Ampliación de la demanda (p. 53)
- 2.- Trámite de mediación (p. 53)
- 2.1.- Generalidades del trámite de mediación (p. 53)
- 2.2.- Procedimiento de la mediación (p. 54)
- 3.- Emplazamiento (p. 56)
- 3.1.- Concepto de emplazamiento (p. 56)

- 3.2.- Tratamiento procesal del emplazamiento (p. 56)
- 3.3.- Efectos del emplazamiento (p. 58)
- 4.- La rebeldía (p. 59)
 - 4.1.- Casos en que procede la rebeldía (p. 59)
 - 4.2.- Consecuencias jurídicas de la declaración de rebeldía (p. 59)
 - 4.3.- Forma de purgar la rebeldía (p. 60)
 - 4.4.- Incidente para evitar la declaratoria de rebeldía (p. 60)
- 5.- Contestación de la demanda (p. 61)
 - 5.1.- Interposición de excepciones dilatorias (p. 61)
 - 5.2.- Allanamiento a la demanda (p. 64)
 - 5.3.- Negativa pura y simple de la demanda (p. 64)
 - 5.4.- Interposición de excepciones perentorias (p. 65)
 - 5.5.- Interposición de excepciones mixtas o anómalas (p. 66)
- 6.- Contrademandas, reconvencción o mutua petición (p. 67)

UNIDAD IV EL PROCESO DECLARATIVO. LA PRUEBA (p. 71)

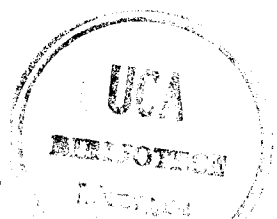
- 1.- Concepto de prueba (p. 71)
- 2.- Requisitos generales de la prueba en el proceso civil (p. 71)
- 3.- Fases de la actividad probatoria (p. 74)
- 4.- Medios de prueba en el proceso civil (p. 76)
 - 4.1.- La cosa juzgada (p. 76)
 - 4.2.- La prueba documental o instrumental (p. 77)
 - 4.3.- La prueba de confesión (absolución de posiciones) (p. 84)
 - 4.4.- La inspección del juez (p. 88)
 - 4.5.- Los dictámenes de peritos (p. 90)
 - 4.6.- La deposición de testigos (p. 92)
 - 4.7.- Las presunciones e indicios (p. 98)
 - 4.8.- La promesa deferida (p. 101)

Unidad V EL PROCESO DECLARATIVO. LA FASE DE DECISIÓN (p. 103)

- 1.- Alegatos de conclusión o bien probado (p. 103)
- 2.- La Vista (p. 103)
- 3.- Diligencias para mejor proveer (p. 104)
- 4.- Modos de terminar el proceso (p. 105)
 - 4.1. La Sentencia (p. 106)
 - 4.2.- Formas anómalas de terminación del proceso (p. 113)

CUESTIONARIOS (p. 123)

- Unidad I (p. 123)
- Unidad II (p. 123)
- Unidad III (p. 125)
- Unidad IV (p. 126)
- Unidad V (p. 128)



va más lejos



Estimado/a estudiante :

La Universidad Centroamericana se complace en tenerlo/a como estudiante de la modalidad de educación a distancia e integrante de la comunidad educativa UCA. Al configurar este nuevo entorno de enseñanza y aprendizaje le hemos preparado específicamente este texto o módulo autoformativo, con un enfoque eminentemente pedagógico, para que usted por sí mismo/a y de manera responsable e independiente, logre con facilidad los aprendizajes de la unidad curricular que desarrolla.

El texto que ahora tiene en sus manos le proporciona información relevante para su proceso de aprendizaje. En él encontrará holísticamente integrados los componentes del proceso didáctico: objetivos, contenidos, actividades, sistema de autoevaluación y procesos de retroalimentación para la autorregulación de sus aprendizajes.

Apoyarán el autoaprendizaje del módulo, profesores tutores y compañeros de grupo que periódicamente se reunirán con usted en la universidad, para aclarar, profundizar, perfeccionar y validar los conocimientos teóricos, prácticos y actitudinales obtenidos en la solución de la propuesta educativa de este módulo. De igual manera contará con asesorías individuales para reorientar y reafirmar los resultados de su estudio.

Esperamos que los logros sean los que usted, la UCA y la sociedad nicaragüense esperan. Reciba nuestro saludo y nuestra bienvenida

